



Diseño de portada y solapas:
Abraham Briones Payán

El acelerado proceso de confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19 generó cambios drásticos que afectaron en el ámbito global los sistemas de salud y de educación, especialmente al mundo del trabajo, obligando a sectores vulnerables de la población a generar estrategias de supervivencia frente a un acontecimiento para el que hoy todavía no es posible dimensionar la potencia de su alcance. Voces diversas coincidieron en señalar que nos encontrábamos en un momento de repensar el sistema económico que enfrentaba una más de sus crisis, esta vez más profunda y probablemente definitiva.

En este libro se reúnen reflexiones sobre el impacto de la pandemia en el mundo y en América Latina y el Caribe, así como sus principales implicaciones para el mundo del trabajo. Además, recogemos los testimonios de doce organizaciones de las economías popular y social, que, a través de su propia historia, nos comparten la experiencia frente a la pandemia, los obstáculos que se les presentaron y los aprendizajes que les permitieron transformar los procesos para avanzar hacia una reactivación desde abajo.

La lectura de estos casos nos plantea preguntas sobre los procesos económicos dominantes de nuestra sociedad que se rigen bajo la lógica de la acumulación, la competencia y la productividad, y nos abren una ventana para mirar la potencia que tienen, para cuidar la vida, procesos que se basan en la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación.



REACTIVACIÓN DESDE ABAJO La pandemia y la sociedad civil en América Latina



REACTIVACIÓN DESDE ABAJO

La pandemia y la sociedad
civil en América Latina

Yolanda Catalina Cruz Contreras, Alessandro
Grassi, Daniele Fini, Marcela Ibarra Mateos

COORDINADORES









REACTIVACIÓN DESDE
ABAJO

LA PANDEMIA Y LA SOCIEDAD
CIVIL EN AMÉRICA LATINA





REACTIVACIÓN DESDE ABAJO

LA PANDEMIA Y LA SOCIEDAD
CIVIL EN AMÉRICA LATINA

YOLANDA C. CRUZ CONTRERAS

DANIELE FINI

ALESSANDRO GRASSI

MARCELA IBARRA MATEOS

COORDINADORES

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA
LAINES

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA
Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe SJ
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

Reactivación desde abajo: la pandemia y la sociedad civil en América Latina/
Yolanda C. Cruz Contreras, Daniele Fini, Alessandro Grassi, Marcela Ibarra Mateos, coordinadores. Puebla, México: Universidad Iberoamericana Puebla, Laboratorio de Innovación Económica y Social 2022.

1. Trabajo -Condiciones económicas- América Latina. 2. América Latina -Condiciones económicas- Siglo XXI. 3. Crisis financiera -Aspectos sociales. 4. Pandemia de COVID-19, 2020- - Aspectos sociales. 5. Epidemias-Aspectos sociales. 6. Cuarentena-Aspectos sociales. I. Cruz Contreras, Yolanda C., editor. II. Fini, Daniele, editor. III. Grassi, Alessandro, editor. IV. Ibarra Mateos, Marcela, editor. V. Universidad Iberoamericana Puebla, Laboratorio de Innovación Económica y Social, entidad editora.

HD 6957 L29 R43.2022

Clasificación Dewey: 331.08

Primera edición, 2022

Diseño de portada: Víctor Abraham Briones Payán

DR © Universidad Iberoamericana Puebla
Blvd. Niño Poblano 2901, Reserva Territorial Atlixcáyotl,
San Andrés Cholula, Puebla, México. CP 72820
libros@iberopuebla.mx



ISBN: 978-607-8587-49-0

“Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, y en su caso, de los tratados internacionales aplicables; la persona que infrinja esta disposición, se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.”

Impreso en México
Printed in Mexico



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
PARTE I. COMPRENDIENDO LA REALIDAD SOCIAL FRENTE A LA CRISIS	13
CAPÍTULO 1. CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA	15
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA	15
<i>De las afectaciones al trabajo</i>	18
<i>Grupos de población afectados por el COVID-19</i>	20
<i>Las mujeres entre los cuidados y el trabajo remunerado</i>	21
<i>Pueblos indígenas y afrodescendientes: el círculo vicioso de la desigualdad</i>	24
<i>Jóvenes frente al impacto laboral</i>	26
<i>Confinamiento y cierre de fronteras: migrantes y refugiados</i>	27
CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS DESDE ABAJO	29
NUEVAS FORMAS DE DOMINACIÓN Y RESISTENCIA EN EL NEOLIBERALISMO	31
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, Y ECONOMÍA POPULAR	37
<i>Economía social y solidaria</i>	37
<i>Economías populares</i>	39
CUESTIONAMIENTOS DESDE ABAJO A LAS TEORÍAS Y LAS PRÁCTICAS DE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA	42
<i>Producción / Reproducción</i>	42
<i>Formal / Informal</i>	46
CONCLUSIONES	48
PARTE II. ECONOMÍA POPULAR Y ECONOMÍA SOCIAL EN LA PANDEMIA. CASOS DE ESTUDIO	51
CENTRO LOYOLA REINA <i>Alessandro Grassi</i>	55



CASA MONARCA A. C.	
<i>Alessandro Grassi</i>	61
LA FAMILIA GRANDE HOGAR DE CRISTO	
<i>Emilce Cuda</i>	67
UTEP	
<i>Emilce Cuda</i>	75
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES CAMPESINOS	
<i>Daniele Fini</i>	83
INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE TRABAJADORAS DEL HOGAR	
<i>Alessandro Grassi</i>	93
GLADIMEX	
<i>Yolanda C. Cruz Contreras</i>	99
YOMOL A' TEL	
<i>Marcela Ibarra Mateos</i>	104
LF DEL CENTRO COOPERATIVA	
<i>Yolanda C. Cruz Contreras</i>	114
LA GUÍA, COOPERATIVA DE CONSUMO Y SERVICIOS	
<i>Marcela Ibarra Mateos</i>	122
FEDECACES	
<i>Andrew Cummings y Salvador Marroquín</i>	130
APRO MUJER	
<i>Yolanda C. Cruz Contreras</i>	138
CONCLUSIONES	145
BIBLIOGRAFÍA	151



INTRODUCCIÓN

La idea de esta breve publicación nace de la convergencia de dos vectores. El primero es el trabajo llevado a cabo por el Laboratorio de Innovación Económica y Social (LAINES), de la Universidad Iberoamericana Puebla, en el marco de la iniciativa El futuro del trabajo después de la Laudato Si'. En los últimos dos años, en cuanto titulares del eje sobre justicia social y paz de esta iniciativa, hemos desarrollado una investigación que nos ha llevado a reflexionar sobre las modificaciones que ocurren en el mundo del trabajo. Hemos identificado algunas trayectorias, a lo largo de las cuales, trabajadoras y trabajadores de todo el mundo (aunque nuestra mirada se ha enfocado específicamente en América Latina), ven cambiar y, desafortunadamente, casi siempre empeorar sus condiciones de vida y las posibilidades que tienen de establecer o participar en procesos de diálogo social. El otro vector es lo imprevisto que ha sido el contagio acelerado de la pandemia de COVID-19, un evento tanto inesperado como disruptivo. En sólo pocos meses ha obligado a millones de personas a cambiar radicalmente sus vidas y a olvidarse de la cotidianidad a la cual estaban acostumbradas. Los cambios drásticos, empujados por la presencia del virus, inevitablemente han involucrado también el mundo del trabajo y, por lo tanto, los medios de sobrevivencia de la mayoría de los seres humanos. En muchos casos eso ha significado una adaptación del trabajo a las nuevas condiciones, en otros simplemente la pérdida del empleo y de los ingresos económicos.



Después de un año de pandemia, a pesar de las diferentes situaciones, herramientas y también del desigual ritmo con el cual cada país se ha enfrentado a la emergencia, en todo el mundo se sintió fuerte la exigencia de levantar las medidas de confinamiento para permitir que la economía funcionara otra vez. Los largos periodos de encierro, más o menos completos, han producido efectos desastrosos para las economías latinoamericanas. Dada la estructura de la región, el riesgo de que dichos efectos al final resulten tan negativos para las vidas de las personas, como los causados por el virus, parecen ser los mismos. Es en esta situación que los gobiernos tendrán que implementar planes de reactivación para garantizar que lo que se perdió en el tiempo de confinamiento se pueda recuperar después, limitando así los daños. Estas intervenciones corresponden y responden a una lógica que identifica al Estado como el actor principal para garantizar procesos favorables para las poblaciones más marginadas. Es de esta forma que el tema de la reactivación queda normalmente monopolizado por actores públicos y económicos institucionales y, por lo tanto, se define como mera “reactivación económica” de aquellas actividades que son reconocidas como productoras de valor económico, de ganancia.

El trabajo que aquí se presenta pretende voltear la mirada a otro lugar, buscando alternativas al dogma que tiende a considerar irrelevante la capacidad de acción que se encuentra fuera de dichos sujetos económicos y políticos. Nuestra idea es que, al lado de una reactivación económica “desde arriba”, puede ocurrir, y de hecho ya ocurre, una reactivación “desde abajo” que se articula alrededor de exigencias y deseos de esas mismas poblaciones marginalizadas. Esto les permite buscar caminos alternativos de convivencia y desarrollo que parcialmente se pueden entrelazar con el desarrollo económico clásico observado a través de los reportes de las organizaciones internacionales.

Por lo tanto, presentamos una reflexión sobre algunos casos de estudio, en varios países de América Latina, que nos muestran,



precisamente, esta capacidad de la sociedad civil de activarse, sin esperar las líneas programáticas de los gobiernos para atender nuevas necesidades y urgencias generadas por la pandemia de COVID-19. El resultado es un trabajo de visibilización de oportunidades y acciones que suelen quedar escondidas a la lente de los indicadores económicos y que, sin embargo, consisten en una “reactivación económica” en sentido amplio, no limitada a la reactivación de un ciclo capitalista enfocado en la generación de plusvalías.

También hay un último elemento que se debe mencionar: la encíclica del Papa Francisco “Fratelli tutti”, publicada en octubre de 2020. No podemos decir que es el fundamento de nuestro trabajo, sin embargo, las experiencias recolectadas y la atención para una “reactivación desde abajo” parecen responder al llamado a la solidaridad del texto de Francisco.

Para la realización de lo aquí presentado hemos aprovechado algunos de los resultados de la investigación *El futuro del trabajo después de la Laudato Si'*, en especial vínculos establecidos anteriormente con algunas organizaciones. Queremos agradecer en particular a la doctora Emilce Cuda, por apoyarnos a llevar a cabo las entrevistas y la redacción de los textos para los dos casos argentinos, y también al doctor Andrew Cummings y al maestro Salvador Marroquín, quienes elaboraron el caso de El Salvador.

La organización del texto consiste en dos grandes secciones. En la primera parte se presenta una contextualización del tema que nos ocupa y se dividió, por un lado, en el fenómeno de la pandemia alrededor del mundo y sus implicaciones a nivel global y, en particular, en América Latina y el Caribe. Por otro lado, un contexto teórico que ayude a comprender el porqué de lo que se está viviendo en la región y una presentación de conceptos económicos. La segunda parte abarca doce casos de estudio.





PARTE I

COMPRENDIENDO LA REALIDAD
SOCIAL FRENTE A LA CRISIS





CAPÍTULO 1. CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

La difusión de la infección de COVID-19 fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 (OMS, 2020). Si bien la enfermedad se originó en China en algún momento del año 2019 y el gigante oriental reaccionó al virus en el mes de enero, es sólo a partir de la explosión del número de casos en Europa (primero en Italia y luego en los demás países) que el mundo adquirió conciencia del tamaño del evento, dejando de limitarse únicamente al continente asiático.

Desde Europa la enfermedad llegó a los demás continentes y en marzo ya había alcanzado un nivel preocupante también en América Latina. Como una película en la cual las escenas se repiten en secuencia, cada país en cada continente vio sus hospitales llenarse con la primera ola y tuvo que implementar medidas de confinamiento más o menos fuertes para limitar la movilidad de las personas y la propagación del contagio.

Sin embargo, el guion de esta escena se adaptó con variaciones al contexto en el cual ocurría. En América Latina las medidas de confinamiento no fueron tan estrictas como en Europa Occidental por diferentes razones comunes a todos los países de la región: en primer lugar, los límites de la capacidad de las instituciones para imponer medidas tan fuertes y, al mismo tiempo, proveer con apoyo económico a las actividades económicas afectadas; en segundo lugar, la estructura específica de las economías latinoa-



mericanas caracterizada por un altísimo grado de informalidad y por la presencia de amplios estratos de la población en condición de vulnerabilidad.

Independientemente de las medidas adoptadas, la posición estructural de las economías latinoamericanas (la subordinación a los centros de mando de las economías estadounidense y europea) hizo que todas las economías de la región sufrieran los efectos de una crisis económica acelerada por la pandemia. El hecho de que el sistema europeo experimentara un cierre casi total de las actividades –así como ocurrió en China, la segunda economía del mundo–, implicó una desaceleración fuerte para todo el sistema capitalista mundial. La caída general del PIB mundial hoy, casi un año después del inicio de la pandemia (enero de 2021), se prevé alrededor de -3.5 %, empero, estas previsiones destacan datos especialmente negativos para los centros de la economía del planeta, zona euro -7.2 y Estados Unidos -3.4; sólo China goza de un manejo eficiente de la pandemia con una previsión de crecimiento de 2.3 % (Fondo Monetario, 2021).

Es importante señalar que los efectos económicos específicos de la pandemia en América Latina llegaron a golpear al continente que ya estaba en una peculiar situación económica que difícilmente podría no definirse como crisis. Al menos, destacan tres elementos para caracterizar las economías latinoamericanas antes de la pandemia, los tres han ido acentuándose en el curso del año 2020.

Primero, la pobreza que caracteriza al continente. Sin poder ser considerada la región más pobre del mundo, en los reportes de CEPAL frecuentemente se habla de América Latina como la región más desigual (Hebrero, 2020). Si se considera el índice Gini –la herramienta más común para medir la desigualdad– varios países de América Latina y el Caribe figuran entre los peores. América Latina tiene un promedio de 46.5 mientras las dos principales economías que son México y Brasil, respectivamente, cuentan con un índice Gini de 45.4 y 53.9. Destaca que, si generalmente en el continente



la brecha de desigualdad se redujo en la primera década del 2000, después del año 2015 la tendencia se ha frenado o hasta revertido, aunque de forma contenida (CEPAL, 2019). Es pertinente subrayar el hecho de que la desigualdad relativa se reduce, aunque eso no significa que paralelamente disminuye la desigualdad absoluta. La CEPAL (ídem) indica que, en realidad, en varios países de América Latina dicha desigualdad ha ido creciendo. Ya en un informe del año 2016, Oxfam y CEPAL notaban cómo en 2014, el 10 % más rico de la población controlaba el 71 % de la riqueza de la región.

Segundo, la alta tasa de informalidad de la economía que caracteriza a la región. Esto se vuelve especialmente importante durante el tiempo de la pandemia en relación con la capacidad de estructurar un sistema de bienestar que tradicionalmente se vincula con el trabajo formalizado. Según un estudio del año 2018 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la región de América Latina y el Caribe, la tasa de empleo informal se estimó alrededor de 53 % (Salazar y Chacatlana, 2019).

En tercer lugar, las economías de América Latina se caracterizan por una historia más o menos común que, desde los años ochenta, implementó doctrinas neoliberales enfocadas a la privatización y la liberalización de los sectores de la economía con una mayor concentración en el sector extractivista. Aunque estas políticas no necesariamente cambiaron de signo durante los primeros 15 años de este siglo, sí destaca en esa época un crecimiento bastante fuerte de todas las economías y un relevante decrecimiento de la pobreza absoluta en favor de un crecimiento de las clases medias. Sin embargo, esta tendencia, en los últimos cinco años, se ha detenido y en general las economías de la región han experimentado tiempos de recesión económica o una fuerte desaceleración. La pandemia llegó en este contexto y sus efectos no tardaron en trasladarse a la dimensión económica, causando una caída del PIB prevista por CEPAL alrededor del 7.7 % (CEPAL, 2020: 115).



El principal efecto ha sido la caída del comercio de bienes duraderos y las exportaciones dado que las economías latinoamericanas dependen en gran parte de los mercados de Estados Unidos y Europa. De hecho, la llegada de la pandemia cuestiona el desarrollo del proceso de globalización en la forma en que ocurrió en los últimos 30 años, a través de una creciente interdependencia entre economías y la estructura de cadenas de valor extendidas a todo el planeta. La disrupción de estas cadenas es un elemento central de la crisis económica actual.

Aparte del sector del comercio, algunos otros sectores quedaron fuertemente afectados; éstos fueron: turismo, industria cultural tradicional (los eventos como conciertos y festivales), la reparación de bienes, los hoteles y los restaurantes, el transporte, la moda (CEPAL, 2020a: 4) y el muy importante sector automotriz. Se estima que 34.2 % del empleo formal y 24.6 % del PIB de la región corresponden a estos sectores (CEPAL, 2020a: 4).

Tal como lo hemos planteado líneas arriba, la pandemia por COVID-19 ha visibilizado la vulnerabilidad de un sistema económico global cuyas cadenas de valor tienen una enorme dependencia transnacional y se ven comprometidas frente al cierre de fronteras ante la crisis sanitaria. Las medidas de confinamiento han profundizado desigualdades históricas poniendo en riesgo particularmente a ciertos sectores de la población. En este sentido, el trabajo formal, pero, sobre todo el informal, las mujeres como una parte importante de la fuerza de trabajo de la región, así como los pueblos indígenas se han convertido en las principales víctimas de esta pandemia.

De las afectaciones al trabajo

En particular destaca que América Latina y el Caribe es la región con la mayor contracción en todo el mundo, casi el 21 %, el doble del promedio global que es de 11 % (OIT, 2021: 28). Las afectaciones a la economía y al empleo en el momento más intenso de la implementación de las medidas de contención sa-



nitaria –segundo trimestre de 2020–, han sido estimadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y podemos ubicarlas en tres categorías.

Una primera se sitúa en la caída del número de horas de trabajo a nivel mundial correspondiente a -16.2 % (OIT, 2020:13). Las afectaciones más importantes se encuentran en el sector informal (ibíd.: 5). En la región de América Latina y el Caribe las pérdidas de horas de trabajo han sido estimadas en -33.5 % durante el segundo trimestre y -25.6 % en el tercero (ib.: 6).

La segunda se vincula con la pérdida de empleos que, en especial, ha afectado a las trabajadoras mujeres (aunque con algunas excepciones, como en el caso de México), lo cual se ha manifestado principalmente en términos de aumento de la tasa de inactividad, personas que no trabajan, ni buscan trabajo, más que en la tasa de desempleo (ibíd.: 10).

Una tercera, relacionada con las dos anteriores, se vincula con la disminución de los ingresos de los trabajadores dependientes, estimada para los tres primeros trimestres de 2020 en -10.7 % a nivel mundial respecto al mismo periodo del año anterior, y -12.1 % para el caso del continente americano (OIT, 2020c: 10-12). Los empleados en condiciones laborales de informalidad representan a los trabajadores que más han sufrido las consecuencias negativas de la crisis. Con respecto a este grupo –que, como hemos visto, en América Latina representa a 53.1 % de los empleados totales (OIT, 2020d:48)– se estimó que en el primer mes de la crisis pudo haber padecido una disminución del 81 % de sus ingresos (OIT, 2020a). A esta situación se agrega la mayor causa de vulnerabilidad de estos trabajadores y es que, generalmente, no gozan de protección social, ni han accedido a las medidas gubernamentales de apoyo durante la pandemia (OIT, 2020c:12).

La CEPAL estima que cerrarán más de 2.7 millones de empresas formales en la región, con una pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las



empresas que seguirán operando. Aunque la crisis afecta a todas ellas, el impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas y las PYMES, por su peso en la estructura empresarial de la región, que se traducirá en grandes cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo.

La contracción del empleo doméstico con hogares como empleadores ha implicado también un severo golpe para gran cantidad de familias vulnerables a quienes pertenecen muchas de las trabajadoras que se desempeñan en estas labores (ONU, Mujeres, 2020). Se estima que 34.2 % del empleo formal y 24.6 % del PIB de la región corresponden a sectores fuertemente afectados por la crisis derivada de la pandemia. Más aún, menos de la quinta parte del empleo y del PIB se generan en sectores que serían afectados sólo de forma moderada (CEPAL, 2020a).

Finalmente, la diferenciación entre el empleo asalariado privado y público es relevante ya que en todos los países que presentan información diferenciada, el empleo público destaca por su estabilidad, que contrasta con la fuerte contracción del empleo privado (CEPAL, 2020b). Sin embargo, es claro que el sector más seguro es el del trabajo asalariado público, mientras el sector privado, sea asalariado o independiente, es el más afectado. En general, después de los primeros meses se registró un crecimiento en la tasa de la informalidad. No se trata de una reactivación económica, sino de la necesidad de las personas de bajos recursos que perdieron su trabajo y buscaron formas alternativas de generar ingresos (CEPAL, 2020b). De hecho, fueron las propias clases más bajas y activas del sector informal las mayormente afectadas.

Grupos de población afectados por el COVID-19

En la región de América Latina, tal como se ha planteado líneas arriba, ciertos mercados laborales han sufrido y sufrirán un impacto mayor frente a la crisis económica provocada por el COVID-19. Así también, algunos grupos poblacionales sufren ya



de manera mucho más profunda las consecuencias de esta crisis. De algunos de ellos sólo tenemos incipientes indicios de que así será, particularmente por lo que otras crisis nos han enseñado, no obstante, al menos, vale la pena mencionar qué se puede esperar en los próximos meses.

Las mujeres entre los cuidados y el trabajo remunerado

Desde el inicio de la pandemia, las mujeres han sido uno de los grupos poblacionales que han resentido de manera directa los efectos de las medidas del confinamiento. Hay un consenso entre diversos organismos internacionales en cuanto a que la contracción económica provocada por la pandemia está afectando negativamente y en mayor medida los mercados y sectores laborales donde la población femenina es preponderante, y que se caracterizan por: mayores tasas de informalidad, bajas remuneraciones y bajos niveles de calificación. La CEPAL, de forma enfática, señala que nos encontramos ante un retroceso de más de diez años en la participación de las mujeres en los mercados laborales (CEPAL, 2021b).

Los datos que nos muestran estos mismos organismos son elocuentes. Un porcentaje importante de las mujeres trabajadoras se emplea en los sectores económicos que, mayoritariamente, han sido afectados por la crisis. En América Central este porcentaje corresponde a 58.9 % del total de las mujeres, con respecto a 43 % para el caso de los hombres, y en América del Sur es de 45.5 % en relación con el 42 % para los hombres (OIT, 2020b: 10-12). Los mercados laborales más afectados, donde se encuentra una alta participación de las mujeres, son: el turismo, manufactura, comercio al por mayor y menor, salud y educación. Los sectores en riesgo alto concentran alrededor de 56.9 % del empleo de las mujeres y 40.6 % del empleo de los hombres en América Latina. En el Caribe, 54.3 % del empleo femenino y 38.7 % del empleo masculino se concentran en sectores en alto riesgo (CEPAL, 2021).



El empleo en el sector de las prestaciones de servicios domésticos ha sufrido fuertes afectaciones en términos de pérdidas de empleo, las cuales han sido estimadas alrededor de 72.3 % del total a nivel mundial, y en este sector están ocupadas, en su mayoría, trabajadoras mujeres (OIT, 2020b:10-12). A la incertidumbre propia del sector, que se caracteriza por la ausencia de contratos formales y prestaciones, se suma el incremento en las responsabilidades al tener que hacerse cargo de los niños que no asisten a la escuela, aumento del riesgo de contagio, ya sea por la presencia de un mayor número de personas en casa, por el cuidado de enfermos, o por la falta de equipo sanitario adecuado para su protección (CEPAL, 2020d).

Las mujeres que trabajan por cuenta propia o son propietarias de pequeñas empresas dependen, en gran medida, del autofinanciamiento, ya que enfrentan mayores barreras para acceder a recursos financieros formales. Los meses durante los que se ha desarrollado la pandemia han mostrado que el cierre de empresas y la ausencia de políticas y programas dirigidos a las mujeres, las han puesto en condiciones de mayor vulnerabilidad. La CEPAL proyectó que cerraría casi 2.7 millones de microempresas formales en la región (CEPAL, 2020c), por tratarse de un segmento con menores márgenes de ganancia y respaldos de capital. Con estos antecedentes, el escenario para las mujeres comerciantes y productoras es aún más complejo.

La industria manufacturera es otro sector clave ya que, a pesar de contar con mayores niveles de formalización, es considerado un sector que podría sufrir de manera considerable como resultado de las interrupciones en las cadenas globales de suministro y el cierre de fábricas. Esto puede ser particularmente crítico en Centroamérica, donde 13.2 % (CEPAL, 2021: 7) del empleo femenino se concentra en este sector, con una gran participación en las industrias orientadas a la exportación, como la maquila y el ensamblaje.



Otro sector con una participación femenina importante y afectado por el COVID-19 es el de las actividades de alojamiento y de servicio de comidas (asociadas al turismo). En 2019, en la región, 61.5 % de los puestos de trabajo eran ocupados por mujeres. Este sector emplea a más de 70 % de ellas, en Bolivia (78.6 %), Perú (76.4 %), Honduras (76.2 %), El Salvador (74.8 %) y Nicaragua (72.9 %). También es un sector que destaca por estar organizado de manera relevante en microempresas. 69.5 % de las mujeres en este sector son empleadas en empresas de menos de cinco personas que, a menudo, carecen de acceso al crédito, disponen de pocos activos, y se prevé que se recuperarán de forma más lenta si no se ofrecen medidas fiscales y paquetes de estímulos específicos para que hagan frente a la crisis actual. En la subregión de El Caribe, este sector representa el 11.9 % del empleo femenino y 5.7 % del empleo masculino, y en algunos países la cifra supera o iguala esa media en el caso del empleo femenino, como ocurre en Santa Lucía (20.8 %), Barbados (16.2 %) y Jamaica (11.9 %) (CEPAL, 2021b).

En la región, el 70.4 % de los puestos de trabajo en el sector de la educación son ocupados por mujeres. En este sector la respuesta tuvo que ser inmediata, frente a un confinamiento que obligó a migrar a formatos digitales, sin la posibilidad de formación o capacitación previa y sin las competencias o los recursos suficientes para poder adaptar su trabajo a las exigencias de la enseñanza a distancia y el uso de plataformas. Además de las tareas tradicionales, el personal educativo ha debido colaborar en actividades dirigidas a asegurar condiciones de seguridad material de las y los estudiantes y sus familias.

Para mantener el funcionamiento de algunas empresas y negocios, el teletrabajo se ha convertido en una alternativa de empleo. Sin embargo, por las características estructurales de los mercados laborales y las estructuras productivas de los países de la región, se estima que únicamente el 21.3 % de las personas ocupadas



podrían teletrabajar (CEPAL, 2020a). En teoría, por el tipo de ocupaciones en que se desempeñan las mujeres, la proporción de las que podrían continuar trabajando en modalidad remota sería mayor que la de los hombres. Sin embargo, debido al nivel de conectividad de los países y a las persistentes brechas de género en el acceso y uso de las tecnologías digitales, el porcentaje de mujeres ocupadas que podrían teletrabajar se reduce de forma significativa.

Las mujeres, incluidas las niñas, se ven especialmente afectadas por la pandemia. Las mujeres pasan tres veces más tiempo que los hombres haciendo trabajos domésticos y de cuidado no remunerados cada día, entre 22 y 42 horas por semana antes de la crisis. A pesar de mayor presencia de éstas en las primeras líneas de la lucha contra la crisis (representan el 72.8 % de las personas empleadas en el sector de atención de la salud), sus ingresos son 25 % más bajos que los de sus homólogos hombres. El confinamiento, el cierre de las escuelas y los miembros de la familia enfermos han significado una presión adicional para ellas, como principales cuidadoras. La violencia doméstica, el feminicidio y otras formas de violencia sexual y de género se han incrementado. Las llamadas recibidas a través de las líneas telefónicas de ayuda de emergencia para mujeres en Chile y México, por ejemplo, han aumentado más de 50 % (ONU, julio 2020).

Pueblos indígenas y afrodescendientes: el círculo vicioso de la desigualdad

En América Latina se registra una población indígena superior a 45 millones de personas –dividida en 826 pueblos–, que representa a más de 10 % del total de los habitantes de la región (Ocha, 2020). Hasta el momento en que se escribe esta publicación no existen datos exactos sobre el impacto de la crisis del COVID-19 sobre el trabajo y las condiciones laborales de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la región. Sin embargo, los documentos



que se han escrito al respecto plantean que las condiciones de desigualdad, pobreza y marginación que viven estas poblaciones se agravarán en la medida en que lo harán también las condiciones generales de vida de las poblaciones menos protegidas. Informes de varios organismos internacionales, al inicio de la pandemia, evidenciaban que la población indígena padece condiciones de pobreza y de falta de acceso a los servicios básicos más graves que las de la población no indígena, motivo por el cual la Plataforma Indígena Regional frente al COVID-19 afirmaba que “aunque no existe evidencia, se puede prever que los efectos de COVID-19 serán más profundos para los pueblos indígenas” (Filay y Fiay, 2020). El informe de Ocha (ibíd.), presentado a medio año del inicio de la pandemia, ya planteaba que la crisis podría profundizar las desigualdades y la exclusión social, económica y laboral que sufren los pueblos indígenas (ídem) y, por su parte, un informe reciente de CEPAL (2021) también plantea la misma situación para los pueblos afrodescendientes.

Antes de la pandemia, informes de la CEPAL sugerían que las personas indígenas cuentan con menores oportunidades de conseguir un empleo de calidad y tienen 31.5 % más de probabilidades de trabajar en la economía informal que las personas no indígenas. Esto supone la mayor brecha de informalidad en todas las regiones. En términos salariales, este mismo estudio plantea que las personas indígenas con empleo remunerado se sitúan en 31 % por debajo de las personas no indígenas, la mayor brecha salarial en el mundo. Las mujeres indígenas dependen desproporcionadamente de un empleo informal y más de 85 % de ellas sólo consigue trabajo en la economía informal. Se estima que 7 % de las mujeres indígenas vive con menos de 1.90 dólares diarios (Ocha, 2020).

Los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes (10 % y 21 % de la población de la región, respectivamente) también se ven afectados debido a que las condiciones socioeconómicas en que viven son peores que las del resto de la población, su acceso



a la protección social es limitado y sufren elevados niveles de discriminación en los mercados laborales. Asimismo, es más probable que los pueblos indígenas vivan en zonas con servicios médicos deficientes y acceso limitado a la infraestructura sanitaria, el agua y el saneamiento. Su acceso a la información también está restringido, ya que a menudo hablan idiomas distintos de los oficiales o de los de la mayoría de la población. Los pueblos indígenas tienen casi el triple de probabilidades de vivir en la extrema pobreza y tienen un acceso limitado a los recursos. Las comunidades que viven en aislamiento voluntario son particularmente vulnerables y el romper por la fuerza su aislamiento plantea graves amenazas, incluso para su vida y su salud (ONU, 2020b).

Jóvenes frente al impacto laboral

Hacia agosto de 2020, la OIT (2020e) planteaba los enormes riesgos que podría suponer, para los jóvenes, la crisis económica generada por el COVID-19. En términos generales se hacía énfasis en la interrupción de sus programas educativos o de formación, la pérdida de empleo, el fracaso de sus emprendimientos, la caída de sus ingresos y la perspectiva de enfrentar mayores dificultades para encontrar una ocupación en el futuro. También, este mismo informe apuntaba que anteriores crisis mostraban que mujeres y hombres jóvenes suelen estar entre los primeros en perder empleos en momentos de dificultad, pero no los recuperan con tanta rapidez (ídem). Sin embargo, el aumento de la desocupación entre los jóvenes observado durante la pandemia, al igual que el de los adultos, ha sido inferior al esperado habida cuenta del significativo deterioro de la actividad económica, registrado especialmente en el segundo trimestre de 2020.

La explicación se encuentra en que, si bien la pérdida de puestos de trabajo de los jóvenes se refleja claramente en una reducción de 7.8 puntos porcentuales de la tasa de ocupación, la tasa de participación disminuyó al mismo tiempo 8.7 puntos porcentuales en el



segundo trimestre respecto del mismo periodo de 2019, atenuando el impacto de la pérdida de empleos en la tasa de desocupación. Se trata de una consecuencia directa de las medidas de confinamiento en los hogares y de la paralización de las actividades económicas, pues en esas circunstancias la búsqueda de empleo se volvió extremadamente limitada o impracticable para quienes habían perdido su fuente de trabajo (CEPAL/OIT, 2020).

Confinamiento y cierre de fronteras: migrantes y refugiados

Al igual que con los grupos anteriormente descritos, la información que tenemos hasta el momento de la redacción de este texto es preliminar y, sobre todo, los documentos consultados prevén un agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad, de trabajo precario y sin prestaciones que enfrentan los migrantes y refugiados.

Uno de los pocos estudios que se han enfocado en analizar las consecuencias del COVID-19 en las condiciones laborales de los migrantes es el que se presenta en el documento Panorama en Tiempos de COVID-19.¹ De acuerdo con este texto, hasta 2019, las tendencias marcaban un aumento de la presencia de los migrantes en el mercado laboral regional de América Latina; mayores niveles de participación laboral de las personas migrantes respecto de la población total, con una diferenciación de acuerdo al nivel de escolaridad; una tasa de participación de mujeres migrantes menor a la tasa de participación de los hombres; empleo migrante mayoritariamente asalariado y ubicado en el sector servicios. Frente al COVID-19, las medidas de confinamiento y particularmente el

¹ En esta encuesta se analizaron las respuestas a un total de 239 cuestionarios, 104 de los cuales fueron aplicados a personas refugiadas y solicitantes de asilo y 135 a personas trabajadoras migrantes. 70 % de los encuestados son mujeres y 28 % hombres. De aquellos que participaron en la encuesta 236 son de nacionalidad venezolana (99 %), uno es de nacionalidad peruana y uno de nacionalidad colombiana.



cierre de fronteras, los trabajadores migrantes y refugiados han tenido que enfrentar fuertes procesos de repatriación y devolución, así como, en algunos casos, el bloqueo total o parcial de la contratación en ciertos sectores de la economía.

En el ámbito laboral, en los países de destino, 43 % de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y trabajadoras migrantes ha continuado sus actividades laborales hasta el momento de aplicación de la encuesta (entre agosto y octubre de 2020), mientras que 57 % no tenía empleo en el momento de la consulta. Uno de los sectores más afectados ha sido el de trabajo doméstico, el cual absorbe, en algunos países, a un alto número de mujeres migrantes. El documento señala que 54 % de los hombres mantenían su trabajo frente al 38 % de las mujeres. Y dentro de este grupo, las mujeres refugiadas o solicitantes de asilo son las más afectadas. El 24 % de quienes respondieron la encuesta, señala haberse quedado sin trabajo, mientras que el 18 % indica que la empresa o lugar de trabajo está cerrado temporalmente por el impacto del COVID-19. El impacto de la pandemia en el estado de trabajo actual afecta de forma diferenciada a hombres y a mujeres en tres aspectos: la falta de trabajo por la cuarentena (39 % en las mujeres y 36 % en los hombres); la pérdida del empleo/ trabajo (29 % en hombres y 23 % en mujeres), y el miedo al contagio (10 % en mujeres y 7 % en hombres). Además, se evidenció una reducción de horas de trabajo y del salario (14 %), la suspensión de pagos o no percibir remuneración (13 %) y la reducción de salario (9 %) (Carella, 2021).

Sin duda, los informes de 2021 tendrán datos mucho más certeros sobre las afectaciones del COVID-19 sobre la población.



CAPÍTULO 2. CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS DESDE ABAJO

En el primer capítulo intentamos dar cuenta de la situación económica que se ha generado tras la pandemia en la región latinoamericana. En este segundo capítulo nuestro interés es argumentar en favor de un cambio de perspectiva del análisis. Eso significa desarrollar una capacidad de análisis que permita considerar también esas subjetividades no institucionales, ni institucionalizadas que constantemente actúan y dan forma a los contextos sociales. El objetivo es demostrar esta capacidad y la importancia de la acción social apoyándonos en análisis históricos y teóricos que valoran el papel de estos actores con atención específica a las formas de acción económica que se llaman “economía social” y “economía popular”.

Los sectores populares y los grupos vulnerables de los países latinoamericanos sufrieron fuertes afectaciones por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Las afectaciones para los trabajadores variaron según los sectores productivos; la pérdida del empleo e ingreso ha golpeado principalmente a aquellos que operan en condiciones de informalidad o precariedad que comúnmente quedan excluidos de las garantías y las protecciones sociales reconocidas en los derechos laborales. Estos sujetos, que en la literatura académica y en los programas gubernamentales suelen ser invisibilizados o no reconocidos, han adquirido cada vez más protagonismo en la estructura productiva global posterior a la crisis del fordismo de los años setenta. Ellos mismos constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo de los países latinoamericanos.



Como quedó reflejado con los datos del capítulo anterior, la estructura de los mercados de trabajo nacionales de la región ha hecho que las medidas de ayuda planteadas por los gobiernos para hacer frente a la crisis hayan tenido eficacia limitada. Muchas de ellas han sido medidas fiscales y monetarias de apoyo a los ingresos de empresas y trabajadores que, por su naturaleza, si bien con diferencias entre los países, no han podido alcanzar a todas las personas que lo necesitan. El enfoque ha sido, en especial, a la reconstrucción y rearticulación de las cadenas de valor internacionales y a aspectos macroeconómicos que poco se vinculan con las condiciones de vida de las masas que habitan la región. Respondiendo precisamente a un esquema tradicional, las medidas quedaron ciegas frente a esos sectores sociales vulnerables o a las formas de trabajo “no tradicionales” que, también en tiempos “normales”, no suelen ser alcanzados por las formas comunes de *welfare*.

Es en este contexto que se ha registrado en América Latina, como en el resto del mundo, el surgimiento de numerosas iniciativas nacidas al interior de la sociedad civil. Estas acciones no se limitan a buscar soluciones inmediatas a los problemas generados por la pandemia, sino que también tienden a leer la pandemia como una continuación de los problemas que ya existían. La crisis generada por la pandemia, en este sentido, es leída como expresión de una crisis general del sistema capitalista. Las acciones han sido y siguen siendo llevadas a cabo por diversas organizaciones asumiendo varias formas: desde el asociacionismo, pasando por los emprendimientos económicos asociativos, el mutualismo y la solidaridad social, hasta el movimiento social. Este conjunto de actores, al cual podemos referirnos generalmente como “sociedad civil”, refiere a un campo distinto al de los actores dominantes de la política y de la economía.

Como lo señalan los reportes e informes de las organizaciones internacionales, no sólo es posible reconocer un desequilibrio



hacia el mero dato macroeconómico, sino también se nota cómo el campo de la subjetividad se limita a los actores institucionalizados: el Estado y los partidos en el campo político, las empresas y las centrales sindicales en el ámbito económico. Según estas perspectivas, las actividades que interesan a este trabajo no caben dentro de la definición de una “reactivación económica”, porque son incapaces de reconstruir el ciclo capitalista.

Nuestra apuesta y propuesta es valorar las acciones de estos actores para poderlas leer como una “reactivación desde abajo”. Esta noción quiere ser un intento de dar cuenta del esfuerzo difuso y local de una heterogeneidad de actores populares que están jugando un papel importante para reducir las consecuencias socioeconómicas de la pandemia en grupos de poblaciones pobres y vulnerables en América Latina, ante las representaciones oficiales y mediáticas que suelen centrar sus miradas en las acciones de los gobiernos y en los indicadores macroeconómicos. Una operación que se hace visible modificando la mirada del ciclo capitalista de valorización, hacia la centralidad de los sujetos y su reproducción.

Las múltiples iniciativas promovidas por diferentes actores locales y autoorganizados de la sociedad civil representan respuestas desde abajo que tienden a reducir los efectos más graves de las consecuencias socioeconómicas de la crisis sobre sectores populares y grupos vulnerables. La literatura internacional desde hace algunas décadas ha reconocido e investigado el protagonismo de estos actores plurales y locales; incluso ciertos debates los reconocen como expresiones de resistencia a los modos de dominación neoliberal y ellos apuestan como medios para la construcción de alternativas a la sociedad del dinero.

NUEVAS FORMAS DE DOMINACIÓN Y RESISTENCIA EN EL NEOLIBERALISMO

La era neoliberal ha implicado una transformación de la dominación y la resistencia, generando la emergencia de nuevas formas



organizativas y reivindicaciones de los grupos subalternos, así como de nuevos debates sobre la construcción de alternativas sociales.

La literatura internacional menciona que durante la época fordista o keynesiana la conflictividad social en los países industrializados se expresaba, especialmente, al interior de las relaciones de explotación del trabajo asalariado fabril, y a través del protagonismo del movimiento obrero organizado e institucionalizado dentro de los mecanismos de regulación, negociación y redistribución del Estado de bienestar (Hirsch, 1996). En Latinoamérica, con una composición mayoritariamente rural de la clase trabajadora, se generó un antagonismo explícito y difuso también en el asunto del acceso campesino a la tierra que, para el caso de México, tuvo su máxima expresión en la Revolución de 1910. La configuración política, normativa e institucional que surgió de ella y que a menudo fue nombrada como Estado corporativo o posrevolucionario, fue una forma específicamente mexicana de keynesianismo, que reconoció a las clases trabajadoras asalariadas de la ciudad y las campesinas de las zonas rurales; al mismo tiempo que institucionalizó la conflictividad social al interior de las organizaciones corporativas y los mecanismos estatales de negociación y redistribución de la riqueza (Roux, 2005).

En ese contexto, el Estado representaba un espacio privilegiado de contención y regulación de la conflictividad social, expresada especialmente por la lucha obrera contra la explotación y la campesina para el acceso a la tierra como medio de producción. Los principales actores que operaban en ese escenario eran los partidos disputándose el control del poder político –aunque, en el caso del monopartidismo en México, la disputa se daba, de manera primordial, al interior del partido de Estado–, y las organizaciones, representantes de los trabajadores asalariados de la ciudad o los campesinos. Ese Estado keynesiano o corporativo intervenía activamente en la economía y en los mecanismos redistributivos,



con la finalidad de regular esa conflictividad social, generando el contexto por particulares prácticas de lucha, que veían el protagonismo de actores obreros o campesinos, reivindicando mejoras al interior de los mecanismos desiguales de distribución de la riqueza social, en su forma económica –salario, tierra, precios de los productos, etcétera– o de servicios sociales. A pesar de la existencia de voces minoritarias alternativas (Quijano, 2007), la mayoría de las propuestas teóricas y de los discursos de las organizaciones obreras, campesinas y revolucionarias apostaban al cambio social en el protagonismo de la clase obrera, en el horizonte del control del poder estatal y en formas organizativas verticales y vanguardistas.

La reconfiguración productiva, institucional y normativa en la era neoliberal generó una transformación profunda, tanto de la conflictividad social como de los debates teóricos para el cambio social, debido a que se anularon o debilitaron los anteriores canales de mediación a través de los cuales se había expresado y contenido el conflicto social (Hirsch, 1996; Roux, 2009), reduciendo la capacidad de intervención antagonista dentro de las relaciones de explotación fabriles y a través de las instituciones estatales. No se trata de que la lucha obrera por mejores condiciones laborales, la lucha campesina por la tierra o la lucha partidista por el poder político hayan desaparecido, sino que han adquirido visibilidad y protagonismo nuevos actores sociales que dirigen su intervención hacia nuevas relaciones de dominación y nuevos ámbitos de intervención: las luchas indígenas para el reconocimiento de su identidad étnica o para la autonomía, las luchas feministas contra la dominación patriarcal, la oposición a los planes logísticos e infraestructurales, la lucha ecologista de vecinos defendiendo sus entornos de vida y productivos contra el despojo o la contaminación, hasta, para el caso mexicano, la organización ciudadana contra la violencia criminal y estructural. Observamos entonces una pluralidad de figuras sociales que han



multiplicado la concepción de las relaciones de poder y de la resistencia, más allá de la lucha contra la explotación y el poder político (Foucault, 2002).

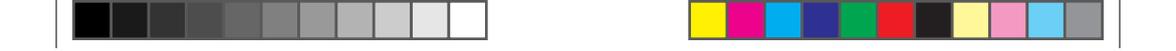
La literatura sobre estos movimientos sociales en América Latina evidencia que estas expresiones plurales de la conflictividad social contemporánea encuentran dificultad para abrir vías de resolución o negociación en los canales institucionales y a través de las tradicionales instancias sindicales o partidistas, por tanto, sus acciones suelen presentarse en las modalidades de la confrontación directa con los actores dominantes o de la implementación de prácticas autogestivas y autónomas para la resolución de necesidades inmediatas (Zibechi, 2003; Seoane, 2006; Modonesi e Iglesias, 2016). Desde el punto de vista de las formas organizativas, varias de estas luchas se constituyen a partir de vínculos territoriales o vecinales y, en su mayoría, rechazan estructuras verticales y vanguardistas para, en cambio, promover mecanismos decisionales asamblearios y tendencialmente horizontales (Zibechi, 2003; Modonesi e Iglesias, 2016; Adawosky, 2007). Otro elemento de novedad es el rechazo a la profesionalización del militante, en el sentido de que los individuos que protagonizan estas luchas no suelen tener una formación especializada y con dedicación total al activismo social (Baschet, 2015; Adawovsky, 2007; Zibechi, 2001).

La emergencia de estos múltiples y novedosos movimientos sociales ha generado una producción teórica plural al interior de una izquierda alternativa anti-estadista, con la cual se proponen nuevas comprensiones de la dominación capitalista y de la construcción de alternativas a ella. Una amplia parte de esta producción teórica apuesta a los procesos de autoorganización de base y de corte autogestionarios como medios para el cambio radical. Algunas reflexiones elaboradas al interior de estos debates cuestionan la supuesta neutralidad del Estado para reconocer su papel funcional en la reproducción de la sociedad dominante o su incapacidad de



generar alternativas a ella, al mismo tiempo que conciben a la dominación capitalista más allá de una lectura centrada única y prioritariamente en la explotación del trabajo asalariado. Entre estas reflexiones señalamos las siguientes.

Algunos debates inspirados en la noción de acumulación por desposesión de Harvey (2004), que en América Latina se ha usado especialmente para el estudio de resistencias al extractivismo (Navarro, 2015), evidencian cómo hoy la apropiación capitalista de plusvalía no opera únicamente vía explotación del trabajo fabril, sino que a través de la apropiación forzada de bienes públicos o comunes, sobre todo con respecto a los recursos ecológicos de las poblaciones rurales que sufren los efectos de contaminación y despojo generados por actividades extractivistas y obras infraestructurales. En cambio, el neomarxismo italiano ha avanzado una interpretación sobre la existencia de múltiples modalidades de explotación del trabajo contemporáneo en situaciones que no presentan relaciones asalariadas o incluso que no se presentan como trabajo (Hardt y Negri, 2011). Tal intuición se dirige a comprender los mecanismos de apropiación capitalista en contextos de trabajo autónomo o asociativo, así como en el sector servicios y en aquellas producciones económicas sustentadas en los derechos de propiedad intelectual. Su hipótesis es que la producción contemporánea depende cada vez más de formas de cooperación del trabajo que no son organizadas por los capitalistas, por tanto, la apropiación de plusvalía por parte de ellos no desaparece, sino que opera como una especie de captura desde afuera del valor producido por diferentes modalidades de trabajo o cooperación social, adquiriendo la forma de la llamada explotación biopolítica (Hardt y Negri, 2011: 145). Otra propuesta procede de la corriente del marxismo abierto, el cual reconoce en el fetichismo, más que en la explotación, el principal mecanismo de dominación capitalista, que tiende a subordinar a cada productor a las dinámicas impersonales del mercado y al poder objetivado en el dinero, al mismo tiempo que conforma la subjetividad de los



individuos a la lógica mercantil (Holloway, 2002). Finalmente, algunos estudios sobre el neoliberalismo han evidenciado la tendencia contemporánea hacia la expansión de las relaciones mercantiles cada vez a más ámbitos de la vida y de la sociedad (Dardo y Laval, 2015), generando respuestas desde abajo a través de prácticas de adaptación y resistencia de los grupos subalternos que adoptan el “cálculo como raíz subjetiva primordial” (Gago, 2014: 12).

Esta literatura propone una concepción de la dominación capitalista que no la ubica en lugares privilegiados, sean ellos la explotación fabril o el Estado, sino que se despliega en la sociedad de manera difusa y múltiple, subordinando a diferentes tipos de trabajadores y productores, así como condicionando la subjetividad misma de los individuos. Con base en esta intuición, la construcción de alternativa social se concibe en estos debates, ya no a partir de la iniciativa del Estado o del antagonismo del movimiento obrero en las relaciones productivas, sino como fruto de prácticas difusas y heterogéneas de los individuos que, en sus lugares de vida y de trabajo, resisten tratando de sobrevivir dignamente y de no reproducir las relaciones de apropiación desigual y de subordinación a la lógica mercantil que estructuran la sociedad contemporánea (Esteva, 2013).

A menudo, estas prácticas no expresan un carácter confrontativo explícito con los actores dominantes, ni necesariamente intervienen en los ámbitos formales de la economía y la política, sino que se despliegan a través de iniciativas colectivas de resistencia o de autogestión con la finalidad de resolver necesidades inmediatas. Desde este punto de vista, las diferentes iniciativas desde abajo para enfrentar los efectos de la crisis en América Latina no sólo representan intentos para reducir los efectos negativos sobre los grupos vulnerables, sino que potencialmente pueden desafiar los mecanismos difusos e impersonales de la dominación capitalista contemporánea, al mismo tiempo que contribuir a abrir márgenes de alternativa.



Las diferentes acciones de reactivación desde abajo que aparecen en este libro, abordadas desde esta perspectiva, no estarían solamente dirigidas a que los mecanismos de producción económica y las condiciones de existencia de los sujetos a su interior vuelvan a funcionar como antes, sino que pueden, potencialmente, expresar la postura reivindicada por diferentes actores sociales, al inicio de la pandemia, que se puede parafrasear con la consigna: no queremos volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema (Roy, 2020). En otras palabras, los actores que protagonizan la reactivación desde abajo, al estar respondiendo a los efectos socioeconómicos de la crisis, de manera potencial pueden generar avances en la conquista de derechos sociales y el cuestionamiento de las relaciones de desigualdad.

Entre los diferentes tipos de prácticas de resistencia y autogestión que se observan en América Latina, al interior del proceso de reactivación desde abajo, se reconocen algunas relacionadas a diferentes formas de organización de los sectores populares en el ámbito productivo, que se nombran a través de las categorías de economía social y solidaria, y economía popular. Cada uno de los casos que se presentan en este libro se pueden insertar en una o ambas categorías.

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, Y ECONOMÍA POPULAR

Las dos categorías se caracterizan por un enfoque del análisis de las actividades económicas que no está basado en los pilares de competencia y ganancia de la ciencia económica clásica y que no mueve el presupuesto del individualismo metodológico cristalizado históricamente en el *homo oeconomicus* de las disciplinas neoliberales.

Economía social y solidaria

Los debates sobre la denominación de “economía social y solidaria” (ESS) son muy amplios. Aunque no hay acuerdo entre todos



los autores, podemos identificar que el término nace de la unión de dos expresiones: “economía social” y “economía solidaria”. Esta combinación tiene particular relevancia en América Latina, donde surgió para considerar ambas denominaciones hegemónicas en los diferentes países de la región (en Brasil y Colombia, por ejemplo, se prefiere hablar de economía solidaria, en Argentina, por el contrario, de economía social), y también para valorizar conceptualmente el carácter de la posible alternativa sistémica al capitalismo que el mundo de la ESS asumió a través de la reflexión académica (Martínez, 2015: 24). Cabe destacar que, si la denominación de “economía social” tiene un origen más europeo, la utilización del término “solidaria” es característico de América Latina (Martínez, 2015: 18; Guerra, 2020: 3).

Ahora, la expresión tiene un campo de aplicación muy amplio que puede ser leído desde al menos dos puntos de vista. Por un lado, refiere a la realización de un sector económico específico que en América Latina ha alcanzado formas de reconocimiento institucional, generalmente en la primera década del siglo actual, con los gobiernos de izquierdas que, en su mayoría, conquistaron el poder en la región (Coraggio, 2012: 236). Este campo alternativo, al menos formalmente, se coloca como una economía alternativa a ambos: el modelo público, centralizado y estatal, y el modelo del mercado basado en la competencia y el capital privado, por lo tanto, a veces asume también el nombre de “tercer sector” (Guerra, 2020: 4).

Al mismo tiempo, el concepto, saliendo de las definiciones formales y generales, cuando es aplicado a la realidad, sirve más bien para referirse a un conjunto de prácticas económicas muy diferentes, caracterizadas por una forma específica de relación social que se genera entre los participantes (Gaiger, 2006).

Estas prácticas se concretan en formas organizativas muy diferentes, pero pueden ser aplicadas a dos movimientos conceptuales muy claros. En primer lugar, la economía social y solidaria pone



en el centro de la mirada a los sujetos y la satisfacción de sus necesidades (Martínez, 2015; Coraggio, 2012). Así se aleja de la centralidad del capital y de la producción de ganancia; también se enfatiza el desbalance hacia el polo del trabajo en la relación trabajo-capital y se habla de “economía del trabajo” (Gaiger, 2006: 104). En segundo lugar, el acento cae en el aspecto de la solidaridad y la cooperación en oposición a la competencia.

Por ende, de acuerdo con estos principios, las formas más comunes e históricas que las actividades de la economía social toman son: mutuales, cooperativas, asociaciones (Chávez, 2008: 1; Tremblay, 2009). Cabe destacar también que, según sus principios, el tema de la producción de ganancia o del operar o no operar como un actor de mercado asume, para los diferentes autores, una importancia sólo relativa. Se da, de hecho, la posibilidad de que, por ejemplo, las cooperativas en su funcionamiento como empresa tengan que adaptar los principios solidarios para poder sobrevivir en un contexto de mercado (Gaiger, 2006). En síntesis, podemos decir que el discurso de la economía solidaria, por lo tanto, gira en torno al tema de la solidaridad.

Economías populares

Otro concepto útil para entender las experiencias de nuestros casos de estudio es el de “economía popular”. Este concepto, ubicado en discursos de diferentes países latinoamericanos, como en el caso del término “economía social y solidaria”, es objeto de un debate y su interpretación varía según los autores. Aunque a veces se utiliza como sinónimo de los anteriores (economía social y economía solidaria), otras veces apuesta a una diferencia que refleja una postura política y analítica muy precisa.

Como es de esperarse, el enfoque de la economía popular pone en segundo plano el tema de la solidaridad para centrarse en la subjetividad de las clases subalternas. Normalmente, el concepto



se utiliza para describir esos ámbitos que, como en el caso de la economía social, por lo general, surgen en momentos de crisis y, análogamente, indica un conjunto de prácticas surgidas en los sectores populares de la población para generar ingresos y garantizar la sobrevivencia. La economía popular reúne todos esos trabajadores que, quedando fuera del mercado laboral, tuvieron que inventarse un empleo y un ámbito que tiene múltiples relaciones con la economía de mercado “institucional” (Fernández y Álvarez, 2018).

En consideración de la peculiaridad de las estructuras de las economías regionales es comprensible entender la relevancia de este concepto. Cabe recordar que América Latina se caracteriza no solamente por ser el continente más desigual del planeta, sino también por una población pobre que alcanza porcentajes altísimos en casi todos los países, donde muchísimas personas trabajan en el sector informal.

La informalidad surge como elemento clave de la conceptualización de la economía popular. Intentando dar un giro a la dicotomía macroeconómica y desarrollista que ve en la economía informal simplemente un mal o un residuo que debe ser reconducido al ámbito de la formalidad, el discurso de la economía popular rebasa esta dicotomía para valorar la capacidad productiva y generativa de los sectores populares, también fuera del marco legal e institucional.

No se trata de identificar un contexto inmediato anticapitalista con la informalidad. Al contrario, según las lecturas marxistas, se trata de entender la relación de subordinación de este contexto a la economía capitalista y cómo esta subordinación estructura el espacio de la informalidad misma (Gaiger, 2019).

Chena (2017) identifica en la economía popular al menos dos elementos: primero, la condición de pobreza de sus integrantes y la consecuente incapacidad de acumular capital y, segundo, la participación en relaciones de trabajo fuera del vínculo salarial



tradicional o, como lo define el autor, “trabajadores sin patrón”. A partir de eso describe la subordinación de esta economía según ejes estructurales –en particular a través de dispositivos de endeudamiento– (ídem), que colocan a los actores de la economía popular en una condición “inferior” respecto de los actores que operan en la formalidad. Otras autoras, como Gago (2016), profundizan el discurso e identifican el espacio de la economía popular como un “espacio ambiguo” o un espacio conflictivo. Además, reconociendo la relación específica con el trabajo informal, Gago destaca precisamente la capacidad de las economías populares de moverse en las fronteras entre formalidad e informalidad y, así, cuestionando constantemente. La economía popular, en este sentido, se distancia de las formulaciones normativas de la economía social y solidaria por no necesariamente resolverse en una alternativa al modelo capitalista. Es un campo que, según el momento, puede asumir valor crítico y solidario o, también, ser un mecanismo de sumisión e integración al gobierno (ibídem).

Esta capacidad, o tal vez potencialidad, específica de los sectores populares no simplemente de generar ingresos, sino de crear un espacio y prácticas de resistencia frente a las condiciones establecidas y las tendencias empujadas por el neoliberalismo, es recurrente en las diferentes lecturas.

Se constituye así una tensión entre economía social y solidaria y economía popular. Por un lado, algunos teóricos de la primera, como Coraggio (2010), identifican una relación específica entre estos dos ámbitos precisamente a la luz de las diferencias entre los dos conceptos y ven en la economía popular “el piso”, arriba del cual se puede desarrollar una economía social y solidaria. Por otro lado, las reflexiones sobre la economía popular, de alguna forma quieren resistir a esta subsunción, marcando una diferencia no sólo en su carácter ambiguo, sino también en la forma en que ella puede producir nuevas prácticas emancipatorias.



La literatura suele reconocer que las experiencias relacionadas a ambas categorías expresan la crisis del mercado del trabajo latinoamericano. En particular, consideran que sus prácticas y reivindicaciones tienden a desafiar algunos pilares que estructuran las relaciones desiguales en nuestra sociedad.

CUESTIONAMIENTOS DESDE ABAJO A LAS TEORÍAS Y LAS PRÁCTICAS DE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA

Muchas de las acciones plurales y difusas que desde abajo se han implementado en las últimas décadas han cuestionado las relaciones dominantes de la sociedad contemporánea, buscando visibilizar prácticas y sujetos que comúnmente no gozan de reconocimiento y valoración al interior de las políticas públicas o las dinámicas del mercado. Dichos cuestionamientos han alimentado una producción de conocimiento crítico que trata de subvertir algunos de los supuestos con los cuales se suele concebir la economía y la política al interior de la teoría tradicional y de las acciones de los actores dominantes. Desde el punto de vista teórico, abstrayéndonos de las prácticas particulares, es posible resumir algunos de estos cuestionamientos alrededor de la crítica a dos tipos de parejas de categorías que ordenan la existencia en nuestra sociedad: producción / reproducción; formal / informal.

Producción / Reproducción

La forma en que están organizadas la producción y distribución de la riqueza en la sociedad capitalista lleva a atribuir valoraciones diferenciales entre aquellas actividades humanas insertadas en la producción mercantil y las dirigidas a la reproducción de las personas que se realizan fuera de los circuitos mercantiles. Comúnmente, a las primeras se les reconoce un valor económico, mientras que las segundas –a menudo realizadas por las mujeres al interior de las redes familiares– suelen ser no remuneradas



e invisibilizadas, tanto en el mercado como en las políticas de seguridad social. Desde el punto de vista analítico se reconoce que en la sociedad capitalista las actividades humanas que gozan de un reconocimiento y valoración social acostumbran a ser aquellas insertadas en la producción mercantil, generando una tendencia que impone al valor de cambio como “objeto inmediato de la producción” (Marx, 1980: 71), es decir, que obliga a los productores a producir, antes que nada, valores de cambio para el mercado. La crítica feminista ha evidenciado el papel que el trabajo reproductivo juega al interior de los circuitos de producción económica; al mismo tiempo ha explicado los mecanismos de invisibilización de dicho trabajo que generan una jerarquización social entre sexos y una dependencia económica de la mujer al varón (Federeci, 2013a). La campaña para el salario de las amas de casa, que los movimientos feministas de los países desarrollados implementaron en los años setenta del siglo pasado, fue un intento para acceder a un reconocimiento social y valoración económica de este trabajo femenino invisibilizado (ídem).

La arquitectura institucional y normativa del Estado social en la era del keynesianismo, aunque solía mantener en una condición de no valoración al trabajo reproductivo de las mujeres, promovió un conjunto de servicios sociales y medidas de protección social a través de los cuales el Estado adquiere ciertas responsabilidades de otorgar algunos servicios relacionados con la reproducción material y social de las personas. La tendencia a la expansión de estas medidas hacia más población fue revertida por la implementación de las políticas neoliberales, las cuales, bajo el horizonte de la reducción del gasto público, desmantelaron numerosos servicios y la protección social de alcance general y de corte redistributivo. El tamaño de la intervención social del Estado orientada por una lógica redistributiva se redujo notablemente y quedó bajo la forma de los programas asistencialistas dirigidos a grupos de poblaciones vulnerables, orientados ahora por la lógica del combate a la pobre-



za (Gordon, 2005). Dichas transformaciones sustrajeron ciertos bienes y servicios de los mecanismos redistributivos estatales para insertarlos en las dinámicas mercantiles, en otras palabras, convirtieron su anterior existencia social bajo la forma de derechos por la de mercancías que se intercambian en el mercado.

Las mujeres pobres fueron las más afectadas por tales cambios en la era neoliberal. Aquellas que habían accedido a los mecanismos redistributivos del Estado tuvieron que aumentar la carga del trabajo reproductivo, en aspectos relacionados con la crianza de niños o cuidado de ancianos y enfermos. En cambio, en los entornos rurales, sobre todo en los países del Sur global, la intensificación de los procesos de despojo o contaminación de los territorios provocó la pérdida de tierras y entorno ecológico con el consecuente debilitamiento de las actividades de subsistencia comúnmente realizadas por las mujeres (Federici, 2013b).

Al igual que la crítica feminista que evidenció los mecanismos sociales de invisibilización de los trabajos reproductivos femeninos y avanzó una crítica radical a la concepción de la economía capitalista, el debate ecologista, que se implementó desde los años setenta, generó un cuestionamiento profundo a la ciencia económica que tiende a no considerar las condiciones y los procesos ecológicos en la comprensión de los procesos productivos. Uno de los resultados de la crítica avanzada por la economía ecológica fue visibilizar el papel de recursos y servicios ecológicos que intervienen en la producción mercantil, aunque no suelen aparecer en los cálculos de los precios de las mercancías, sino que en la teoría económica se suelen concebir bajo la categoría de externalidades (Martínez Alier, 2004). Los mecanismos de distribución desigual al acceso a tales recursos y servicios, o a sus formas deterioradas, no aparecen bajo la lente de la teoría económica tradicional, la cual suele invisibilizar los mecanismos de apropiación o contaminación de recursos colectivos o campesinos por parte de los actores económicos. De manera análoga a



la reivindicación del salario de las amas de casa, el debate de la economía ecológica avanzó la propuesta de internalización de las externalidades, que se traduce en el intento de insertar en los costos de producción de las mercancías el valor económico de los recursos apropiados y de las afectaciones generadas por la contaminación (ídem).

La valoración del papel de los elementos ecológicos en la producción ha sido visibilizada, no sólo por la crítica teórica, sino que, a partir del neoliberalismo, por las luchas ecologistas contra el extractivismo. En dichas resistencias, la defensa del entorno ecológico se presenta no sólo como defensa campesina de la tierra en cuanto medio de producción, sino como defensa del territorio o de la vida, es decir, de un conjunto de elementos funcionales a la reproducción individual y colectiva de los habitantes (Seoane, 2006). Por tales motivos se ha aceptado ampliamente la categoría de movimientos o luchas socioambientales para definir dichas experiencias, con el fin de evidenciar el carácter y la función social que el entorno ecológico asume para los habitantes que lo defienden (Navarro y Pineda, 2009; Svampa, 2012).

Aunque algunos de estos elementos ecológicos se vinculan con el aspecto identitario, cultural o espiritual del grupo social, varios juegan un papel de insumos para la reproducción material de las personas, a pesar de no estar insertados dentro de formas productivas de tipo mercantil: como los casos del agua de los ríos usada para lavar ropa o como alimento humano o animal; los frutos del bosque o la fauna silvestre utilizados para complementar la dieta; la leña para cocinar alimentos o calentar; los recursos fitoterápicos aplicados para sanar, etc. Desde esta perspectiva, las luchas socioambientales han visibilizado el papel y el valor económico de un conjunto de elementos ecológicos que no gozan de este reconocimiento social y que a menudo son apropiados por los actores económicos y, al mismo tiempo, el papel y valor de formas productivas no mercantiles.



Los debates y las prácticas del feminismo y del ecologismo representan una de las principales críticas a la organización de la producción capitalista y a la teoría económica. Su principal aporte ha sido reivindicar el papel para la producción económica y la reproducción social de actividades y elementos que comúnmente no reciben visibilidad y valoración al interior de los circuitos de la producción económica y, a su vez, no suelen ser considerados en la teoría económica. En particular, han mostrado que la reproducción de las relaciones de apropiación desigual en la sociedad capitalista también depende de la apropiación del trabajo movilizado en las relaciones asalariadas, del trabajo reproductivo femenino, de los bienes ecológicos comunes o colectivos y de formas de producción no mercantiles. En términos teóricos, han invitado a la necesidad de superar ciertos supuestos de la teoría económica –incluso de ciertas posturas críticas a la economía capitalista–, que reproducen la distinción y la jerarquía entre trabajo productivo y reproductivo, centrando sus preocupaciones únicamente en las actividades humanas insertadas en las relaciones mercantiles. Dichas consideraciones invitan a la necesidad de configurar nuevas interpretaciones de la economía capitalista y nuevos modelos de protección social que tomen en cuenta la existencia de estas actividades y elementos, al mismo tiempo que los inserten plenamente dentro de mecanismos redistributivos y de protección social.

Formal / Informal

La noción de informalidad es una categoría que suele aparecer en las estadísticas económicas y laborales para referirse a actividades productivas o empleos que no se insertan dentro de los marcos legales de la fiscalidad, del derecho laboral y de la protección social. En términos generales, la OIT define a la economía informal como “todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que –en la legislación



o en la práctica— están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto” (OIT, 2015: 2). De manera más específica, en las estadísticas el adjetivo informal se aplica a dos categorías diferentes que distinguen, por un lado, un sector económico, el llamado “sector informal”, que refiere a las unidades productivas no registradas y, por otro lado, a una condición del trabajo, la llamada “informalidad laboral”, que refiere a todos aquellos empleos que operan en el sector informal, o en el sector formal, pero sin tener requisitos mínimos de derechos laborales o protección social, como en el caso de trabajadores sin contrato escrito, ni seguridad social (INEGI, 2021).

En términos estadísticos, la informalidad laboral se presenta de manera importante en los países más pobres (OIT, 2020: 35) y suele ser considerada un contexto de alta precariedad y vulnerabilidad para los trabajadores. En América Latina, 53% de ellos padecen esa condición laboral (OIT, 2020: 48).

La noción de informalidad y de la existencia de un llamado sector informal, apareció desde los años setenta para referirse a una amplia masa de trabajadores de los países pobres que, en aquellos años de intensa urbanización, quedaban excluidos del mercado del trabajo asalariado y que, a menudo, se empleaban en una variedad de formas de trabajo y actividades laborales que escapaban de la reglamentación del Estado. La categoría de informalidad laboral o empleo informal refiere entonces a una pluralidad de formas de trabajo, muy diferentes entre ellas —que van desde el trabajo asalariado sin derechos y protecciones, pasando por el autoempleo, hasta el trabajo remunerado de familiares—, pero que tienen en común su condición de ausencia de mecanismos mínimos de protección de los derechos laborales ante la ley. Como escribe Denning, en un análisis genealógico del término: “Lo que caracterizaba al sector informal no era el tamaño de la empresa, ni la forma del proceso de trabajo, sino su relación con el Estado” (2010: 87).



Esta exterioridad de la reglamentación estatal, si desde el punto de vista de las instituciones oficiales genera problemas en términos de medición estadística y recaudación fiscal, para los trabajadores implica, a menudo, un obstáculo al acceso de protección y seguridad sociales. En efecto, los sistemas del Estado social, conformados a partir de la mitad del siglo pasado, se basan en un mecanismo de acceso a los servicios sociales vía el trabajo formal, es decir, que el trabajo formal representa el requisito para obtener el acceso a ellos (Bustelo, 2005: 170). Esta situación genera una desprotección de los trabajadores no sólo con respecto a sus relaciones laborales al interior de la producción, sino también con respecto al acceso a medidas de protección y seguridad social. Las voces organizadas de los trabajadores ocupados en estas condiciones, como en el caso de Argentina, están avanzando propuestas de extensión de las medidas del Estado social a las personas empleadas en la informalidad, como intento de superar mecanismos de redistribución, organizados alrededor de una noción de trabajo que no corresponde a las estructuras productivas de los países latinoamericanos. Sus reivindicaciones no se dirigen principalmente a la eliminación de la condición de informalidad de su trabajo, sino a la eliminación de la informalidad como criterio de exclusión del acceso a los servicios sociales y a la seguridad social.

CONCLUSIONES

Con base en la literatura y debates presentados en este capítulo, se reconoce que los casos de estudio de la economía social y solidaria o popular analizados pertenecen a este panorama plural de actores de la sociedad civil, que en la era neoliberal han tomado protagonismo en implementar respuestas locales para satisfacer necesidades inmediatas de las personas, ante el debilitamiento de las medidas del Estado social y la imposibilidad de acceder al mercado laboral bajo formas de empleo que, aunque no necesaria-



mente tengan condiciones dignas, sean formales y garantizadas. Los enfoques teóricos presentados apuestan en estas experiencias en cuanto prácticas que, además de resolver problemas inmediatos, también desafían o cuestionan las relaciones de poder que reproducen las desigualdades sociales. Esta hipótesis se basa en una concepción de la dominación contemporánea que no ubica las relaciones de poder en lugares o actores privilegiados, sino que las reconoce en su carácter difuso e impersonal; al mismo tiempo que distingue la resistencia y la construcción de alternativas no sólo en la práctica de confrontación explícita a los actores dominantes, sino en todas aquellas que se dirigen a no reproducir las jerarquías y desigualdades que estructuran la sociedad.

En el caso de las experiencias analizadas en esta investigación, se reconoce que esas diferentes prácticas, desde la economía social y solidaria o popular, potencialmente abren pistas para cuestionar la distinción jerárquica entre producción y reproducción, con la cual se invisibilizan y desvaloran ciertas actividades humanas fundamentales, pero no mercantiles, a menudo realizadas por mujeres, o ciertos recursos de nuestros entornos de vida; así como la distinción entre empleo formal e informal, con la que se excluyen amplias partes de trabajadores y trabajadoras de América Latina del acceso a la seguridad social y a las garantías del derecho. En términos generales, dichas experiencias difusas desde la sociedad civil organizada pueden potencialmente contribuir para avanzar en el cuestionamiento social de algunas de las manifestaciones de la dominación del dinero que rige nuestra sociedad, es decir, de la continua imposición de la lógica mercantil de la productividad y competencia como únicos criterios que orientan la sociedad y las vidas de las personas mismas, reproduciendo exclusión y desigualdades.

Analizar los casos de estudio desde este enfoque, permite abordar su comprensión desde una mirada que no se limita a observar los efectos inmediatos de las respuestas implementadas



ante la crisis agudizada con la pandemia, sino que busca entrever en ellas a potenciales avances, desde lo local y lo particular, al interior de un proceso más amplio de cuestionamiento de las relaciones desiguales que reproducen la sociedad contemporánea. Así, las respuestas ante la crisis, analizadas en la investigación, representan acciones que, de manera explícita o implícita, pueden insertarse en una postura social más amplia y difusa de no querer regresar a la normalidad anterior a la crisis, que para millones de personas representaba la condición de carencia y la falta de oportunidades, sino participar en una reactivación desde abajo que no se limita a reactivar los circuitos económicos de la producción y la explotación capitalista, sino a construir alternativas sociales dignas para todas y todos.



PARTE II

ECONOMÍA POPULAR Y ECONOMÍA
SOCIAL EN LA PANDEMIA

CASOS DE ESTUDIO





Esta segunda sección del libro presenta los casos de estudio sobre los cuales es pertinente hacer algunas precisiones. Es difícil agruparlos y establecer una clara distinción entre ellos, lo cierto es que algunos son organizaciones de la sociedad civil que apoyan a sectores vulnerables y otros claramente son reconocidos como colectivos que operan desde la economía social y solidaria o la economía popular.

Los primeros tres casos son el Centro Loyola en Cuba, Casa Monarca en México y Hogares de Cristo en Argentina. El común denominador es que son organizaciones civiles con identificación religiosa y relativa solvencia financiera. Aunque también con un carácter religioso, la UTEP en Argentina, MTC de Guatemala e Iprofoth en Perú comparten la característica de ser organizaciones gremiales/sindicales de trabajadores. Los siguientes casos son mexicanos y comparten el hecho de estar bajo los principios de la economía social y solidaria; éstos son Gladimex, Yomol A'tel y LF del Centro Cooperativa. Finalmente presentamos La Guía en México, Fedecaces de El Salvador y Apro Mujer en Costa Rica, las cuales son cooperativas de servicios.

Los sujetos atendidos por estas organizaciones representan un amplio espectro de la población y lo mismo son migrantes, trabajadores de diferentes sectores económicos, cooperativas, niñas y niños, mujeres, jóvenes y población vecina a la ubicación de estas instancias. En cualquier caso, es población que, frente a las consecuencias de la pandemia, quedó desprotegida y no necesariamente fue beneficiaria de las organizaciones.

CASOS DE ESTUDIO

Caso	País	Población	Sector productivo
Gladimex	México	Trabajadores por cuenta propia	Agrícola y servicios
LF del Centro Cooptiva	México	Sindicato de trabajadores independientes	Servicios y producción
FEDECACES	El Salvador	Población vulnerable de la ciudad y rural	Servicios financieros y de seguros
Apro Mujer	Costa Rica	Mujeres	Organización que apoya no sólo a sus socias, sino a la comunidad
Movimiento de Trabajadores Campesinos	Guatemala	Rural e indígena	Organización social que aglutina trabajadores rurales por cuenta propia o dependientes de varios sectores
Centro Loyola Reina	Cuba	Población vulnerable / ancianos / mujeres / niños y niñas	Organización de carácter religioso de la Sociedad Civil
Casa Monarca A. C.	México	Población migrante	Asociación de la Sociedad Civil
La Familia Grande de los Hogares de Cristo	Argentina	Población vulnerable	Organización comunitaria
UTEP	Argentina	Trabajadores y trabajadoras	Sindicato
IPOFOOTH	Perú	Trabajadoras del hogar	Asociación Sociedad Civil

Fuente: Elaborado a partir de la Información de Trabajo de Campo.



CENTRO LOYOLA REINA

Alessandro Grassi

(Texto elaborado con base en la entrevista con los integrantes del Centro Loyola Reina: Dialvys Rodríguez y José Novales; y el director del centro Orgiel Sanzo.)

El Centro Loyola de La Habana, Cuba, es una institución de la Compañía de Jesús en el Centro de La Habana que juega un papel principalmente de carácter educativo. Aun siendo una organización basada en la fe, es un espacio inclusivo que no requiere que colaboradores ni usuarios profesen la fe católica. La misión del Centro es contribuir a la creación de un tejido social que favorezca la equidad, la justicia social y el pleno desarrollo de las personas. Para perseguir su cometido, normalmente, el Centro funciona como un lugar de acompañamiento educativo y psicológico donde se llevan a cabo asesorías, talleres y cursos para diferentes grupos poblacionales. En especial, se trabaja con niños, mujeres, madres solteras y adultos mayores que viven en las cercanías de la sede.

La peculiaridad de la experiencia de la pandemia del Centro Loyola es el contexto cubano. Las condiciones políticas de la isla y los efectos económicos de la pandemia han impactado no sólo en la capacidad de producir y consumir bienes, sino también en el marco jurídico general en el cual ha operado el centro. Los anteriores son elementos imprescindibles para narrar y pensar las acciones del Centro a lo largo del último año. En primer lugar, cabe destacar que, si bien la respuesta de las instituciones ha sido muy eficaz en un primer momento, el bloqueo al turismo y las acciones tomadas por el gobierno de Trump en Estados Unidos, para limitar el envío de remesas a la isla caribeña, han generado una crisis multidimensional del sistema cubano que, a principios



de 2020, sigue condicionando fuertemente la vida de las personas. Además de la dificultad para repartir bienes de consumo de primera necesidad, como los de aseo, se ha desarrollado una crisis alimentaria que se relaciona con los límites estructurales de una economía que importaba la mayoría de los productos.

La crisis también ha acelerado procesos que ya estaban en camino, obligando al gobierno a intentar solucionar el problema, a través de una reforma económica importante que se planteaba desde hace muchos años y que nunca pudo lograrse. Los efectos de ésta fueron desestabilizadores para instituciones como el Centro Loyola y, en general, ha favorecido procesos de reorganización en muchos aspectos de la sociedad.

Desde el punto de vista del Centro es posible identificar tres momentos distintos en la implementación de las actividades durante la pandemia. Un primer momento abarca desde marzo hasta agosto de 2020, el segundo, de septiembre a final de año y, el tercero, de finales de enero de 2021 hasta la fecha.

En la primera fase, respondiendo a las directivas del orden jesuita, el Centro decidió cerrar las actividades presenciales para el público a partir de marzo, cuando la pandemia ya había golpeado Europa, aunque no había llegado con fuerza a Cuba. Durante esta fase el Centro se preocupó por garantizar a las y los colaboradores (alrededor de 80 personas) el sueldo completo. En ese momento, se desarrollaron dos acciones, una hacia lo interno y la otra hacia los usuarios.

Se decidió llevar el sueldo de trabajadores y trabajadoras directamente a sus domicilios, así pudieron limitar sus movimientos y la necesidad de salir. A su vez, siguiendo la misma lógica y aprovechando el privilegio, bastante raro en Cuba, de tener un vehículo, se usó éste para apoyar a las y los colaboradores, llevándoles alimentos y bienes a sus casas, con particular atención a los más vulnerables. Esto fue muy importante porque, con las medidas de confinamiento, también el transporte público dejó de operar.



Es durante estos primeros meses que surgieron las ideas que ocuparon la energía del Centro para la segunda fase. En el encierro, las y los integrantes pensaron la forma de seguir brindando servicios a las mujeres y hombres usuarios desde su propia casa. Esto, cabe señalar, ha sido un reto muy grande para el Centro, no sólo porque hasta ese momento las actividades habían sido presenciales, como pueden haber sido en otras experiencias en distintas partes del mundo, sino también porque la falta de costumbre en el uso de las redes sociales y los dispositivos informáticos en Cuba complicó el asunto. Sin embargo, especialmente a partir del área de educación del Centro se decidió abrir grupos de apoyo a través de whatsapp y telegram.

Nació así el primer grupo enfocado a jóvenes y adolescentes para brindar las actividades de refuerzo escolar que normalmente se hacían en el Centro. Este grupo acompañó a padres y madres que ayudaban a sus hijos e hijas a seguir las “teleclases”, es decir, el programa que el gobierno había armado a través de la televisión, mientras las escuelas permanecían cerradas. Además de esta función, el grupo intentó atender la tensión generada en la población con actividades lúdicas. El tema de la tensión es algo que muchos entrevistados y entrevistadas resaltaron varias veces en la conversación, siempre subrayando cómo la vida en Cuba, en lo general, no está acostumbrada al encierro, ni a distraerse “informáticamente” para compensar la falta de actividades afuera.

Paralelamente surgieron otros dos grupos. El primero de acompañamiento a emprendedores que generó también un boletín llamado *la Incubadora* que trata temas específicos de cuentapropismo, uno de los sectores más afectados por la crisis y con el cual el centro desde hace tiempo lleva a cabo actividades.

El segundo se dirigió a la población de adultos mayores. Ya antes del encierro, el Centro había comprado materiales para el aseo que fueron entregados como “módulos de aseo” directamente a las y los ancianos de la casa.



Se constituyó también una red “interna” llamada *Interloyola*, a través de la cual las y los integrantes del Centro se intercambiaban informaciones sobre dónde poder conseguir productos. Esto es algo que podría parecer muy banal o poco relevante, pero, mirado en el contexto de gran escasez como el cubano, tiene un valor fundamental.

De esta forma el Centro logró mantener activas sus redes y, además, ampliarlas. El uso de Internet permitió alcanzar personas que, por dificultades económicas, físicas (discapacidades), o de distancia (algunos participantes se encuentran en el extranjero), antes estaban imposibilitadas para participar en las actividades del Centro.

La constitución de esta red “virtual” fue una experiencia nueva para los integrantes del Centro que, en general, juzgan como valiosa y positiva. Si al principio se consideró como una estrategia simplemente dirigida a “limitar los daños”, a medida que fue transcurriendo el tiempo, los integrantes se concientizaron en el sentido de que la nueva modalidad de trabajo tenía varias ventajas. La idea es que el trabajo en forma “virtual” también debe continuar porque, de alguna manera, potencia las posibilidades del Centro y permite reconocer una demanda que antes había quedado oculta. A su vez, hay que señalar que, dado que no todas las y los usuarios del Centro tenían acceso a una conexión, algunos recibieron asistencia a través del teléfono fijo.

Bajo esta forma organizativa, los grupos quedaron activos hasta el mes de julio. Después, se decidió hacer un corte porque el equipo del Centro estaba muy agotado y necesitaba tomar un tiempo de vacaciones. Agosto fue mes de descanso con la idea de poder abrir de forma presencial, a más tardar, en noviembre.

Inició así un tiempo de gran incertidumbre: empeoró la situación de la pandemia y el gobierno extendió las medidas de confinamiento, cambiando los planes del Centro. El cierre hubiera podido terminar en diciembre, pero por ese entonces se decidió esperar hasta enero. Esos meses, ante el hecho de que



la normalidad no iba a volver pronto, fueron los más confusos, y la calidad del servicio del Centro Loyola, también en forma virtual, se vio afectada. Principalmente, se hizo trabajo interno, como preparar las aulas y organizar todo para que se pudieran respetar las normas de seguridad para la salud durante las futuras actividades presenciales.

Por si eso no fuera poco, llegó la reforma económica que, entre otros aspectos, cambió el sistema monetario. Si hasta ese momento en la economía cubana circulaban dos monedas, se eliminó una, el CUC (peso convertible), para que quedara solamente el CUP (peso nacional), que entró con una tasa fija de cambio con el dólar. Esto generó un reto muy grande para la economía del Centro Loyola, el cual, dependiendo principalmente de fondos provenientes del extranjero, vio “devaluarse” el presupuesto que disponía.

Esto ocurrió en diciembre y tuvieron que calcular el presupuesto para el nuevo año en pocas semanas. El resultado fue un recorte muy fuerte. Si hasta ese momento se habían podido mantener todos los trabajadores, en el nuevo año, la extensión de la crisis implicó disminuir el número de colaboradores y colaboradoras a la mitad, llegando a permanecer sólo 45 empleados.

La crisis afectó vigorosamente al Centro Loyola. En enero tenía planeado iniciar cuatro nuevos proyectos, sin embargo, las limitaciones económicas se hicieron sentir también en el exterior, donde está su principal fuente de financiamiento. El resultado es que, en la actualidad, de un total de cuatro, únicamente un proyecto se puso en marcha. Gracias al financiamiento recibido por la fundación Porticus pudieron retomarse algunas actividades, aunque no presenciales.

Se trata, en especial, de un programa de educación sobre temas medioambientales para niños, niñas y adolescentes. Además de eso, con los mismos fondos, el Centro puede financiar el equipo de comunicación y las actividades de la biblioteca, y gracias a ello se han abierto grupos en telegram para ofrecer servicios.



Asimismo, debería iniciar otro proyecto, pero, aunque ya ha sido confirmado, los fondos al momento de la entrevista no habían llegado. El propósito es llevar a cabo un programa de educación para niños y niñas sobre temas de emprendimiento en el sentido de desarrollar capacidades para realizar un proyecto de vida.

Es importante subrayar que, aunque el número de personas empleadas haya disminuido drásticamente, varios de las y los colaboradores siguen gravitando alrededor del Centro Loyola de forma voluntaria. Es el caso de las personas responsables de este segundo proyecto, las cuales han ido formándose y preparándose para el inicio de las actividades de forma absolutamente autónoma, aun sin las garantías de recibir sueldos.

Para concluir, observamos cómo los efectos negativos y los pequeños efectos positivos que la pandemia tuvo sobre la sociedad cubana se reflejan y afectan fuertemente también el microcosmos del Centro Loyola.

En general hubo un empeoramiento y un efecto de visibilización de las diferencias sociales y de los grupos vulnerables que existían antes de la pandemia. Al mismo tiempo, frente a esta situación, se han generado nuevas estrategias para atender los problemas. El Centro mismo ha participado de esta dinámica, sin embargo, el hecho de que el sistema cubano esté en transición, que tradicionalmente el Estado sea el principal actor y que la sociedad civil juega un papel menor y diferente respecto de otros países, hace que las acciones de ésta se perciban como un complemento a las carencias del Estado, quien no logra cubrir las necesidades de la población en este momento de crisis.

Como ya se comentó, el Centro considera seguir con lo “virtual” a largo plazo, reconociendo la gran oportunidad que en este aspecto se abrió durante la pandemia. Aún quedan dos obstáculos, en primer lugar, el tema de la posibilidad de hacer planes a corto y medio plazo. Dada la incertidumbre general, el sentimiento que domina el ambiente es el de “espera” que se clarifique un poco



cómo y cuándo evolucionará la situación. En segundo lugar, si se lograra abrir las actividades presenciales, queda el problema del presupuesto, que verosímilmente no alcanzará para mantener activo también el ámbito “virtual”.

En medio de la poca claridad y aun con muchas dificultades, el Centro Loyola ha contribuido a mantener los vínculos entre las personas y, muy importante, a proveer una actividad y con ella un sentido a la cotidianidad de la crisis. Incluso, dentro de la espera, ha permitido a las y los integrantes ir más allá del día a día y se ha construido un pensamiento hacia los demás que es la solidaridad a través de la idea de brindar ayuda y servicio a la población de los usuarios del Centro.

CASA MONARCA A. C.

Alessandro Grassi

(Escrito con base en una entrevista a Eduardo Zavala, director de Casa Monarca A. C.)

Casa Monarca es una asociación que se constituyó el 4 noviembre de 2015 en el estado de Nuevo León, al norte de México, con el objetivo de brindar apoyo a la población migrante. El tema de la migración es particularmente relevante dada la ubicación geográfica.

Por su posición y condición económica, México es un país con un flujo fuerte de migración en tránsito, así como de emigración, en ambos casos con destino principal a Estados Unidos. Además, el estado de Nuevo León está particularmente permeado por el fenómeno migratorio, no sólo por ser una entidad fronteriza, sino también por ser una de las más ricas de la federación mexicana, lo cual se traduce en una alta oferta de empleos en comparación con muchos otros lugares del país. La población migrante atendida por la asociación se divide en diferentes categorías: migrantes en



tránsito, migrantes refugiados y emigrantes deportados desde Estados Unidos. En general, la pandemia afectó la actividad de Casa Monarca porque impactó directamente los flujos migratorios. Sin embargo, la relativa seguridad económica permitió a la asociación seguir operando sin preocupación. Las actividades se adaptaron a nuevas exigencias y también a un flujo migratorio modificado. La mayoría de los migrantes atendidos (alrededor de 7 400 personas) desde antes de la pandemia procedían de Venezuela, Honduras, El Salvador, Cuba y, en menor proporción, de México, Guatemala y Nicaragua. De ellos, 55 % tiene menos de 30 años. La crisis económica generada por la pandemia también llevó consigo una ola de violencia doméstica, por ejemplo, en Honduras.

La actividad general de la asociación es brindar apoyo a los migrantes, y la forma en la que éste se brinda es variada. Casa Monarca se caracteriza por estar vinculada, en diferentes niveles, con varias instituciones (colegios, registro civil, DIF, Subsecretaría de gobierno, las Secretarías de Estado) y otras instancias (desde la fundación Femsa, Catholic Relief Service, Jóvenes Sin Fronteras, hasta la iniciativa “Porta Morada”). La interacción se da no tanto en búsqueda de apoyo económico, sino, como ya se hacía antes de la pandemia, en función de la construcción de planes de intervención para la población de migrantes. En el contexto pandémico Casa Monarca no ha sido una instancia afectada drásticamente como otras, aun así, la asociación ha tenido que revisar y reconfigurar sus actividades a las medidas de confinamiento y también a un contexto radicalmente mutado. Su capacidad de adaptación derivada de diferentes factores, y su posibilidad de vincularse con un espectro muy amplio de actores permitieron a la asociación sobrevivir a la pandemia, identificando y desarrollando nuevas prioridades y áreas de intervención. Sin embargo, esto ha sido un trabajo difícil que ha implicado ajustes fuertes en varios ámbitos.



Adaptaciones

Si consideramos la estructura organizativa, por ejemplo, la pandemia ha afectado de manera amplia el número de personas involucradas en las actividades. Aunque en la actualidad la organización se compone de 25 trabajadoras y trabajadores con diferentes áreas de especialización (psicológica, jurídica y administrativa) y en general el número de contratos se ha podido preservar, es cierto que, durante la pandemia, el trabajo de los voluntarios se ha reducido hasta casi desaparecer. Antes, la asociación se apoyaba con el trabajo voluntario de alrededor de 70 personas, de las cuales hoy sólo colaboran dos.

Otro cambio importante, desde el punto de vista de las actividades llevadas a cabo, se relaciona con el brindar ayuda directa a los migrantes en camino. Al principio la acción principal de la asociación era ir a las vías del tren para entregar apoyos materiales; a lo largo del tiempo a esa actividad se agregaron otras de consultoría y acompañamiento jurídico. Con la pandemia de COVID-19 los integrantes de la asociación han dejado completamente de ir al ferrocarril. Atender a los migrantes cerca de las vías del tren fue la primera forma de acción de la asociación, pero no ha sido posible seguir con esta diligencia por respetar las medidas de protección sanitaria.

Sin embargo, una de las claves que permitieron a la asociación sobrevivir fue la disponibilidad económica que, aunque limitada, ha sido constante. En este sentido, cabe decir que la asociación vive de recursos externos, la recaudación de fondos es llevada a cabo por dos integrantes de tiempo completo, lo cual garantiza que, aunque haya problemas financieros, nunca se llegó, ni en la pandemia, a tener que recortar los sueldos. En el último año los problemas se acentuaron porque muchos de los donantes reajustaron sus presupuestos y Casa Monarca tuvo que adaptarse. Sin embargo, lo que ayudó mucho a la asociación fueron los convenios con asociaciones



internacionales, como la cooperación vasca y el Catholic Relief Center, la Cáritas de Estados Unidos. Sin embargo, es el vínculo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien garantiza un flujo de dinero más estable. De los 25 trabajadores actuales, 10 dependen del presupuesto del proyecto con ACNUR y, en total, ese mismo proyecto representa alrededor del 60 por ciento del presupuesto de Casa Monarca.

Una de las actividades principales de la asociación es el apoyo a los refugiados que ACNUR transfiere a Monterrey. La actividad tuvo un paro de casi un año; hasta el 20 de marzo de 2020 la asociación atendía entre 95 y 120 refugiados cada semana. Con el COVID-19 las llegadas se detuvieron hasta febrero de 2021. Cuando reiniciaron, la atención y apoyo en temas de vivienda, empleo, salud y asesoría jurídica tuvieron que adaptarse a las nuevas reglas por la pandemia. Los ingresos ahora están escalonados, lo cual dificulta y ralentiza el proceso, admitiendo máximo ocho personas en las oficinas. Por lo tanto, brindó apoyo jurídico y también psico-social y psicológico de forma telefónica, virtual (por whatsapp) o presencial. En la parroquia quedó un equipo atendiendo solamente a los migrantes en tránsito, mientras los refugiados tuvieron que ser procurados por whatsapp o por teléfono.

Durante los primeros meses de la pandemia, Casa Monarca operaba en un espacio rentado, sin embargo, éste se cerró en junio de 2020 cuando terminó el contrato, así, parte de las actividades se llevaron a cabo en una parroquia. Por un lado, esto permitió ahorrar dinero, por el otro, se previó la apertura de un albergue propio de la asociación. Las obras para la construcción de este albergue en Santa Catarina, en la periferia de Monterrey, llevan retraso, pero deberían terminarse en los próximos meses.

Nuevas acciones

No se trató solamente de adaptar o limitar los servicios regulares de la asociación, sin embargo, la pandemia permitió a Casa



Monarca pensar también en nuevas acciones y campañas específicas para migrantes dentro del contexto pandémico. Además, la asociación tuvo que enfrentar necesidades nuevas surgidas con la pandemia, como pérdida de empleo, educación a distancia, salud física y mental, así como la dificultad de integración por el resguardo sanitario.

En primer lugar, se organizó un programa de entrega de despensas y ayudas que siguió operando desde marzo de 2020 hasta agosto del mismo año, cuando se acabó el presupuesto. Cada día, la asociación entregó a domicilio, en casas de refugiados en las periferias de Monterrey, una despensa. En septiembre, cuando se terminaron los recursos, al mismo tiempo la ciudad experimentó una pequeña reactivación económica, entonces Casa Monarca decidió dirigir sus esfuerzos hacia la inserción laboral, atendiendo de esta forma uno de los principales retos generados por la pandemia, o sea, la falta de ingresos. Este tipo de acciones fueron posibles a través de la ampliación del equipo jurídico que ocurrió durante la pandemia. En este ámbito encontramos tres acciones:

1. Juntamente con ACNUR y FEMSA se firmó un convenio para la contratación de 50 refugiados cada mes para que trabajaran en los OXXO.
2. Otro programa exitoso se llama “Compartiendo cubrebocas”. Ello involucró a 13 mujeres y nueve hombres refugiados, los cuales se formaron y produjeron 350 cubrebocas con 13 máquinas de coser donadas por una fundación. Al final, los cubrebocas se donaron al estado de Nuevo León.
3. Siempre en la dirección de la inserción laboral, la asociación se comprometió a otorgar a tres mil refugiados su identificación CURP, un documento imprescindible para quien quiere trabajar regularmente en México.

Más allá de la inserción laboral, se abrieron varios frentes con la organización de acciones y campañas de apoyo, con particular



atención a la población migrante más vulnerable: las mujeres, los niños y las niñas. También en este caso encontramos tres intervenciones:

1. La campaña “Ayúdame a estudiar en casa”, en apoyo a niños y niñas para garantizar que tuvieran una televisión que les permitiera seguir las clases escolares transmitidas durante el tiempo del encierro.
2. La campaña “Acoger y proteger con amor”, en soporte a recién nacidos en familias uniparentales subempleadas o desempleadas. Durante esta campaña se entregaron artículos de cuidado, de higiene personal y otros para bebés. En total fueron beneficiadas 23 mujeres.
3. También se organizó una campaña de concientización para el registro de los nacimientos de niñas y niños de refugiados con el fin de que fueran reconocidos inmediatamente. En el marco de esta actividad se otorgaron 188 orientaciones y 17 acompañamientos directamente al registro civil.

Como mencionamos al principio de este texto, la asociación tuvo que atender una composición nueva de migrantes. Destacó el aumento de mujeres y madres solteras con hijos. Eso obligó a considerar más el tema de la violencia familiar y, a la par, dar asesoría para los trámites migratorios y jurídicos.

Al mismo tiempo, la dimensión del estrés psicológico adquirió mayor importancia en los meses de encierro, afectando no sólo a los beneficiarios de las acciones de la organización, sino también a los y las integrantes de la misma Casa Monarca. La carga de trabajo y las condiciones en las cuales se tuvo que trabajar, hizo necesaria una particular atención a la salud mental de las y los trabajadores. La asociación atendió esto organizando espacios específicos para platicar sobre el tema y garantizar que cada integrante recibiera la atención necesaria, destinando parte del presupuesto al cuidado del personal.



Otro logro realizado durante el año de pandemia ha sido la constitución de una “gobernanza de migración” local en Nuevo León. Este proyecto estaba en los planes de Casa Monarca desde hace tiempo y la pandemia ha funcionado como catalizador, acelerando el proceso institucional apoyado por la asociación.

Perspectivas futuras

Si, por un lado, la relativa tranquilidad económica derivada de los vínculos internacionales que la asociación tiene ha permitido un proceso de adaptación menos “traumático” en comparación con otras experiencias, por otro lado, la dependencia económica de financiadores externos es un problema que se ha presentado con más fuerza. Por lo tanto, la asociación está buscando formas de generar ella misma ingresos para no tener que depender completamente de las donaciones. Una posibilidad es dar asesoría legal a empresas que abundan en el territorio donde está ubicada la asociación. Esta opción, de alguna forma, es consecuencia directa del haber tenido que contratar más abogados y abogadas para cumplir con las acciones generadas durante la pandemia. Desde este punto de vista, Casa Monarca considera la sustentabilidad financiera como el primer obstáculo a cualquier posibilidad de construir acciones autónomas, independientemente del contexto; la pandemia y los problemas que ésta ha conllevado han permitido identificar aún más claramente este objetivo estratégico.

LA FAMILIA GRANDE HOGAR DE CRISTO

Emilce Cuda

(Texto compuesto con base en una entrevista con monseñor Gustavo Carrara, obispo de los barrios populares; presbítero Charly Olivero, secretario de FGHC, y la licenciada Lucía Pardo, coordinadora de acciones rurales familiares.)



La organización comunitaria popular de origen católico, llamada Familia Grande Hogar de Cristo (FGHC), es la más grande y relevante de Argentina, junto con la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular). En este texto se describe brevemente, por un lado, las características generales de la organización, es decir, su estructura y sus actividades comunitarias económicas y sociales. Por otro lado, se muestra la espiritualidad que ella atraviesa, sin la cual la eficacia de las actividades planificadas no sería posible.

La Familia Grande de los Hogares de Cristo es una federación nacional situada en Argentina, que agrupa centros barriales en todo el país y tiene como prioridad dar respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad social y/o consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Mediante una federación de cooperativas desarrolla actividades educativas y económicas que satisfacen necesidades sociales urgentes y existenciales, no sólo de jóvenes sino también de familias vulnerables. Se promueven valores cristianos a través de su lema “la vida como viene”, favoreciendo la construcción de lazos sociales en torno a las “3 C” (Capilla-Colegio-Club), como estrategia para abrir el espacio público a la palabra política como demanda por derechos sociales más allá de las demandas primarias por alimentos. Esto último significa un modo local de encarnar las “3 T” que emergieron como lema de los movimientos populares: Tierra-Techo-Trabajo. Es importante destacar que el reclamo justo por las tres T requiere de concientización y organización popular, y para eso se deben crear los espacios públicos donde la palabra política aparezca. En ese sentido, Casa-Colegio-Club son los espacios comunitarios necesarios para que las relaciones sociales amorosas surjan primero, luego el amor a sí mismos, más tarde el amor a la familia y al barrio y, por último, al país como proyecto de sueños compartidos. Cuando eso ocurre, las personas de las periferias estarán realmente integradas al resto de la comunidad que conforma la nación.



FGHC se ocupa de identificar jóvenes de los sectores marginales con problemas de adicción para recuperarlos y rehabilitarlos socialmente, poniendo al centro el trabajo como organizador de la vida. Para eso cuenta con: 1) “Centros Barriales” de atención psico-física; 2) “Espacios de Bajo Umbral”, que son los centros de día; 3) “Hogar de Bajo Umbral”, cuya misión es dar techo por una noche a jóvenes en situación de calle; 4) “Casa de Medio Camino” para jóvenes que ya han comenzado el proceso de rehabilitación; 5) “Carpa Solidaria”, espacio de actividades recreativas para tener un primer contacto con los jóvenes; 6) “Proyectos Socio-productivos” a partir de la conformación de unidades económicas productivas familiares, consistentes en granjas sustentables y talleres de microemprendimiento para el trabajo, como el cuidado de personas y del medio ambiente; 7) “Centros Educativos” de nivel inicial, medio y terciario (presencial y virtual), para la comunidad de los barrios; 8) “Centro de Estudio e Investigación de la FGHC”, para sistematizar, investigar y difundir conocimientos relacionados con el acompañamiento integral y comunitario de jóvenes y adultos; 9) “Biblioteca” para la edición y publicación propia de libros, revistas, videos y boletines con material resultante de la investigación situada en el barrio (todo disponible virtual y físicamente).

El ámbito de interacción productivo está relacionado, en primer lugar, con la construcción de conocimiento social, político y económico desde los saberes propios de la periferia, a partir de la experiencia mística comunitaria. Es así cómo, en 2020, inauguran la primera Universidad Latinoamericana de las Periferias. Ésta asumió la forma académica de cátedra abierta, eso significa que cada semana se realiza un nuevo encuentro con una temática concreta que es de interés vital para las comunidades de las periferias. Los encuentros tienen el siguiente formato: un coordinador académico del encuentro, encargado de elegir a los disertantes, presentarlos, introducir la problemática, recapitular lo



dicho por los invitados y luego conducir el debate. Es de destacar que el convencimiento de que todos aportan un saber, no sólo los académicos con su conocimiento científico, sino también los trabajadores con su conocimiento empírico-existencial, hace que entre los panelistas se mezclen académicos, sindicalistas, líderes barriales, referentes de la economía popular, funcionarios públicos y agentes de pastoral.

En segundo lugar, como ámbito productivo, se ubican las actividades laborales de servicios, como el cuidado de personas, la limpieza de hogares y el reciclado de la basura urbana. Aquellos que viven en las periferias trabajan en el sector de servicios asistiendo a los sectores medios y medio altos que habitan los centros urbanos. Los servicios que generan más puestos de trabajo son: limpieza de casas de familias y oficinas; cuidado de niños, enfermos y ancianos; reciclado de la basura; construcción y servicios a la propiedad en general. Sin embargo, no todos son trabajos de empleo formal, la mayoría trabaja informalmente, lo que se conoce como “trabajo en negro”. Estas personas no tienen ningún tipo de cobertura social, por lo cual una enfermedad o una crisis económica los deja de inmediato sin ingresos. Es de resaltar que los grandes conglomerados de los conurbanos se generan por la cercanía a los lugares de trabajos de servicio, ya que el alejarse implicaría más de dos horas de viaje en transporte público y un gasto considerable en pasajes.

En tercer lugar, se ubica la producción de alimentos mediante granjas de cooperativas familiares. Esta es la modalidad más sana de la economía informal. Con ayuda del Estado, se consiguen terrenos públicos en desuso y se traslada una población de familias completas (entre 10 y 50 de éstas), se consigue el financiamiento para las viviendas (muy básicas), se les enseña el oficio de la agricultura y se les facilita la logística de distribución y venta –aunque ésta nunca llega a los grandes centros comerciales–. Esto supone un trabajo previo y prolongado de militancia política y pastoral, ya que,



como se dijo anteriormente, las personas no quieren alejarse de los conurbanos porque eso supone falta de trabajo. Lograr movilizarlos es un arduo trabajo de concientización y contagio de sueños por una vida más sana y en familia. Es allí donde los colaboradores voluntarios de la FGHC cobran sentido en esta estructura. Un trabajo silencioso y de mucha demanda física y emocional para quienes han tomado la decisión de involucrarse en mejorar la calidad de vida de los descartados. Los voluntarios, por lo general, son católicos militantes políticos y agentes de pastoral al mismo tiempo; jóvenes de entre 18 y 35 años, con estudios universitarios completos, en muchos casos también con posgrados, cuyo trabajo es rentado por sindicatos y movimientos populares. También, ellos son los encargados de gestar ante los funcionarios locales de gobierno: tierras, financiamiento, bolsones de comida, herramientas y materiales de construcción.

En cuanto a las consecuencias socioeconómicas a raíz del COVID-19, la cuarentena se realizó con otros protocolos especiales para los barrios. La consigna no era “quédate en tu casa”, sino “quédate en tu barrio”, dado que era imposible estar dentro de las casas porque éstas son sólo casillas precarias, monoambientes, con una familia ensamblada de varios integrantes. Sus viviendas no tienen agua privada, sino una toma de agua común, lo cual no ayudaba a mantener la higiene que requiere la pandemia, podían circular, pero no salir ni entrar de los barrios. Las consecuencias socioeconómicas fueron: 1) falta de ingresos por la suspensión total de trabajos informales; 2) aumento de violencia familiar por condiciones de hacinamiento, especialmente contra mujeres. Los momentos de emergencia fueron los quince primeros días de la cuarentena, cuando no se contaba con protocolos, ni ingresos. La FGHC se preparó rápidamente para conseguir recursos y asistencia del Estado. La organización se realizó en conjunto con la UTEP, ya que ese otro organismo gremial de la economía popular agrupa a trabajadores de los barrios populares. Las capillas y los clubes



de los barrios se transformaron en centros comunitarios de aislamiento para los abuelos, como resultado, el número de contagios y muertes fue muy bajo, contrario a lo que se esperaba.

Al momento de la pandemia, las comunidades barriales ya estaban muy bien organizadas por los sacerdotes (curas villeros, cuya credibilidad es muy alta); eso evitó el caos, previno crímenes, contagios y muertos. La respuesta del Estado ante los reclamos de los sacerdotes fue inmediata y los vecinos cumplieron con el protocolo. El principal programa estatal de emergencia fue el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que alcanzó a 9 millones de personas, consistente en 60 dólares mensuales por adulto desempleado que lo solicitó. Se abrieron cuentas bancarias sin costo para que cada uno de los beneficiarios tuviese a su disposición una tarjeta para retirar el dinero. También lograron el apoyo de la opinión pública mediante la publicación en los medios de declaraciones donde solicitaban que se sensibilizara ante la situación de los barrios, no los estigmatizaran, y que colaboraran con una integración urbana entre centro y periferia, adquiriendo los productos de la economía popular (en general, alimentos de granjas y comidas artesanales elaboradas en los barrios). Esto explica la insistencia del Papa Francisco en la organización de la comunidad, en que la comunidad salva, en que la organización social de los de abajo es la energía moral de donde vendrá el cambio. Sin esos lazos comunitarios amorosos, no sería posible la supervivencia en las periferias; esos lazos sociales son el resultado de una “pasión hecha acción comunitaria”, como remarcó el pontífice en el Segundo Discurso a los Movimientos Populares, en Santa Cruz de la Sierra.

La transformación que produjo la situación especial de la pandemia, ocasionada por el COVID-19 entre los vecinos de los barrios, fue un mayor grado de conciencia comunitaria sobre sus derechos a Tierra-Techo-Trabajo, a la participación política en los procesos de toma de decisiones políticas y económicas –principalmente en



el Estado, pero también en las empresas–, y a la responsabilidad social y solidaria institucionalizada. Para las periferias, la frase del Papa Francisco, expresada en la Cuaresma de 2020, en el momento más crítico de la pandemia en Europa, “nadie se salva solo”, no es una frase romántica, ni una metáfora. Esa frase cobró pleno sentido, no sólo por la situación de pandemia, sino a lo largo de las vidas de sus habitantes, los cuales, para sobrevivir hasta el día siguiente, necesitan la ayuda del otro. Si bien esa es la misma condición humana (ya que, de acuerdo con la teología trinitaria y la antropología cristiana, el ser es relacional), quienes habitan los centros urbanos no lo reconocen, y su individualismo los lleva a pensar que todo lo han conseguido solos. Esta falsa percepción llega a tales niveles que los trabajadores informales de la economía popular, es decir, los trabajadores de servicios y del cuidado de quienes depende nuestra vida día a día, están totalmente invisibilizados. Este ocultamiento no es sólo físico, sino también económico, ya que tampoco su trabajo está registrado en la contabilidad nacional. En consecuencia, toda ayuda gestionada a su favor es registrada como gasto público.

El Papa ha dicho que de una pandemia no se sale igual, se sale mejor o peor. En Argentina los sectores populares que habitan las periferias han salido mejores. En primer lugar, organizaciones como la FGHC cobraron visibilidad por sus acciones de reclamo en los medios, y credibilidad por el uso apropiado que han hecho de los recursos. Eso hace que, también, los barrios por ellas organizados hoy sean percibidos de otra manera. Antes, nadie sabía en qué condiciones vivía esa gente, ahora lo saben porque la organización se ha encargado de mostrarlo en los medios para despertar la sensibilidad de toda la población; algo sumamente necesario para que no sean cuestionadas las políticas públicas en su favor por parte del resto de la sociedad. Ahora, los centros están sensibilizados respecto a la periferia; reconocen a sus habitantes como seres humanos, algo que antes no siempre ocurría. Reconocen que la falta de trabajo es estructural y no desgano por parte



de los pobres, no obstante, siguen resistiendo políticas fiscales en favor de los desocupados. No sabemos si la pandemia será lo suficientemente larga como para vencer esa resistencia social. El tiempo se va terminando y la miseria es imparable.

La FGHC logró alcanzar lo que el Papa Francisco llama “experiencia de salvación comunitaria”, conformar una comunidad o, mejor dicho, que las personas puedan constituirse en una comunidad, donde pueden ver, juzgar y actuar “como una sola alma”, eso significa salvación, porque “nadie se salva solo”. Cuando esto ocurre, ahí está el pueblo y no es cualquier pueblo, sino el Pueblo fiel de Dios, como lo llama el Papa argentino. Es el Pueblo de Dios porque como cuerpo místico de Jesucristo, es decir, como Iglesia, alcanza la unidad en el Espíritu Santo. Dicho de otro modo, es el Espíritu quien une y mueve a la comunidad, porque esa comunidad que conforma la FGHC es una comunidad de fe, de creyentes. Sin embargo, no todos son católicos, ni tampoco cristianos, algunos ni siquiera confiesan creer en el Dios uno y trino. Eso no importa a quienes trabajan para que esa comunidad se salve, su lema es “la vida como viene”, lo que significa que todos los que se acercan a buscar salvación son recibidos y protegidos. No son los sacerdotes, ni los agentes pastorales quienes salvan del hambre, la droga, el alcohol, la violencia familiar, el desempleo, es la comunidad la que salva. La FGHC les ofrece una protección material al darles un techo, al enseñarles un oficio, al gestionarles créditos fiscales para emprendimientos económicos familiares, pero no es eso lo que los salva de una cultura de la muerte que los puso en esa situación. Lo que los salva es el reconocimiento que una comunidad les da al recibirlos como uno de ellos.

Las personas vulnerables se sienten, en primer lugar, queridas por alguien, sienten que tienen una comunidad que no sólo los ayuda, sino que los necesita también a ellos, porque nadie se salva solo. Si quisiéramos resumir esto diríamos que la FGHC hace carne, concreta, lo que el Papa Francisco llama “amistad social”.



Nadie es juzgado por su pasado, por sus actos, por sus orígenes, todos son recibidos con amor, todos valen, todos los cuerpos son puestos en valor y, poco a poco, en cada una de las personas que se van integrando, que se van sumando, el ser humano brilla en ellos, se manifiesta la maravillosa imagen de Dios en cada joven, en cada niño o niña, en cada hombre o mujer, en cada trabajador.

Para concluir, la FGHC es una articulación de demandas por necesidad y sueños sociales, más acción de los agentes pastorales gestionando políticas públicas ante el Estado, más sacerdotes y obispos que administran los sacramentos y acompañan en el trabajo diario a los necesitados tanto como a los agentes. Como asociación civil, es la organización más grande de Argentina, cubre todo el territorio, puede dar cuenta de su misión mostrando acciones concretas y exitosas: hogares, granjas, escuelas, clubes, capillas, centros de rehabilitación y hasta una universidad. Cientos de jóvenes han sido recuperados de las adicciones y hoy están trabajando, la pandemia no produjo las bajas esperadas gracias a la gran colaboración de la comunidad que se mantuvo unida y aislada durante la cuarentena, las granjas familiares son productivas y logran cubrir las necesidades mínimas. Los sacerdotes tienen el reconocimiento del resto de la sociedad, y del gobierno, por su gran labor social y espiritual. Es un modelo de organización que merece ser conocido a nivel regional (América Latina y el Caribe), transfiriendo sus habilidades de organización comunitaria y gestión política a todo el continente. Sus líderes sociales y espirituales están capacitados y dispuestos a transferir esta experiencia a otros contextos. El Espíritu está en marcha.

UTEP

Emilce Cuda

(Escrito elaborado con base en la entrevista con Esteban ‘Gringo’ Castro, presidente de UTEP;



Alberto Vicenz, y Juan Manuel Martínez Chas,
agentes político-pastorales.)

La UTEP es una organización gremial nacional de los trabajadores de la economía popular argentina. Como organización de trabajadores, éstos se encuadran en la CTA (Central de Trabajadores de Argentina). No se organizan sindicalmente contra patrones, porque no tienen. Su modo de organización consiste en unirse gremialmente para reclamar al Estado igualdad de derechos entre trabajadores empleados/formales y desempleados/informales, de acuerdo con las recomendaciones 202 y 204 de la OIT. Cabe destacar que el lugar patronal lo ocupa el gobierno por ser un sector productivo de actividades no reconocidas como trabajo –ni por el Estado, ni por la sociedad–, por eso los reclamos son al Estado.

A continuación, se ofrece una rápida descripción de la estructura de esta organización gremial (la primera con estas características a nivel mundial) y, al mismo tiempo, señalar la importancia que el cristianismo tiene en la conformación de su unidad comunitaria y en su lucha política por la justicia social. Si bien no todos los integrantes son creyentes, ni tampoco católicos, es verdad también que en su mayoría son cristianos. La articulación de demandas por necesidades vitales y por sueños sociales, con la prédica evangélica de sacerdotes y pastores, por un lado, y con la militancia de agentes pastorales y políticos por el otro, hace que los cuatro pilares de la doctrina social de la Iglesia, coincidentes con los del movimiento político peronista de Argentina, hagan de los principios de la moral social teológica su bandera de lucha.

Es importante no confundir el modo de conformación de la comunidad, realizado a partir de la propia experiencia de anodamiento, con la habitual formación política partidaria; se habla de conformación. Esto tiene una lógica en la pastoral social argentina consistente en saber que “es el pueblo quien organiza al pueblo”, como sostuvo el beato monseñor Angelelli, y “son los trabajadores quienes organizan a los trabajadores”, lema central



de la organización de los trabajadores en Argentina. Este modo de entender las formas políticas es distinto al partidario que requiere de una *intelligentzia* o élite iluminada que adoctrina y organiza. Además, nótese que se habla de “experiencia de anonadamiento”, la cual no proviene, como en la mística tradicional, de la ascesis carnal y espiritual autoprovocada por prácticas íntimas, sino de la ascesis forzada a causa de una exclusión que obliga al ayuno de alimentos básicos y a la abstinencia de sueños. Esa experiencia de anonadamiento, la de saberse excluido de bienes y sueños, la de no sentirse amado socialmente, ni reconocido estatalmente, los lleva a sentir carnalmente la importancia existencial de institucionalizar: la dignidad humana, el acceso universal a los bienes comunes, la solidaridad entendida como derechos sociales y la subsidiariedad como participación en los procesos de decisiones sobre el modo de producción, distribución y reinversión de la riqueza. Los agentes políticos y pastorales no los enseñan, por el contrario, éstos aprenden de los descartados, en todo caso, los agentes reconocen en las prácticas culturales de las comunidades de la periferia y en sus luchas por la justicia, las categorías evangélicas que con anterioridad se repetían a nivel intelectual.

En Argentina son “trabajadores de la economía popular” quienes, para sobrevivir en un sistema de descarte, se organizan a modo de cooperativas productivas primero, y luego como movimientos populares con fines políticos. La unión territorial de cooperativas forma una federación nacional, de la cual la UTEP es el primer caso mundial. El ámbito de interacción puede ser la producción de bienes de consumo, tanto como los servicios. El ámbito productivo está relacionado, en primer lugar, con la alimentación, en segundo lugar, con la vestimenta y, en tercer lugar, con la construcción. El ámbito de servicios mayoritariamente está vinculado con el reciclado de residuos urbanos. Los trabajadores del cuidado de niños, de ancianos y del hogar, en Argentina están sindicalizados y forman parte de alguna de las



dos centrales de trabajadores nacionales (CTA y CGT), eso hace que estén integrados socialmente y perciban los beneficios sociales como cualquier trabajador empleado formalmente. Sin embargo, gran parte de los trabajadores del cuidado realizan su actividad de manera informal debido a que sus patronos no los inscriben en el Estado como empleados.

Los trabajadores de la economía popular son personas carentes de recursos: 1) económicos en todos los casos; 2) educativos a nivel superior todos, a nivel medio la mayoría, a nivel primario algunos. Son migrantes internos –del resto del país–, y externos –de países latinoamericanos: Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia y Venezuela–. Son primera, segunda y tercera generación de hijos de migrantes nacidos en Argentina, cuyas familias no han salido nunca de la condición de indigentes.

Debe destacarse el rol primordial que juega la religión cristiana como factor común a partir del cual se inicia la organización comunitaria de acuerdo con los cuatro principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Los conceptos de dignidad humana, destino universal de los bienes, solidaridad y subsidiariedad son bien conocidos por todos. La conciencia social de la comunidad no se conforma a partir de la pertenencia de clase, sino de la pertenencia al Pueblo de Dios. El reconocimiento de un Dios que es padre y creador, es decir, la fe en la existencia de un ser superior que es misericordioso y providente es lo que genera en ellos la conciencia de dignidad humana, y esto el amor a sí mismos –algo que la cultura del descarte se ocupa de destruir–. A su vez, esa fe en un Dios padre de todos logra en ellos la confianza en la comunidad que los contiene, es decir, la fe en los vecinos, el amor al prójimo, el reconocimiento en el otro de la dignidad humana, y eso los lleva a luchar por derechos sociales para todos los trabajadores, y no sólo para los de su sector productivo. Por otro lado, la fe en un Dios creador genera en ellos la conciencia del destino universal de los bienes y eso es el fundamento para luchar por el



acceso universal a los bienes creados por Dios y desarrollados por generaciones. La conciencia de dignidad y derechos los lleva a practicar inmediatamente la solidaridad y a luchar legítimamente por la subsidiariedad, al margen de cualquier estructura partidaria.

Las consecuencias socioeconómicas que han afectado a los sujetos vulnerables durante la pandemia fueron: 1) la falta de ingresos debido a que sus trabajos se suspendieron por la cuarentena (de ocho meses en Argentina, la más larga del mundo); 2) contagio de otras enfermedades por carencia de agua por vivir en condiciones de hacinamiento; 3) aumento de violencia intrafamiliar por una convivencia numerosa, de tiempo continuo, en un espacio muy reducido; 4) suspensión de la educación primaria y secundaria por falta de conectividad, lo que implica también suspensión de suministro de alimentos para los niños y para el resto de la familia (ya que llevaban comida de la escuela a sus hermanitos pequeños y sus padres). Los momentos de emergencia fueron a los quince días de iniciada la cuarentena. Ante la falta de ingresos iniciaron: 1) autoorganización comunitaria; demanda organizada de recursos alimentarios y sanitarios al Estado; 2) elaboración y presentación al gobierno de un plan nacional de emergencia quinquenal para atravesar y salir de la crisis, conocido como Plan San Martín; 3) reclamo de Salario Social Complementario –como complemento de los ingresos que obtienen de sus actividades informales–; 4) demanda de reconocimiento de la actividad realizada como trabajo para poder acceder a los recursos sociales y equipararse con el resto de los trabajadores de empleo formal; 5) reforma agraria consistente en el reparto de tierras fiscales en desuso a cambio de un arrendamiento mediante créditos bancarios a tasa cero.

Luego de un año, puede decirse que la UTEP ha comprendido la importancia de un kairós, es decir, de un tiempo privilegiado que puede generar oportunidad de cambio. No se quedaron de brazos cruzados esperando la ayuda caritativa de la sociedad, ni tampoco se limitaron a pedir ayuda cuasi-solidaria al Estado. Por



el contrario, esa comunidad, ya organizada económicamente, se organizó también políticamente para presentar al gobierno un plan concreto de acción, no sólo para atender la emergencia, sino también para salir de la situación histórica de emergencia en que se encuentran las poblaciones de trabajadores informales de las periferias. Todas las propuestas han sido tomadas en cuenta por el gobierno y se está evaluando el modo de implementarlas más allá de la pandemia. Respecto a reformas fiscales y financieras, se están presentando al Congreso los proyectos de ley correspondientes. Se logró aprobar la ley de Aporte Solidario, consistente en un pago único por parte de los grandes poseedores de riquezas individuales –no afecta a empresas, ni corporaciones, sino sólo a personas–. Las respuestas inmediatas por parte del gobierno –consistentes en asistencia alimentaria y sanitaria– lograron que el COVID-19 casi no produjera muertes en los barrios carenciados. Los efectos en la dimensión social o relacional fueron concretamente: 1) que se mantuviese un estado mínimo de orden previniendo así crímenes comunes entre los damnificados; 2) se dio más fuerza política a las organizaciones gremiales que integran la UTEP, mostrando con claridad el paso decisivo de la demanda primaria por comida, al reclamo político por derechos sociales y laborales.

Las acciones o programas de actores institucionales o de la sociedad civil que han recibido los sujetos vulnerables asociados al caso de estudio fueron: el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que alcanzó a 9 millones de personas, consistente en 60 dólares –al cambio de diciembre de 2020–, en pagos de tres cuotas. Esto se obtuvo gracias a la demanda organizada de la UTEP. Los beneficios fueron: 1) dinero efectivo en la mano de los trabajadores informales sin ingresos; 2) prevención de un estallido social. El límite es que sólo se percibe por única vez ya que no constituye una garantía básica universal permanente como reclama la OIT.

Usualmente los reclamos de la UTEP se realizan mediante movilización en el espacio público, sin embargo, respetando los



protocolos de la cuarentena, no convocó a movilizaciones y los reclamos se efectuaron por medio de sus líderes nacionales y la red de representantes barriales en negociaciones directas con el Poder Ejecutivo.

Es pertinente detenerse para entender la importancia de la movilización popular. La política, en el sentido democrático moderno, es palabra pública expresada en el parlamento por quienes representan a los que tienen una parte de los bienes comunes, por eso se los denomina “partidos”. Pero resulta que, a estas alturas del modo de producción industrial, que ha tomado la forma de capitalismo financiero dejando sin trabajo estructuralmente a más de la mitad de la población activa mundial, la mayoría no tiene parte en los bienes comunes y, en consecuencia, no tiene quién los represente en el parlamento. Dicho de otro modo, no tienen palabra pública, eso los impulsa a expresarse en otro lenguaje distinto a la palabra protagónica. Ese lenguaje es el del cuerpo, y lo sacan a la calle en señal de reclamo. Salen de cuerpo presente y dicen qué necesitan, qué suenan y cómo alcanzarlo. A ese otro modo de forma política no partidaria que reclama por manifestación, se le denomina “movimiento popular”. El populismo, tal y como se entiende en Europa y Estados Unidos, es otra cosa, es la estructura partidaria subiendo al poder mediante promesas de participación al pueblo que luego no cumplirán.

La transformación de los sujetos al interior de la organización durante la pandemia consistió en un mayor grado de conciencia comunitaria sobre sus derechos a: Tierra-Techo-Trabajo en estricta relación con los principios cristianos de dignidad humana y destino universal de los bienes; a la participación política en los procesos de toma de decisiones sobre la renta nacional en relación con el principio de subsidiariedad; y a la responsabilidad social solidaria institucionalizada de acuerdo con el principio de solidaridad. El sentido de solidaridad es muy alto entre los sectores gremiales que integran la UTEP, siendo justamente ésta la clave que explica



por qué constituyen la primera organización federal gremial de la economía popular mundial. Detengámonos por un momento en este principio, el de solidaridad. No debe entenderse como una práctica individual de caridad, desde los que más tienen hacia los que menos tienen. La solidaridad debe ser institucionalizada, eso significa que el Estado es quien debe intervenir, mediante regulaciones y políticas públicas, para garantizar la redistribución equitativa de la riqueza de los países, la cual es resultado de una productividad comunitaria, ya sea por trabajo físico o intelectual. La solidaridad se torna imposible, en esos términos, cuando una sociedad no se hace responsable de los trabajos no remunerados que contribuyen a la riqueza nacional. La solidaridad no cae del cielo, viene de abajo. Es la comunidad de la periferia social la que se organiza para reclamar al Estado que sus necesidades sean reconocidas como derechos bajo la forma de ley. Pero esa organización necesita un contexto para conformarse, y ese contexto es el laboral. El trabajo es el primer organizador social porque genera las condiciones espaciotemporales para que las personas se expresen y se organicen por derechos. Esa organización política de los de abajo primero es sindical o gremial, y luego podrá ser partidaria. Es sindical cuando se organizan los trabajadores empleados ante la patronal organizada en cámaras. Es gremial cuando se organizan los trabajadores desempleados ante el Estado. En ambos casos no se lucha por poder sino por justicia social. Los trabajadores organizados luchan por derechos para todos los trabajadores, empleados o no, organizados o no. Se trata de una solidaridad social y no de intereses de clase o sector.

Los sectores vulnerables están esperanzados en que la pandemia producirá cambios positivos para ellos. Sólo 30 % de las acciones gubernamentales, obtenidas gracias al reclamo de la UTEP durante la pandemia, podrán permanecer institucionalizadas. En el caso de la UTEP, los reclamos realizados en medio de la pandemia no fueron pensados como paliativos de la crisis del COVID-19, sino



como una oportunidad para lograr avances sociales y obtener conquistas laborales y políticas. No obstante, sólo 30 % continuará luego de la pandemia. El lector podrá preguntarse de dónde sale ese porcentaje. Sale de la experiencia histórica, pero no hay espacio en este breve ensayo para demostrarlo –trabajo que quedará pendiente para luego de esta pandemia–.

Por el momento puede concluirse que la UTEP ha sabido aprovechar el kairós que representó esta pandemia. Las muertes por COVID-19, gracias a la organización de la comunidad, fueron infinitamente menores a lo esperado entre la población de trabajadores de la economía popular. Sin embargo, la mayor cantidad de muertos se dio en esos sectores. Esto se debe a varios motivos: 1) la no asistencia a los centros hospitalarios ante los primeros síntomas por no dejar a la familia desamparada, ni perder el trabajo; 2) por enfermedades preexistentes debido a una alimentación deficiente; 3) por ser los más expuestos al realizar los denominados “trabajos esenciales”. Al mismo tiempo, han logrado mejorar su imagen pública ante el resto de la sociedad, han mantenido unida la organización y controlada, han conseguido asistencia estatal de emergencia y políticas públicas permanentes.

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES CAMPESINOS

Daniele Fini

(Este escrito surge con base en la entrevista realizada a Juan José Monterroso y Ana Aguado.)

El Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC) es una organización social guatemalteca de inspiración religiosa que surgió en 1997, a partir de una iniciativa diocesana para asesorar y organizar a trabajadores dependientes en las fincas cafetaleras. Posteriormente ha ampliado su intervención a varios municipios del país y diferentes tipos de sujetos sociales promoviendo la creación de comités



locales y temáticos. Actualmente tiene presencia en 12 municipios de tres regiones del occidente de Guatemala.

Los sujetos que organiza y hacia los cuales dirige sus acciones son trabajadores –principalmente del campo (dependientes y pequeños productores)–, asalariados de otros sectores y grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, víctimas de violencias y migrantes. Cada una de las tres regiones en las cuales opera la organización, cuenta con un consejo directivo y varios consejos sectoriales para coordinar la intervención en grupos sociales específicos como, por ejemplo, las mujeres, los jóvenes y ancianos. También promueve la conformación de consejos a nivel local y la participación de sus integrantes al interior de espacios asociativos de su territorio, como asociaciones, sindicatos o cooperativas. Sus principales áreas de intervención son: 1) la formación y asesoría técnico-jurídica para trabajadores y grupos vulnerables para la defensa de sus derechos sociales, y 2) el desarrollo sostenible, para promover y apoyar la agroecología campesina y los emprendimientos de la economía social y solidaria. Las prácticas implementadas van desde acciones a nivel local en asuntos de capacitación, información y asistencia social, hasta iniciativas nacionales de presión política para la defensa de los derechos laborales, promovidas en coordinación con otras instancias organizativas y sindicales. MTC es parte del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos.

Guatemala es un país con altos índices de pobreza, desnutrición e informalidad laboral. Una parte importante de la población vive en zonas rurales, donde se registra una concentración de la propiedad de la tierra y un modelo agrícola de tipo intensivo –que conjuga agroindustria y extractivismo–, con amplio uso de agroquímicos. Las fuertes condiciones de desigualdad generan y reproducen la violencia criminal y política, además de una estructura institucional y democrática débil. Después de varias décadas de guerra civil que generó millones de muertes, particularmente entre la



población pobre del campo, la implementación de las reformas estructurales de corte neoliberal, desde los años noventa, generó tendencias de privatización de sectores y servicios públicos, subordinando las acciones de los gobiernos a la presión de las corporaciones económicas y a poderes fácticos, en ciertos casos con carácter criminal. El sector salud fue una de las ramas que más sufrió los recortes y privatizaciones neoliberales, causando una situación de carencia de insumos e infraestructura sanitaria, así como altos costos de los medicamentos, que se volvió aún más evidente a partir del surgimiento de la pandemia de COVID-19 que llegó al país en marzo de 2020.

Desde el inicio, el gobierno nacional promovió un plan de atención que incluía diferentes medidas preventivas relacionadas con el confinamiento y limitación de la movilidad, la mayoría de las cuales siguieron vigentes hasta el mes de mayo. También solicitó préstamos a actores internacionales con el fin de enfrentar gastos de emergencia e implementar algunas medidas de apoyo a los ingresos de las personas afectadas por la crisis, como el caso de la entrega de un paquete de canasta básica a un millón de familias. Las medidas de contención de la propagación del virus, aunque fueron centralizadas por el gobierno nacional sin generar sinergias con las autoridades administrativas locales, permitieron evitar aumentos exponenciales de la curva de contagios, pero la debilidad financiera y estructural del sector salud generó situaciones problemáticas al interior de los hospitales en la atención de los enfermos. Además, se registra poca confiabilidad en las estadísticas oficiales de los contagios, debido a la incapacidad gubernamental de aplicar cantidades suficientes de pruebas.

La crisis socioeconómica generada por la emergencia sanitaria afectó de manera transversal a amplios segmentos de la población, sobre todo en los entornos populares y rurales. Con diferencias entre los sectores productivos, se registraron afectaciones a las pequeñas y medianas empresas con consecuentes pérdidas de



empleos e ingresos para miles de trabajadores. Las familias también tuvieron que enfrentar mayores gastos, debido a la subida de los precios de la canasta básica y al surgimiento de consumos no planificados con respecto a la adopción de dispositivos para la higiene y la prevención sanitaria. El confinamiento y la falta de ingresos causaron un aumento de la violencia intrafamiliar y de los delitos criminales, según lo reportado por estadísticas periódicas. El aumento de los delitos se registró tanto con respecto a la criminalidad común, debido a la afectación de los ingresos en la población pobre, como con respecto a la criminalidad organizada, la cual, en ciertos lugares frente a la disminución del movimiento de la economía en algunos sectores, extendió la práctica de las extorsiones desde las meras actividades económicas a las familias.

En los primeros meses de la pandemia, en las localidades donde está presente el MTC y entre sus integrantes se registró, de manera análoga al cuadro nacional, una importante caída en los ingresos familiares, debido al desempleo o al estancamiento de las actividades comerciales. También se reportó un aumento de la violencia intrafamiliar y del alcoholismo en las comunidades. En la fase inicial de la pandemia se registró un regreso masivo de migrantes a sus regiones debido al desempleo generado en Estados Unidos. Sin embargo, en los meses siguientes se ha reactivado la emigración de jóvenes e, incluso, la noticia de la masacre de 19 migrantes en el estado mexicano de Tamaulipas por la violencia criminal a inicios de febrero de 2021, de los cuales dos eran bases de MTC, no ha frenado el movimiento migratorio de esas regiones.

Desde el punto de vista social y emocional, la experiencia del desempleo y la falta de ingresos generó inicialmente sentimientos de angustia y ansiedad en muchas personas, que en ciertos casos se tradujeron en comportamientos antisociales en las familias o en la comunidad. Las medidas de contención sanitaria que reducían la movilidad y prohibían las reuniones de personas impactaron en las actividades rituales relacionadas al entierro de los



difuntos, afectando las prácticas culturales locales, las relaciones espirituales con la muerte y la identidad colectiva de los grupos de vecinos. Al mismo tiempo, la experiencia de la resistencia ante las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, generó respuestas ambivalentes en la dimensión emocional y relacional de las personas: mientras se debilitaban algunos elementos de la ritualidad colectiva relacionada con la muerte, se volvieron a valorar aspectos culturales vinculados con los conocimientos locales y los terapeutas tradicionales, así como con la vida sana generada por las modalidades locales de interacción y uso de la naturaleza. Si en algunos hogares aumentó la violencia familiar, en otros, la presencia forzada del varón en la casa permitió construir una participación más comprometida de él en las responsabilidades domésticas y fortalecer los vínculos de solidaridad familiar. Aunque las condiciones de pobreza generaron mayores dificultades para enfrentar las afectaciones a la salud y a la economía de las familias, la constatación de que la pandemia estaba atacando a todos, tanto ricos como pobres, volvió a generar una concepción de bienestar no centrada únicamente en la posesión de bienes materiales, sino en la importancia de la vida sana y del cuidado, así como en el reconocimiento del papel de los recursos alimentarios y fitoterápicos locales.

Las principales afectaciones socioeconómicas que se sufrieron en las regiones con presencia del MTC se dirigieron a cuatro tipos de sujetos con los cuales la organización trabaja: 1) los trabajadores asalariados del campo y de otros sectores que perdieron el empleo y el ingreso; 2) pequeños productores agrícolas y artesanos que se dedican al comercio informal de sus productos que vieron limitadas sus ventas por el cierre de los mercados grandes de las cabeceras debido a las medidas sanitarias; 3) los migrantes de retorno que encontraron barreras para regresar a sus comunidades y sufrieron discriminación por la población que los percibía como posibles portadores del virus; 4) las mujeres en general sufrieron



la reducción de los ingresos familiares debido al desempleo de los varones y al debilitamiento de las actividades de comercio y producción informal a las cuales solían dedicarse y, en algunos casos, padecieron un aumento de la violencia doméstica.

El MTC implementó diferentes acciones para enfrentar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia que se movieron en diferentes escalas e intervinieron en distintos ámbitos. Con respecto a los cuatro tipos de sujetos sociales apenas mencionados, las respuestas específicas implementadas por la organización fueron las siguientes:

Trabajadores asalariados. En la región Boca-Costa, departamento de San Marcos, se acompañó a trabajadores asalariados de varios sectores que habían sufrido despidos, presionando, por un lado, a las instituciones competentes del gobierno nacional para otorgar prestaciones sociales a los desempleados y, por el otro, a las organizaciones patronales para no interrumpir el pago de los sueldos. Por parte de las organizaciones patronales se logró que algunas empresas pagaran el 50 % del salario durante el periodo de despido y que varias reinstalaran a los trabajadores después de la etapa inicial de la crisis.

Comercio informal. Ante la imposibilidad de los comerciantes de acudir a las cabeceras e instalarse en los mercados grandes, se implementaron acciones para “descentralizar” el mercado, en el sentido de redistribuirlo espacialmente, a través de pequeños espacios de comercio en las comunidades. Estas iniciativas permitieron reducir las afectaciones económicas a los comerciantes, artesanos y campesinos, y estos últimos lograron no perder sus producciones.

Migrantes de retorno. Ante el retorno masivo de migrantes de Estados Unidos y su discriminación en las comunidades, la organización promovió campañas de información y concientización de la población para que adoptara los comportamientos de precaución y redujera la estigmatización hacia ellos.



Mujeres. Los comités de mujeres tuvieron que adaptar sus modalidades organizativas al contexto de las medidas de confinamiento y reducción de la movilidad, así que se cambiaron las tradicionales iniciativas en la escala regional con actividades en la dimensión comunal. Se promovieron grupos de discusión sobre el tema de la violencia patriarcal con el objetivo de fortalecer la autoestima personal y la confianza colectiva, así como de concientizar ante los derechos de las mujeres y las herramientas legales para defenderse ante este tipo de abusos. Por otro lado, se discutió y se capacitó sobre el tema de la creación de algunos emprendimientos de mujeres dirigidos a la generación de ingresos que se concretaron en algunos casos.

Sin embargo, la acción del MTC no se limitó a intervenir ante estas afectaciones socioeconómicas y a estos sujetos, sino que se extendió también en una pluralidad de iniciativas de varios tipos que se movieron desde: 1) el ámbito de la información y concientización, 2) a la asistencia social, 3) hasta la intervención en el debate público y político para presionar a las instituciones oficiales.

Información y concientización. Se promovieron acciones relacionadas con la prevención y el cuidado ante la situación de emergencia sanitaria. En lo específico se difundió información y concientización para el respeto de las medidas preventivas y de contención del virus decretadas por el gobierno nacional. Esta información se difundió por medio de documentos –como, por ejemplo, afiches o folletos–, y a través de espacios radiofónicos en las emisoras locales. Estos materiales informativos, generados y difundidos por la organización, también abordaron el tema del cuidado y la eventual cura ante los síntomas de la influenza, desde una perspectiva que se orientaba a superar la dependencia de las personas de las instituciones y herramientas de la medicina alopática e institucional, para en cambio volver a valorar un uso autónomo de los conocimientos y recursos locales. En lo



específico, se generó información sobre los alimentos naturales que existen en cada una de las regiones y sus principios nutritivos con el objetivo de promover una alimentación sana entre las personas y aumentar sus defensas inmunitarias. A su vez, se rescató información sobre los recursos fitoterápicos locales, su uso y su preparación en remedios, al mismo tiempo que se promovió la valoración de los estilos de vida y alimentación locales. Las acciones de información y concientización no se limitaron al tema sanitario, sino que se implementaron también con respecto a otras cuestiones, como el caso de la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar.

Asistencia social. Aunque la mayoría de las acciones implementadas por la organización con respecto a la reducción de los ingresos familiares se dirigió a solicitar protección social para los desempleados y adaptar las prácticas productivas y comerciales de los trabajadores por cuenta propia, también se llevaron a cabo acciones de corte asistencialista con el fin de enfrentar la inmediatez de las carencias materiales generadas por la crisis. Por ejemplo, se organizó la entrega de bolsas solidarias con productos de la canasta básica a 200 familias de trabajadores asalariados de fincas cafetaleras que quedaron desempleados.

Intervención en el debate público y político para presionar a las instituciones oficiales. El MTC, en coordinación con otras instancias organizativas que representan al sector independiente del sindicalismo guatemalteco, implementó una estrategia de comunicación para intervenir en el debate público a través de comunicados dirigidos a la prensa y a la Presidencia de la República. Esta estrategia apostaba a presionar a las instituciones oficiales para crear medidas y programas de apoyo a la clase trabajadora afectada por la crisis, a partir de la propuesta de adopción del principio de corresponsabilidad por parte del Estado y las empresas. Al lado de estas acciones comunicativas, se abrieron mesas de negociación con funcionarios gubernamentales y se realizó



un proceso de auditoría social a 20 programas estatales dirigidos a poblaciones vulnerables, con el fin de garantizar derechos y protección sociales a los grupos más necesitados.

Las respuestas del MTC en la pandemia han provocado mejoras materiales a diferentes tipos de sujetos a los cuales se dirigieron; no se logró anular las consecuencias socioeconómicas sufridas, pero sí reducirlas. Las acciones orientadas a la información y concientización sobre asuntos sanitarios permitieron reducir la estigmatización de los migrantes de retorno y fortalecer la capacidad familiar de cuidarse y defenderse del virus. Desde el punto de vista emocional y relacional, se trató de intervenir en la dimensión ambivalente mencionada con anterioridad, generando en ciertos casos un fortalecimiento en la valoración de las prácticas y conocimientos locales por parte de los habitantes, así como la valoración de estilos de vida y horizontes de valor centrados en el cuidado físico y emocional de la persona y en una relación sustentable con el entorno ecológico. La experiencia de resistencia/concientización dentro de la crisis permitió a las bases valorar las potencialidades individuales y colectivas, traduciéndose en la implementación de respuestas creativas e innovadoras en los ámbitos social y productivo. La reconfiguración de la logística relacionada con las actividades comerciales y con la organización interna del MTC permitieron fortalecer una conciencia colectiva sobre la importancia de la dimensión local y de los vínculos comunitarios. Para la organización esto ha llevado a reconsiderar la dimensión comunitaria en cuanto espacio de intervención y autoorganización de la gente, además de la escala regional. Las acciones de “descentrar” el comercio informal, además de representar una respuesta ante una necesidad inmediata, implican una iniciativa en la cual el MTC apuesta para su sedimentación, en cuanto medio para reconfigurar social y espacialmente el comercio informal con el fin de generar mejores oportunidades para los pequeños comerciantes, productores agrícolas y artesanos. Al lado



de esta iniciativa se registra también una reactivación de redes de intercambio locales vía trueque.

La crisis causada por la pandemia ha generado una importante reflexión colectiva al interior del MTC, con el fin de adaptarse a los nuevos escenarios y fortalecer la capacidad de intervención futura. La principal preocupación que guía la organización y que orienta su camino es alrededor de la necesidad de pasar desde iniciativas mayoritariamente asistencialistas, impuestas por la emergencia de la pandemia, hacia el horizonte de la autonomía de los sectores populares y del cooperativismo como forma organizativa en el ámbito social y productivo. Para seguir en este camino, en el cual el MTC actúa desde hace muchos años, se estima importante asentar las prácticas y las enseñanzas puestas en marcha durante esta crisis. En particular se considera necesario insistir en el terreno del fortalecimiento de emprendimientos asociativos en la producción al interior del campo de la economía social y solidaria. Para los próximos meses se prevé avanzar en la creación de un plan de promoción de la economía social y solidaria del MTC, considerándolo una estrategia prioritaria para combatir el desempleo y mejorar las condiciones materiales de las familias, las cuales también actúan para fortalecer al movimiento en su conjunto. Este proceso se está llevando a cabo en colaboración con la Universidad Iberoamericana de Puebla, México, en cuanto a capacitación. Por otro lado, se ha reconocido la importancia de abrir un nuevo ámbito de intervención de la organización en el tema de la salud, particularmente con respecto a la salud emocional, la prevención y el fortalecimiento de los recursos y conocimientos locales, con el fin de fortalecer la capacidad autónoma de las colectividades para enfrentar los problemas relativos a dicho tema. El trabajo en este nuevo ámbito de la salud se prevé llevarlo a cabo como proceso a realizar en colaboración y sinergia con otras instancias o actores de los territorios.

Los siguientes pasos del MTC seguirán inspirándose bajo el horizonte ético del trabajo ecuménico y a través de una acepción



de la espiritualidad que la concibe como responsabilidad colectiva del cuidado de la llamada “casa común”, es decir, el cuidado de todos nosotros y todas nosotras y de los diferentes elementos y seres de los entornos ecológicos que nos rodean.

INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE TRABAJADORAS
DEL HOGAR

Alessandro Grassi

(Texto sustentado en entrevistas con las integrantes de la asociación: Clementina Serrano, Kety Carrillo Mercedes y Ernestina Ochoa.)

El Instituto de Promoción y Formación de Trabajadoras del Hogar (Iprofoth) es una asociación de trabajadoras del hogar con base en Lima, Perú, en el distrito de Barranco. La organización, sin fines de lucro, está constituida por y al servicio de las trabajadoras del hogar. Su núcleo originario se conformó en 1980 para asumir el nombre actual diez años después, en 1990; no tiene un carácter religioso oficial, sin embargo, la religión juega un papel importante debido a que las integrantes son creyentes y parte de las actividades que realizan están vinculadas con la educación religiosa. Al mismo tiempo, los proyectos se dirigen a todas las trabajadoras del hogar, independientemente de la fe que profesan.

Antes de que la pandemia cambiara radicalmente las costumbres de la organización, el principal terreno de intervención del Iprofoth era la ciudad de Lima. Sin embargo, tuvo oportunidades también de operar en otros contextos peruanos. Las actividades principales incluían servicio de guardería en Barranco y, sobre todo, la impartición de talleres en las escuelas para la formación de lideresas sociales, y de derechos de las trabajadoras. Dichas actividades se dirigían a alrededor de 500 personas (todas trabajadoras del hogar y pocos trabajadores), cuyas edades oscilaban entre los



15 o 16 años hasta adultas mayores. La llegada de la pandemia ha obligado a las trabajadoras a adaptarse a una situación de precariedad y riesgo, considerando que, en general, independientemente del país, el sector del trabajo en el hogar y las mujeres, como grupo específico, fueron afectados de manera grave por las medidas de restricción implementadas por los gobiernos. Al mismo tiempo, el sector del trabajo en el hogar presenta varias características que ambos multiplicaron: los efectos negativos de las medidas y la exposición al riesgo de infección de las trabajadoras.

Como resulta evidente, las condiciones de trabajo –en un lugar encerrado y en estricto contacto con ambientes y objetos de uso cotidiano– hacen necesario un cuidado mayor de las trabajadoras para evitar el contagio. Juntamente con las medidas de confinamiento, las condiciones de trabajo afectaron los derechos de ellas, así como su condición de salud.

A esto cabe agregar que Perú ha sido y sigue siendo uno de los países más golpeados por el COVID-19 en el contexto latinoamericano y que la llegada del virus ha coincidido con una situación de fuerte crisis política, lo cual ha generado más incertidumbre. Como en otros lugares del continente, las medidas de confinamiento implementadas durante la primera ola, a partir de la primavera 2020, afectaron especialmente a los millones de trabajadores informales que mantienen funcionando la economía del país.

En gran parte, las trabajadoras del hogar pertenecen a este sector, por laborar sin contratos formales. Normalmente su trabajo está encuadrado en diferentes fórmulas. Las principales son “cama adentro” o “cama afuera”, “por día”, “por hora”. En el primer caso la trabajadora vive con los empleadores, mientras, en los demás casos, va al lugar de trabajo según los acuerdos. A partir del 13 de marzo, cuando inició la pandemia, todas las trabajadoras que no vivían con los empleadores se encontraron sin trabajo, no pudieron salir de sus casas, y esta condición perduró hasta junio de 2020. Al perder el trabajo, las pocas que tenían contrato perdieron también



los pocos derechos sociales y el seguro de salud. Sin embargo, muchas trabajan en condición de informalidad.

A las que trabajan “cama adentro” muchas veces, al contrario, se les ofreció mantener el trabajo sólo con la condición de nunca salir de la casa patronal. Las que aceptaron pudieron continuar trabajando, pero con una reducción significativa de sus derechos laborales: durante el periodo de encierro no se les reconoció vacaciones, pago de horas extras y otros beneficios. Muchas de ellas, de todas formas, para poder estar con la familia o por el estrés generado por esas condiciones renunciaron, e igualmente quedaron desempleadas.

Frente a esta situación, la asociación tuvo que redefinir sus prioridades. Debido a los límites impuestos por la nueva situación tuvieron que detener todas las actividades regulares. La imposibilidad de impartir talleres derivó de las restricciones a las aglomeraciones y el cierre de las estructuras educativas. Mientras la guardería se volvió innecesaria frente al paro generalizado del sector, al mismo tiempo, las integrantes de la organización implementaron algunas acciones para enfrentar la emergencia y brindar un primer apoyo a las colegas.

Después de un año de pandemia es posible identificar dos momentos distintos de la reacción a la emergencia; éstos se distinguen por actitud, acciones y perspectivas. Si en un primer momento la esperanza era que la pandemia pudiera acabarse relativamente pronto y que el nuevo año produjera una mejora de las condiciones y retomar las actividades “normales”, en el segundo momento, con la llegada de la segunda ola, se hizo clara la necesidad de implementar estrategias a más largo plazo.

Por lo general, las primeras acciones fueron de ayuda inmediata, mientras ahora la asociación está intentando desarrollar intervenciones que aporten cambios duraderos y sustentables también en el contexto pandémico. Cambiar la estrategia corresponde, a su vez, a un cambio de actitud, más reactivo y optimista al prin-



cipio, y más cansado y desanimado en la actualidad. El peso de los meses de encierro ha condicionado mucho a las trabajadoras en los aspectos emocional y psicológico.

Al principio se articularon dos estrategias de acción para el Iprofoth con el fin de aliviar la condición de las compañeras. Primero, el espacio de la guardería cerrada y las oficinas de la asociación se convirtieron en un “refugio” para acoger a las que se habían quedado sin un lugar donde vivir. Allá se hospedaron, de manera estable, nueve trabajadoras durante el periodo del primer encierro. Otras se quedaron sólo un tiempo limitado antes de regresar con sus familias o encontrar un lugar mejor donde quedarse. Allá, las trabajadoras, a través de contactos establecidos con aliados de la organización, recibieron atención psicológica y aprendieron medidas de bioseguridad. También armaron un biohuerto para la producción de hierbas y hortalizas para la subsistencia.

Segundo, lanzaron una campaña de solidaridad que obtuvo el apoyo de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, de la pastoral del mundo del trabajo y de otras asociaciones amigas del Iprofoth. Con las donaciones, este Instituto compró canastas para ayudar a trabajadoras en dificultad, entregándolas a domicilio. De esta manera fueron apoyadas, al menos, 500 trabajadoras.

Estas dos actividades siguen activas de manera compatible con los límites del presupuesto de la organización. Sin embargo, después de la segunda ola y frente a una perspectiva más clara de que la pandemia no se acabará pronto y la situación de emergencia se prolongará al menos un año más, ha surgido la exigencia de plantear nuevas estrategias que continúen atendiendo las necesidades primarias y que permitan construir algo más duradero. En el momento en el cual se llevó a cabo la última entrevista, sólo se trataba de ideas en forma embrionaria, aunque es posible identificar dos direcciones en las cuales la asociación ha decidido moverse.



Por un lado, el Iprofoth está intentando plantear algún camino formativo para las integrantes de la asociación, así como para las trabajadoras hospedadas en su sede. La idea es que puedan adquirir competencias que permitan generar un ingreso más allá del trabajo en el hogar.

Por otro lado, la segunda trayectoria se mueve hacia una convergencia de los sectores del trabajo informal. Las integrantes de este Instituto tuvieron una primera reunión con representantes de otras categorías de trabajadoras y trabajadores no formalizados para construir una red común que permita alcanzar más fuerza frente a las instituciones, lo cual solamente se trata de un primer paso en esta dirección.

En cuanto al diálogo con las instituciones, se ha unido al tema de la pandemia desde el principio y ha estado en paralelo con todas las actividades de la asociación. Durante el año pasado, el Iprofoth intensificó el trabajo de incidencia política de dos formas. Primero, envió cartas a varias instituciones públicas pidiendo apoyos y ayudas para las trabajadoras del hogar; desafortunadamente no alcanzaron los resultados esperados, ni recibieron respuestas por parte de las autoridades. En segunda instancia, desde hace años, la asociación apoya una campaña para modificar la ley que reglamenta el trabajo en el hogar; con esta perspectiva, en el año 2020, aumentaron las presiones en la mesa de diálogo, instituida por el gobierno, donde el Iprofoth participó con otras organizaciones. A través de los medios digitales y las redes sociales virtuales se multiplicaron los contactos y las comunicaciones con los congresistas y se obtuvo la aprobación de la nueva ley. Reflexionando sobre las experiencias y las estrategias adoptadas, el mencionado Instituto valora el aprendizaje obtenido. En particular, la principal innovación está vinculada con aprender a utilizar las herramientas informáticas. El tener reuniones virtuales permite a sus integrantes ahorrar tiempo y dinero en transporte y se imaginan seguir trabajando de forma virtual una vez terminada la emergencia. Sin



embargo, lamentan la distancia física y la imposibilidad de llevar a cabo los talleres escolares, una de las actividades principales de la organización, la cual no pudieron realizarla de forma virtual. El resultado, señalan, refleja una nueva concientización de las trabajadoras del hogar por causa de la pandemia, quienes tuvieron que enfrentar situaciones de fuerte vulnerabilidad que las hicieron reflexionar sobre ellas mismas.

Al mismo tiempo, en relación con la nueva ley se nota, mayoritariamente, el cambio de actitud por parte de las trabajadoras. De manera inicial, ellas percibieron dicha legislación como una conquista clara y una fuente de esperanza, pero, después de un año de pandemia, el entusiasmo es menor. Existen algunos límites en la redacción de la ley que cuestionan su utilidad para las trabajadoras del hogar en su conjunto, pues algunas de ellas son excluidas de las tutelas del derecho, en particular las más jóvenes, quienes ni siquiera pueden formalizarse.

En general, después de un año de pandemia, el cansancio físico y emotivo es fuerte. La imposibilidad de prever un fin rápido de la emergencia desanima mucho a las trabajadoras del Iprofoth. Ese aspecto, en general, se combinó con la frustración por las esperanzas que se generaron al final del año pasado, cuando se pensaba que enero iba a ser un mes de camino hacia la normalidad. La llegada del segundo encierro fue un duro golpe. A todo eso se suma la situación financiera crítica. La falta de trabajo es el mayor y más evidente problema, al mismo tiempo, como se entiende, conseguir apoyo y solidaridad voluntaria de otros actores se vuelve más complicado, porque la situación pesa sobre todos. La preocupación es grande.

A pesar de todo, no falta una actitud positiva y siguen pensando que, aunque en general la pandemia haya empeorado las condiciones de vida del sector y resulta difícil articular un pensamiento en una perspectiva que no sea la de la sobrevivencia inmediata, es importante aprovechar cada situación para volverla en la condición de un cambio positivo, también sin negar la preocupación actual.



GLADIMEX

Yolanda C. Cruz Contreras

(Texto cimentado en la entrevista realizada a Silvia Correa Sánchez, socia fundadora.)

Las cooperativas Puentecillas y Gladimex fueron creadas en 2010; la primera es de producción y se encuentra en Michoacán y, la segunda, es la comercializadora cuyo punto de distribución y venta está en el Mercado de Flores y Hortalizas de la Central de Abastos, en la Ciudad de México. Puentecillas produce, principalmente, gladiolas, y en fin de año nochebuenas de hidroponía; respecto a las hortalizas sus productos son: aguacate, calabazas, pepino, tomate, chile manzano, frijol, guayaba, maíz y limones. Del total de la producción, el 30 % son hortalizas y el resto las gladiolas, sin embargo, los tres productos fuertes son gladiola; aguacate, dos veces por año, y las nochebuenas en diciembre.

Son cooperativas familiares; la de Puentecillas está conformada por siete personas, Gladimex cuenta con cinco, y de cada socio depende su familia directa. Además, en época de cosecha y temporada alta, contratan hasta cuarenta personas que cumplen funciones de cortadores, empacadores y estibadores. En la Central de Abastos emplean entre seis y ocho personas, en noviembre de 2020 sólo dos estaban contratadas en dicho lugar.

Del total de sus ventas, 70% lo representan las gladiolas y 30% las hortalizas. Las tres temporadas fuertes de venta son: 10 de mayo, que es día de las madres; 1 y 2 de noviembre por el día de muertos, y 12 de diciembre, celebración de la Virgen de Guadalupe.

Los efectos de la pandemia provocaron que los clientes dejaran de asistir con motivo del programa de sana distancia y quédate en casa, lo que ocasionó que las ventas disminuyeran y, como consecuencia, al bajar los ingresos se redujo el número de traba-



jadadores que normalmente contratan. Esto llevó a que cada uno de los socios tuviera que trabajar más para cubrir lo que en otras circunstancias harían los empleados. Las ventas solamente son entre 30 y 40 % de lo que eran a inicios del año 2020.

Un impacto fuerte fue la caída en la venta de las flores, ya que no son un producto de primera necesidad y, por tanto, no forman parte de la canasta básica. Para noviembre de 2020, del total de ventas solamente el 30 % lo representaban las gladiolas. El porcentaje de clientes que van a la Central de Abastos, en comparación con inicios del año, es de alrededor del 40 %.

Es importante señalar que algo que afectó a la cooperativa fue que, una semana antes de que el Gobierno decretara el confinamiento, hubo una fuerte granizada atípica en el mercado y los techos se cayeron. Este fenómeno natural obligó a los comerciantes a moverse a un espacio abierto, en la misma Central; sin embargo, la gente iba a buscarlos y, al ver las cortinas cerradas, pensaba que no estaban.

Algunas de las medidas que tomaron para paliar la crisis fueron:

Primero, se unieron con productores de la Central de Abastos para crear despensas de productos de la canasta básica de frutas y verduras a un precio de mayoreo. Se entregaron alrededor de tres mil despensas durante aproximadamente mes y medio; el objetivo fue desplazar el producto que tenían, agregar solamente el envío, sacar el producto al costo, apoyando a la economía de las personas y atendiendo a los cuidados de la salud puestos en marcha por el Gobierno. Lo positivo fue que hubo respuesta de la población y apoyo de aquellos que ya eran clientes, sin embargo, hubo quienes se acercaron a ellos para lucrar y, además, gente que no los conocía y dudaban en comprar; resulta más fácil cuando el mercado es conocido. El impacto para los clientes de la compra de la canasta fue que reportaban productos de buena calidad y buen precio.

La entrega de las despensas se hizo con sus propios recursos y el objetivo fue desplazar su producto y el de sus compañeros vecinos del mercado de flores. A esos compañeros no se les pagó



por adelantado, sino hasta que ellos habían entregado y cobrado las despensas. Alumnos y alumnas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, apoyaron con el diseño del contenido de los tipos de canastas, con publicidad para las redes sociales y la logística para su distribución por zonas, además de dar a conocer este programa entre sus conocidos.

Segundo, gracias a la implementación de una técnica de rejuvenecimiento de árboles, se incrementó la cosecha de aguacates y eso ha sido un sustento muy importante en medio de la pandemia que, literalmente, les ha dado de comer. Ya se puede hablar de cosecha de aguacate dos veces al año.

Tercero, la venta de las hortalizas se modificó, pues en vez de vender solamente cajas cerradas se dio curso a la demanda de los clientes de adquirir, aunque sea, un kilo de producto. Y, por último, tanto las hortalizas como las flores y arreglos florales se empezaron a entregar a domicilio en cualquier parte de la Ciudad de México.

En noviembre de 2020 lo que más se está comercializando son las hortalizas, todo lo que se produce se vende, no así las gladiolas, cuya comercialización se ha desplomado de manera muy marcada. En el caso de las despensas, su falta de experiencia y el hecho de que los clientes no los conocieran representó desventajas, fue algo que respondió más a la emergencia nacional que a una planeación. No saben si en el futuro retomarán la venta de estas despensas, ya que ellos son productores y trabajan en el campo que es muy demandante.

Ahora, en la cooperativa son más perseverantes, hacen mayor esfuerzo que antes debido a que tienen que trabajar el doble, a veces ha sido necesario no dormir en dos o tres días para alcanzar buenos resultados. En este momento, menos que nunca, pueden quedar mal con los clientes, hay que conservarlos. Del total de empleados que se contratarían porque viene la temporada de nochebuena, solamente se tiene a una tercera parte de ellos.

Entre los cambios que se hicieron y se siguen practicando destacan: la forma de operar, cómo reciben al público, ahora son más



cordiales, amables, y piden que se respete el protocolo de sanidad. Los espacios deben estar más limpios, más ordenados. Algo que los ayuda mucho a disminuir el riesgo de contagio es que están en un espacio abierto, se organizan con los vecinos productores para que todos tengan las mismas reglas. Otra modificación a nivel personal es que antes comían en la calle y en la actualidad ya no lo hacen para evitar contagios.

Como cooperativa trabajan en equipo de manera colaborativa, pero en la sociedad no vieron esa solidaridad. Éste sería el momento de concientizar a la población en el sentido de que la mejor alternativa, en tiempos difíciles, es trabajar en grupo y de manera solidaria. Cada uno sabe qué tiene que hacer y asume sus responsabilidades y así pueden salir adelante. Evidentemente, esto es porque ellos están en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización al comprador final.

A un año de la pandemia, una de las principales consecuencias ha sido la ansiedad y para combatirla improvisaron aparatos para hacer ejercicio en casa, eso ha ayudado también al estrés, y están tomando vitaminas. Emocionalmente no se han dejado caer, los ha mantenido a flote la perseverancia, a la que consideran una característica particular de los mexicanos. Ellos han continuado con sus labores, las cuales se han reducido bastante, pero se han ido acoplado a la situación. En noviembre pasado todavía mantenían algunos trabajadores, en febrero de 2021 ya no tienen mano de obra en ningún espacio, todo lo hacen ellos debido a que las ventas han disminuido. El no tener empleados hace que se mantengan más activos.

Hay una gran disminución de clientes, la afluencia de personas al mercado ha decrecido, por lo tanto, ya no tienen tantos productos como antes en el local, probablemente cuentan con el 25 % de lo que había hace un año. Solamente alrededor del 20 % de los compradores han regresado. A pesar de esto, en diciembre de 2020, comparado con el anterior, hubo una afluencia de alrededor



del 50 % concentrada en una semana. Los clientes que llegaron no eran del tipo directo, sino personas que querían comercializar las nochebuenas en sus casas debido al cierre de mercados. Extrañamente vendieron 25 % más flores que el año anterior (2019), una razón podría ser que estaban muy organizados, y ya contaban con experiencia en la venta.

Las ventas del 14 de febrero (temporada, por lo general, muy buena) este año serán alrededor de 50 % menos que el año anterior. En el mercado no ha bajado la venta de rosas, pero sí la del resto de las flores. Originalmente los arreglos florales sólo se vendían a quienes asistían al mercado, en este momento son enviados a cualquier punto de la Ciudad de México.

En la parte social tienen la misma interacción con todas las personas, aunque ahora a través de los medios electrónicos; en su área de trabajo no hay abrazos, besos, pero sí tienen el privilegio de ver a sus vecinos, a distancia, e interactuar con ellos. Debido a que trabajan en espacios abiertos es más fácil mantener la comunicación, más allá de la sana distancia y evitar contagios.

Las gladiolas han dejado de venderse, en febrero de 2021 la comercialización de la flor se redujo a una tercera parte. Han impulsado los arreglos florales como una alternativa comercial y, sobre todo, para mantenerse ocupadas; las mujeres son las que se han dedicado a esta labor, la cual resulta una terapia ocupacional que las hace sentirse bien. En el caso de los productores hombres, ellos se están concentrando en implementar un nuevo cultivo, que son los *berries* –frutos del bosque–, zarzamora, arándanos, mora azul, frambuesa y fresa. En la actualidad están en el proceso de evaluación del proyecto.

De los cambios y estrategias que han implementado por la pandemia, lo que llegó para quedarse es la producción de aguacate; ésta lleva un par de años, y ven como muy alentador el cultivo de los frutos del bosque, el cual no sería una medida temporal, sino definitiva. Se están diversificando como una forma de sortear la crisis.



En cuanto a las gladiolas, no sólo se trata de que ahora, por la pandemia, bajaron las ventas, sino que es una variedad que ha sido desplazada, sobre todo por los lirios, las rosas e, incluso, en menor medida, por flores finas como las orquídeas. Desafortunadamente, la gente ha encasillado a las gladiolas como flores para los difuntos o para una iglesia.

Ellos tienen clientes que exportan, por tanto, otra estrategia es empezar a cultivar colores especiales que pueden gustar en los mercados europeo y estadounidense, que son los principales consumidores. La infraestructura para la siembra y la comercialización ya está, la novedad es incluir las variedades y los colores que atraen a los exportadores. No es la intención dejar el giro de las flores porque desde hace tiempo se dedican a ello y, además, es una actividad que conocen muy bien; de manera alternativa iniciarán otros giros, pero no van a abandonar la florería por agradecimiento, por cariño y porque les gusta.

Ellos creen que han aprendido muchas cosas en un año y deben estar alertas y preparados para cualquier oportunidad que puedan tener más adelante.

YOMOL A'TEL

Marcela Ibarra Mateos

(Análisis fundado en la entrevista sostenida con Cristina Méndez Álvarez, subdirectora del grupo Yomol A'tel y con información complementaria de su sitio web.)

El camino a Yomol A'tel

Yomol A'tel es un grupo de empresas y cooperativas de economía social y solidaria ubicadas en la selva norte de Chiapas. Lo



integran alrededor de seis empresas sociales; 341 productoras de café, miel, cosméticos y procesos de microfinanzas, con 68 colaboradores. La mayoría se ubica en Chiapas y otros compañeros en las cafeterías Capeltic en la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara. El corazón del proyecto se mantiene y se origina desde las comunidades tzeltales indígenas, desde donde empieza la lucha y la búsqueda de nuevas alternativas.

El establecimiento de la Misión jesuita de Bachajon es, sin duda, uno de los acontecimientos clave en la conformación de Yomol A'tel. El trabajo jesuita en la Selva Norte de Chiapas data de 1958 y alrededor de esta obra de la Compañía de Jesús se conformó el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC). Como parte de estos procesos de acompañamiento, se impulsaron varios emprendimientos asociativos. El primero de ellos fue Bat'íl Maya en Chilón, Chiapas, una microempresa de mujeres dedicada al tueste del café y a su comercialización. Años después se conformó la cooperativa de café y miel con cerca de 300 campesinos Ts'umbal Xitalha. En 2004 se constituyó la Escuela del Café, en donde campesinos cooperativistas se forman para poder, más adelante, integrarse al trabajo de la cooperativa.

La vinculación con la Universidad Iberoamericana dio paso a un nuevo proceso más profesionalizante, dirigido a atender temas de exclusión y desigualdad de los campesinos productores de café en 2006. En 2010 abren su primera cafetería Capeltic, iniciando así un proceso de propiedad colectiva de estos establecimientos en distintas universidades jesuitas del país que, paulatinamente, ha ido abriendo cafeterías hasta el año 2017; dos fuera de planteles universitarios. Una de ellas cerró hace aproximadamente un año y la otra se mantiene en Ciudad de México. La venta de café en taza se convierte así en uno de los principales ingresos de esta cooperativa. Tal como lo plantean en su página de Internet: “Con esto se logra consolidar la cadena de valor integral... dar viabilidad económica y organizativa al cerrar el ciclo económico entre los



pequeños productores de café orgánico de la Cooperativa y la venta al consumidor final”.

Hacia 2011 se conforma una nueva cooperativa bajo el nombre de Yip Antsetic, dedicada a la elaboración de jabones con ingredientes naturales bajo la marca Chapontic, que también se comercializan en las cafeterías y hoteles. En 2012 se conforma el grupo de Cooperativas y Empresas de la Economía Social y Solidaria Yomol A'tel, integrando así a las distintas empresas asociativas que participan en lo que ellos llaman la cadena de valor. Hacia 2013 se instala la Planta y Escuela de Café Bats'il Maya. La organización afirma que se incrementó la producción de café en 300 %, y con esto se aseguró la calidad de este producto y se consolidó un espacio formativo. Ese mismo año se echa a andar una estrategia de pago por calidades en oro verde a los productores Ts'umbal Xitalha' y se genera una microfinanciera para apoyar el ingreso y ahorros de los cooperativistas. La formación en la historia del trabajo cooperativo ha sido fundamental. En 2016 se abren los Módulos Integrales de Yomol A'tel (MIYA).

Fortalezas ante la pandemia

La pandemia se empieza a sentir en Yomol A'tel en el mes de marzo por los efectos económicos que afectaron, de manera significativa, la venta del café, al cerrar las universidades en donde se encuentran las cafeterías. Incluso, la cafetería que se ubica en la Ciudad de México tuvo que suspender sus ventas debido a las medidas tomadas por la contingencia. No es la primera crisis que les toca enfrentar, ya en otros momentos tuvieron que salir adelante frente a la Roya que acabó con sus cafetales, como dicen, aprendieron a vivir con eso. En otro momento la inseguridad en Chilón puso en peligro la vida de los campesinos y también tuvieron que buscar mecanismos para enfrentar esa situación; ellos afirman: “venimos de crisis en crisis”. Pero la resiliencia de la cooperativa y de las comunidades les ha permitido salir adelante.



La pandemia es una situación a nivel global que ha repercutido en su trabajo y han tratado de ser lo más resilientes posible, buscando oportunidades de aprendizaje, pero, sobre todo, cooperando de manera colectiva ante la adversidad.

En los primeros meses fue mucho más sencillo enfrentar el confinamiento, actualmente las familias lo resienten en lo personal y económico. A lo largo de estos meses han identificado diferentes fortalezas, retos y alternativas para superar la crisis. No la han superado y todavía creen que falta tocar fondo, aunque no tienen claridad suficiente de lo que pueda venir.

Sin embargo, existen algunas condiciones favorables que les permitieron enfrentar este escenario. Por un lado, en el mes de marzo tenían una situación económica y financiera saludable en términos generales. Por otro lado, la formación para productores y trabajadores se convirtió en una fortaleza que en tiempos de crisis se visibiliza más porque valores y principios solidarios se encuentran más arraigados y surgen con mayor fuerza. La red de aliados comprometidos y cercanos, construida a través de amistades, además de una red de colaboraciones de organizaciones de la sociedad civil y universidades, también apoyaron a la organización. En marzo ya se había cerrado el acopio de café, ya se habían cerrado procesos logísticos, se había asegurado el ingreso de las familias y la bodega estaba llena de producto. Esto permitió reducir la tensión con las familias productoras.

El tipo de relación que han construido siempre ha sido en la línea de la confianza y la transparencia, y esto ha sido una de las condiciones favorables para salir adelante. Estos principios de solidaridad sí se han sentido.

El saber que no estamos solos ayuda a seguir buscando alternativas. Yo creo que, aunque tengas bien afinadas las estrategias y sepas cómo operar procesos, se visibilizan estos momentos. Tener sensibilidad ha sido clave, tener una lectura cercana de lo que sucede con la



gente es importante y en esta situación se requiere más sensibilidad y empatía, sin romantizar, con realismo puro e ir tomando decisiones lo más consensuadas posibles. La clave de resistencia se la debemos a los equipos y a las personas. Se la debemos a los que están en territorio.

Conforme ha ido avanzando la situación, los escenarios son bastante cambiantes, de un día para otro cambia todo. La clave está en la calidad de las personas que integran este tipo de proyectos porque el nivel de tensión, de estrés, es muy alto; cuando una crisis se prolonga también llega un desgaste personal alto.

Yo creo que esa parte es la que me preocupa, porque cuando inicias una crisis el nivel de motivación es más alto y conforme va avanzando se va desgastando. Y no lo relaciono con falta de solidaridad, es un desgaste natural de las personas.

Los retos

Prácticamente, los retos que se presentaron han llevado a una reflexión sobre la defensa del trabajo, del trabajo digno, que es uno de los ejes centrales de las empresas que conforman Yomol A'tel. En la selva norte de Chiapas, los indicadores de pobreza son altos y la salud es muy precaria, hay insuficiencia de infraestructura sanitaria y servicios médicos en un contexto de comunidades lejanas y atomizadas.

El reto más importante es el de las cafeterías dentro de las universidades, el que generó una disminución de casi el 90 por ciento de las ventas. En este sentido, también se presentaba el reto de mantener una gestión de los flujos financieros, pero con visión amplia. Por lo general, muchas de las proyecciones y flujos de efectivo se realizaban a corto plazo. Hoy se encuentran en el proceso de aprendizaje de hacer proyecciones en el mediano y



largo plazo. Las decisiones que se están tomando ahora no terminan en la inmediatez, sino hay que verlas hacia el futuro. No sólo buscan la estabilización sino también avanzar hacia un equilibrio que les permita resolver más adelante.

En este sentido, tejer una red de inversionistas solidarios con los aliados ha sido fundamental. La organización tiene mucha claridad de que es necesario armar estrategias para llegar a las empresas, al cliente directo y formar alianzas para seguir diversificando el ingreso.

Por supuesto, hubo también retos que atender. En primer lugar, el acceso y manejo de las nuevas tecnologías que se volvió prioritario en estas condiciones, tanto hacia afuera como con las propias comunidades en donde, muchas veces, no llega Internet.

En temas organizativos ha cambiado mucho.

Partimos de un territorio en donde la alegría, las fiestas son importantes. Han disminuido los espacios de encuentro con el otro, el acercamiento ha sido más prolongado y puede interferir en el ánimo. Pero también ha fortalecido el tema comunitario, en lugar de hacer todo en la cabecera municipal se ha generado un proceso más regional, no ha sido como una condición que limite. Más bien es volcar y ver al territorio, no puedes centralizar todo. Esto nos ha ayudado a fortalecer estos espacios más lejanos. Es más cómodo hacer una asamblea en la cabecera municipal y ahora nos hemos ido más en las regiones. Se nos viene la nueva cosecha, se proyecta una producción alta, lo contradictorio es el mercado, como colocarlo.

Las decisiones

En Yomol A'tel hay un espacio para la toma de decisiones que es el Comité Ejecutivo, donde participan coordinadores, directores y directoras de las empresas sociales y presidentes de las mesas



directivas, que se reúne de manera mensual para seguimiento y toma de decisiones. Este comité, cuando inicia la crisis en marzo, se transforma en un comité de contingencia. Las reuniones se hacían de manera semanal para ir activando acciones de forma más inmediata. Se colocaron cuatro temas de seguimiento.

1. *Personas*. Se abordaron las medidas de contingencia o protocolos de salubridad para las familias, los equipos, los trabajadores que, incluso, se mantienen todavía en 2021. Ciertamente, los compañeros de la ciudad tuvieron que guardarse, pero en Chiapas no, ya que la propagación de la pandemia ha sido más lenta. Se diseñó un esquema de cooperación con productores que son socios de las cooperativas. Se decidió aportar el 20 % del salario que se ha planteado que vaya como participación de socios trabajadores. Eso se había impulsado desde años atrás, pero con la crisis se acelera. Es un proceso de organización y cohesión social. Se han tenido muchas capacitaciones. Existen dos asesores en Yomol A'tel de la Universidad de Sade en Barcelona, y se están formando en el área de ventas. Es un área de oportunidad clarificar que no sólo la persona de ventas es a quien le toca vender. Pero, como en este tipo de economía social y solidaria se cierra parte del ciclo, siendo los clientes un elemento importante, se han metido en una lógica de desarrollar capacidades y tener formación de atención y seguimiento a éstos. En este contexto, también ha resultado relevante fortalecer la formación de cuadros, jóvenes y mujeres en nuevos perfiles que nos piden las nuevas circunstancias: especialistas en comercio electrónico, venta de exportación.
2. *Financiero*. Se armó una contingencia financiera, flujos de efectivo. Se construyeron escenarios desde los más optimistas hasta los más pesimistas, para tener una lectura a través de números e indicadores. Se inició el acercamiento y negociaciones con inversionistas sociales cercanos al proyecto en



la búsqueda de financiamiento. Esta línea recientemente se ha activado: la figura de inversionista social, a través de lo que llaman la estrategia multiactor, acompañarse de distintas instituciones, con una relación cada vez más estrecha institucionalmente. Se ha logrado que haya más interés por parte de socios y productores en los temas que se relacionan con las finanzas de las organizaciones. Se les fue la oportunidad para hacer sus propios fondos y actuar frente a esta crisis. No cuentan con fondos para enfrentar un proceso de crisis, aunque se ha tomado conciencia de la importancia de éstos.

3. *Ventas*. Comercialización y venta de cafeterías. Es un reto de todas las organizaciones de los centros sociales que conocen. El tema comercial ha sido el denominador común que todavía tienen atorado. Se activó la venta en línea que ya estaba prevista, pero se aceleró. Actualmente ya hay venta en línea, vía Amazon desde Capeltic, la cafetería de la Ciudad de México se ha convertido en una tienda virtual. En términos generales, algo que resulta muy valioso es la capacidad de respuesta inmediata. Se han ido adecuando las decisiones conforme va cambiando el tema del COVID. La apuesta era la agregación de valor, pero el mercado ha cambiado. Incluso se tomó la decisión de la venta de café verde (es la venta de materia prima sin transformación) con otros clientes, que deja un margen muy bajo de ganancia; se vendió en Miami por única ocasión para obtener liquidez. La miel también se vende en Amazon, este producto ha tenido un repunte porque se considera un elemento preventivo para la salud. Hay un cliente motor que ha permitido la venta y que permite tener los flujos necesarios para seguir operando.

Para el café, el cliente motor está en las cafeterías, y en la miel se tiene el reto de diversificar cartera de clientes porque depender de uno solo significa un riesgo.

En las cafeterías, todavía en diciembre, se esperaba la apertura escalonada de las universidades, pero esto no sucedió. Las cafeterías permitían pagar un precio justo a los productores;



se tuvo que hacer un ajuste de precio porque la situación del cierre no les permitió mantener este precio construido, lo que desestabilizó a la cooperativa. Aunque se encuentran cerradas las cafeterías Capeltic, éste sigue siendo un proyecto vivo y esperanzador. Actualmente se está replanteando el modelo de negocios, para ello se ha generado una comisión interna de trabajo, con asesores y consultores expertos en café, propiedad social, e inversionistas, liderada por un grupo del propio Yomol A'tel. La venta en taza en las universidades no es el único camino. Se ha seguido vendiendo en bolsa. No es el cierre de todo el proyecto.

Desde Capeltic en Ciudad de México, un punto de venta, fuera de las universidades, se ha impulsado la entrega de bebidas, las barras. Se llega a los consumidores a través de la taza de café, si no es desde la universidad, ahora preparando bebidas y alimentos. Esto ha sido más desde Ciudad de México y también se lanzó el llamado de solidaridad a la comunidad para colaborar. La figura de distribuidores en Ciudad de México, Puebla y Guadalajara ha funcionado muy bien.

El caso de los cubrebocas fue una capacidad de respuesta de las mujeres, se organizaron muy rápido y ha sido a través de la venta de éstos que ellas han mantenido su ingreso, el cual se había dado a través de cafeterías u hoteles que también dejaron de consumir. Con los cubrebocas manejan una técnica de bordado de las comunidades tzeltales. El mayor movimiento ha sido a través de Amazon y la página de Chapoltic, además de participar en bazares o ferias virtuales.

4. *Comunicación.* Se activó la conexión con los aliados, a través de comunicados externos que explican cómo está la situación del grupo, abarcando desde cómo se encuentran las personas hasta el tema financiero, y de cómo se halla la venta. A nivel interno, con las comunidades se ha dado un reto importante porque no hay señal de celular o de Internet. Ha sido a través de los cargos regionales, en especial de una figura interna que



se denomina “delegados”, que han llevado de boca en boca la palabra en sus regiones, buscando formas de mantener al tanto a los productores de cómo ha evolucionado la situación. El último acuerdo que se tuvo con la cooperativa de café es que los productores están aportando parte del precio de su producto. Ellos son conscientes de que las ventas han bajado, por tanto, a través del precio que han construido, también se suman a hacer un ajuste de precios por la situación actual.

La comunicación hacia las comunidades se ha reforzado con los delegados regionales. Debido a que en varias comunidades grandes hay Internet es posible monitorear. Se han mantenido las asambleas regionales. Hacia afuera se ha sostenido la comunicación a través de boletines. Así se hizo un llamado a la comunidad universitaria para que apoye la comercialización. Se espera iniciar la venta de café tostado y la exportación de este producto a Estados Unidos a través de las universidades de AUSJAL. Pertenecen a la Red Comparte y, a través de ésta, tratan de encontrar sinergia con universidades jesuitas. La estrategia no es ir solos sino *acuerparse* y hacer sinergia con sus aliados cercanos. Se ha generado contenido visual, en especial videos, para compartir el proceso.

Se sigue tratando de optimizar la instalación de computadoras con las que se cuenta. Ya tienen colaboradores con generación de contenidos que han permitido lanzar los insumos propios más completos, pero, ciertamente, se necesita una inversión económica considerable para dotar de infraestructura.

Seguimos buscando formas para seguir caminando, ahora de manera interna porque estamos en un proceso difícil. Se vive mucho el tema de la espiritualidad, de buscar la armonía y la comunicación porque a veces el tono es alto, terminamos con una oración y nos ayuda anímicamente. La intercooperación, entendida como la solidaridad, viendo mecanismos de colaboración



y de innovación y cómo las mujeres de Xapontic, inmediatamente se han adaptado y han desarrollado nuevas habilidades. Se entiende desde el territorio en un sentido de lucha, que afortunadamente hay salud y que debemos tomar decisiones por el bien de todos si queremos que este trabajo sea de largo plazo. El papel de la comunidad universitaria será clave. Estamos llamados a armar territorios de colaboración, con clientes y proveedores para enfrentar estos momentos de crisis. Cada uno desde su territorio armando estas líneas de colaboración.

LF DEL CENTRO COOPERATIVA

Yolanda C. Cruz Contreras

(Exposición elaborada con base en la entrevista a Alfredo Desiderio Rojas Lara, presidente del Consejo de Administración.)

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue creada en 1903 como un organismo público descentralizado y el decreto presidencial de extinción se estableció en octubre de 2009. En 1914 fue creado el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y sus miembros fundaron LF del Centro Cooperativa, en junio de 2015 con 14 200 socios. Estas personas tomaron la decisión de no ser liquidados por Luz y Fuerza y son los socios originales que conforman la cooperativa más grande de producción en México y América Latina.

Sus oficinas centrales están en la Ciudad de México, sin embargo, existen sedes en zonas donde operaba Luz y Fuerza, y son los estados de Puebla, Hidalgo, México y Morelos. Como cooperativa ha dado servicios de instalaciones eléctricas en otros estados, entre ellos, Guerrero, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Chihuahua.

La cooperativa cuenta con ocho unidades productivas que son: distribución, comercial, producción, fábricas y talleres, ad-



ministración e inteligencia de negocios, proyectos alternativos, construcción, y telecomunicación. La unidad de distribución está enfocada al servicio eléctrico; producción de paneles solares y mantenimiento de plantas de generación eléctrica; fábricas y talleres es mantenimiento de equipo, maquinaria, y vehículos; administración e inteligencia de negocios se relaciona con los servicios administrativos; construcción es obra civil, cimentación, mampostería; telecomunicación es lo relativo a fibra óptica; proyectos alternativos es aquello que no hacían originalmente como Luz y Fuerza y donde se encuentra la producción de agua embotellada SME, elaboración de uniformes, y transportación de grano para consumo animal.

Una vez que inició la pandemia apareció la incredulidad, se cuestionaban si era real. La primera etapa fue de negación, después vino un estado de shock al darse cuenta de que sí era cierto y, posteriormente, el miedo, porque empezaron a ser más cercanos los casos de COVID-19 en los socios.

Como cooperativa siempre tomaron muy en serio los llamados del Gobierno, las personas con enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, diabetes e hipertensión les solicitaron que hicieran trabajo *home office*. Esto generó que se estableciera qué y cómo se iba a trabajar desde casa, cómo iban a demostrar que, efectivamente, estaban enfermos: si por documentos que presentaran del sistema de salud o de médicos particulares. Poco a poco se fueron adecuando las cosas; una vez que el Gobierno indicó que las incapacidades se podían indicar por Internet, entonces se resolvió la situación de quienes no querían ir a las clínicas para no infectarse, y que eran necesarias las evidencias de lo que sucedía con los socios. Ha habido periodos de mucha creatividad para ir sorteando los diferentes retos presentados.

Tuvieron que bajar el adelanto al rendimiento (salario), ajustaron nóminas a la baja, se perdieron contratos con algunas empresas porque en el momento que el Gobierno suspendió las



licitaciones, entonces las empresas entraron en suspensión de subcontrataciones o contrataciones de materiales o servicios y se cancelaron lugares de trabajo.

Fue necesario adecuar espacios en los lugares de trabajo por encontrarse en áreas fundamentales como servicio eléctrico y de construcción, quienes no tuvieron que suspender labores al 100 %. Se colocaron cintas por donde las personas no podían pasar, se indicó cuál era la ruta de entrada y cuál la de salida. La desinfección en centros de trabajo, en algunos periodos, se realizó cada semana porque se presentaban compañeros con COVID. El negocio que tenían implementado como fumigación lo cambiaron a desinfección porque adquirieron el equipo necesario para ello, convirtiéndose así en uno de los servicios que ha crecido de manera importante.

Como electricistas y compañeros siempre han tenido una forma fraterna de saludarse con palmadas en la espalda y abrazarse, a partir de la pandemia se encontraban y se quedaban parados frente a frente, y tomaban conciencia de que no podían saludarse como estaban acostumbrados. Este aspecto les costó mucho trabajo a todos, fue difícil adaptarse, la situación los ha obligado a transformar conductas.

Ahora tienen gel en las oficinas y en todos lados, los cubrebocas son obligatorios. Por algún tiempo tuvieron compañeros en la entrada verificando la temperatura de los ingresantes o llevando los registros, quienes recorrían las instalaciones para verificar que todos cumplieran con las medidas sanitarias. Todo esto se reflejó en aumento de costos: impacto económico al disminuir los sueldos, costos adicionales por los insumos que se han requerido, e impactos a nivel negocio por la disminución de contratos. Hay que considerar que la recuperación de éstos no se ve a corto plazo, sino que será de mediano a largo plazos.

Los compañeros que se enfermaron, al regresar al trabajo enfrentaron una actitud generalizada de rechazo, por ejemplo, les decían: “ni te nos acerques”, lo cual se vincula con una situación



de miedo que, incluso, pareció generar una paranoia, ya que se percibió que la organización era responsable de los contagios porque no se comprendía que el virus estaba en todos lados. El sensibilizar a los socios de que esto no era una cuestión interna, sino una cuestión social, fue difícil, hasta que aceptaron que podían ser contagiados en el mercado, en el metro, en casa, o en cualquier lugar.

Se empezaron a dar capacitaciones a través de una de las comisiones (Educación Cooperativa) sobre las razones de la sana distancia y del porqué actuar de cierta manera. A partir de eso se generó una corresponsabilidad de todos los socios. Se crearon mecanismos que difundieran información que el propio gobierno federal generaba a través de diferentes instancias. Con los primeros compañeros fallecidos se mostró más seriedad y eso fue en mayo-junio de 2020. Hasta febrero de 2021 fallecieron 115 personas por COVID-19; la estadística era de alrededor de 40 personas por año y la pandemia prácticamente triplicó esta cantidad.

Un momento de crisis fue en junio del año pasado, cuando empezó a subir la tasa de contagios, porque tuvieron que decidir entre: parar obras e incumplir contratos con todo lo que conllevaba una decisión de esa naturaleza, pero cuidando a los socios; o cumplir con todos los contratos poniéndolos en riesgo. Evidentemente, el parar actividades implicaba no generar ingresos. Fue complicado porque involucraba economía, salud, vida de las personas... Por tanto, se decidió hablar con todos los socios por negocio; el consenso fue terminar contratos, cuidarse e implementar todas las medidas de seguridad y protección que estuvieran en sus manos. Eso dio como resultado que no pararan y el nivel de contagios fue mínimo, hubo un punto en el cual desinfectaban vehículos para garantizar la confianza y la propia seguridad de los compañeros. Ese momento de tomar decisiones en conjunto fue de los más difíciles.

La Cooperativa es parte de otros colectivos, y lo que han venido planteando es poder generar ambientes o espacios de conviven-



cia para el intercambio de alimentos en lo que llaman “mercado solidario”. La razón es que subió la canasta básica y ellos tienen contacto con organizaciones de abasto de alimentos y cuentan con espacios grandes donde pueden concretarse ideas para lograr mercados con productos frescos; esto es algo que quieren aterrizar en pro de que los socios tengan cerca de sus casas lugares para adquirir productos que cumplan con las condiciones de calidad y precio. Lo anterior implica ayudarse entre diferentes organizaciones: los que producen, los que transportan, y los que tienen un espacio donde todos pueden converger con la condición de mantener la sana distancia.

No se han generado respuestas para la situación emocional porque esto requeriría de personas expertas que los guíen sobre cómo atender este tema. Existen compañeros que enfermaron y, en la actualidad, hay preocupación por su salud debido a las secuelas que tienen. A través de las comisiones con las que cuentan va a ser necesario generar estadísticas porque es un hecho que muchos socios sí enfermaron y no lo dijeron por la situación del estigma a nivel interno y social en general. Lo primero que se debe hacer es generar confianza y ésta viene de una situación de idiosincrasia social, han notado el “mejor no digo porque me van a regresar”, creen que los casos que han reportado son mínimos en comparación con los que realmente han existido, saben que varios dicen que sí tuvieron COVID, pero que fueron asintomáticos y por eso no lo reportaron.

Con las medidas implementadas frente a la emergencia sanitaria, en una primera instancia hubo molestia por la disminución del recurso económico, después cuando se dieron cuenta de las condiciones generales del país ya manifestaron aceptación, en muchos casos, incluso, comprensión, en el sentido de “efectivamente lo tenemos que hacer porque de otra manera es insostenible”.

Se hizo una adaptación del trabajo, realmente muchos desde casa hicieron lo que tenían que hacer, alrededor de tres personas



decidieron que las dieran de baja de la nómina y que, por el momento, no colaborarían. Hay compañeros que durante todo este periodo no han faltado al trabajo, y han decidido asistir con todos los riesgos que eso implica porque reconocen que hay actividades que no se pueden hacer desde sus hogares. El resultado es que la cooperativa sigue operando, a diferencia de muchas empresas que tuvieron que cerrar definitivamente: el llegar desde un marzo a otro marzo, ya es un logro.

Se ha generado una nueva cultura del trabajo y, además, una cultura de salud que implica cuidarse entre todos; preocuparse porque siempre haya gel en los lugares de trabajo; que desde la entrada se vigile la temperatura de las personas que ingresan, y si ésta se encuentra alta, es mejor que se retiren a su casa y que vayan al médico; estar pendiente de cómo siguen los compañeros enfermos, si se están cuidando y cuáles son sus secuelas. Uno de los más grandes resultados es que se ha visualizado que existe otra forma de trabajo en la cual todos pueden cuidarse. El reconocerse como personas vulnerables y que deben ayudarse ha sido muy importante.

No han recibido apoyos institucionales, saben que han salido programas, sin embargo, los de la Ciudad de México son muy acotados para cooperativas, están dirigidos a organizaciones más pequeñas, no encajan en el perfil de cooperativa que accede a dichos apoyos. En seguridad social se han aplazado los periodos de pagos, pero eso no ayuda en nada, porque tarde o temprano tendrán que realizarlos.

A un año de la pandemia hay una situación de agotamiento por el estrés generado de “cuándo me toca a mí”, o porque tienen un familiar enfermo, o por necesitar el trabajo para tener ingreso. Desde el punto de vista económico existe conciencia de que en todas partes se ha pasado por una disminución de ingresos y empleos; se han dado cuenta de que otras personas pasan por la misma condición o por condiciones más difíciles y, entonces, hay



una voluntad por sacar adelante el trabajo y sus actividades, con todo el riesgo que esto implica.

En las transformaciones, la tecnológica ha sido muy importante. Durante las primeras reuniones con los medios electrónicos algunos compañeros no aceptaban este tipo de comunicación. Cuando la reunión es presencial se toman en cuenta situaciones que en videoconferencias no se notan, como la posibilidad de que alguien detrás de la pantalla de la computadora pueda estar escuchando, o no se perciban los gestos con las manos, ni tampoco el uso de celulares. Planteaban que las reuniones debían ser presenciales para tener todo el escenario completo, pero conforme fue pasando el tiempo se dieron cuenta que la tecnología era una herramienta necesaria. Esto ha sido una de las mayores transformaciones porque ya existe la aceptación al respecto.

El segundo cambio es la readaptación de las reuniones para firmar acuerdos, contratos o tener conversaciones con los clientes. Las videoconferencias ayudaron a revisar contratos y darles seguimiento a las obras. La supervisión de la documentación que se tenía que hacer en sitio transformó la necesidad de hacer las cosas de forma presencial a virtual.

Otra transformación se manifiesta en personas que no usaban las computadoras, sobre todo aquellas de la tercera edad que prefieren el trabajo en campo, de socialización. Esa inmersión a la parte tecnológica las ha obligado a usar softwares y herramientas de comunicación. Antes se visitaba a la persona de manera presencial, se realizaba un viaje y se aprovechaba para revisar otros pendientes, era impensable hacer videoconferencias, ahora se ha reforzado el uso del Zoom. Es posible tener una reunión con gente que está en Portugal, Estados Unidos o México sin necesidad de viajar, con la salvedad de que se pierde de vista el entorno del saludo, el abrazo, o percibir aquellos gestos que en ocasiones indican emociones, que no se transmiten por los medios electrónicos y que, muchas veces, pueden ser signos de si se cierra o no un trato.



El futuro se ve complicado, al estar revisando literatura y experiencias existe una tendencia a reducir los costos directos y los indirectos también. Como Cooperativa, asimismo tienen que recortar sus costos para poder competir, deben poner atención en eso, no pueden decir que no pasa nada y mantener sus oficinas grandes. Ésta es una discusión colectiva que se tiene que realizar porque, de lo contrario, saldrán del mercado debido a que sus productos y servicios no van a competir con las empresas del ramo. Deben llevar una evolución de la forma de trabajo administrativo, sobre todo, en la parte operativa existen actividades que son manuales y que se tienen que hacer con dos o tres personas más.

Una respuesta temporal fue tomar la temperatura a quienes ingresaban; los filtros de sanidad implementados son medidas preventivas, que no eliminan el problema y sí generan costos extras. Al principio se proporcionaron los cubrebocas, pero el costo resultaba muy alto y, por tal motivo, éstos se confeccionaron de telas reutilizables, tanto para la cooperativa como para el sindicato.

Algunas de las respuestas que continuarán son: tienen que aterrizar más el trabajo desde casa; dialogar e implementar la parte administrativa por una cuestión de eficiencia competitiva, en aras de que no pueden generar costos que otras empresas están eliminando. Las empresas van a seguir avanzando en términos de una eficiencia económica y ellos, como entidad social, tienen que buscar la manera de mantenerse en esa competencia.

Deben transformarse desde una perspectiva de operatividad. Tienen que realizar asambleas para la toma de decisiones y para dar informes, entonces, hay que atender las cuestiones legales, investigar si una autoridad les va a validar una asamblea llevada a cabo por medios electrónicos, o cuáles serían las formalidades para cumplir con esas instancias legales.

En temas de salud y de seguridad social las autoridades indicaron que el contagio ha disminuido, pero que la letalidad ha aumentado, lo que significa que el virus es más agresivo y se debe



esperar a conocer la reacción a la vacuna. Esto significa que hay que seguir laborando en esas condiciones y que tiene que reforzarse el cuidado de todas y todos, de lo contrario, los contagios y las defunciones seguirán.

Es importante reaprender lo que el capitalismo ha generado, que es el individualismo. Hay que reforzar el ámbito de trabajar todos juntos: gobierno, economía social, población, empresas; es necesaria una conjunción de todos para poder salir adelante. Se considera que el Gobierno solo no puede con esto, está demostrado, a nivel mundial, que en la sociedad también necesitamos reaprender a ayudarnos todos. El siguiente va a ser el mayor de los retos: no vernos como individuos aislados, diciendo “yo puedo solito”, ni siquiera como organizaciones.

En las últimas semanas, ciertas organizaciones empresariales se han unido para plantear alternativas en pro de mantener un servicio, de cuidar a los trabajadores, y eso es algo que nunca se había visto. Entonces, si bien las organizaciones sociales tienen la costumbre de trabajar en conjunto, lo que se necesita es unir esfuerzos de todos para salir adelante, dejar un poquito de lado la economía de mercado y más bien ver la situación de cómo socialmente poder cuidar la salud porque, finalmente, “si no hay salud no hay nada”, y ahorita está demostrado.

LA GUÍA, COOPERATIVA DE CONSUMO Y SERVICIOS

Marcela Ibarra Mateos

(Escrito elaborado con base en entrevistas realizadas a Marco Castillo, miembro fundador del colectivo.)

La Guía, Cooperativa de Consumo y Servicios inició hace aproximadamente dos años, como parte de una iniciativa ciudadana, alrededor del Centro de Desarrollo Comunitario a cargo del gobierno



municipal de la Ciudad de Puebla. La Secretaría de Bienestar y la Fundación Ayuda en Acción abrieron el espacio y proporcionaron recursos a las primeras iniciativas de formación en emprendimientos sociales a un grupo de mujeres y hombres de la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, en el municipio de Puebla.

Doce ciudadanas y ciudadanos sin afiliación política ni religiosa decidieron organizarse con el fin de defender los derechos de los consumidores, generar una nueva educación en materia de consumo responsable, establecer relaciones equitativas justas, familiares o con otras cooperativas rurales o urbanas. También con la inquietud de impulsar iniciativas de trabajo y activar procesos de recuperación de las relaciones de solidaridad y de reciprocidad de la propia comunidad, que frente a la inseguridad y a la presencia del crimen organizado se han empezado a debilitar. Ellos y ellas son la parte fundadora de este colectivo. La gran mayoría son mujeres que han estudiado hasta la secundaria, amas de casa o bien se dedican al trabajo doméstico remunerado. Ellos, los varones que forman parte del colectivo, no tienen empleos fijos.

El colectivo, además de estar formado por este primer núcleo, cuenta con un grupo más amplio de cerca de 151 personas; 61 de Santo Tomás y el resto de otras colonias aledañas a Santo Tomás o bien de municipios vecinos. Es un grupo muy heterogéneo, la mayoría son mujeres entre 25 y 50 años; el 10 % son profesionistas, y el resto son personas que se dedican al hogar o que tienen una pequeña empresa y que en esta pandemia no les ha ido bien. Todos ellos forman parte del grupo de consumo o bien del grupo que ofrece productos que son directamente del campo o procesados de manera artesanal.

Ellas y ellos se afirman como colectivo, aunque funcionan bajo los principios cooperativos, de filiación voluntaria, de trabajo colaborativo, de toma de decisiones democráticas, de priorizar el trabajo y la vida, frente al capital. De acuerdo con lo que comparten, a diferencia de otros grupos que se forman para generar



inmediatamente una cooperativa como parte de programas de gobierno, ellos y ellas han decidido iniciar al revés. En un principio no tenían como objetivo trabajar el consumo, sino acciones de un grupo para beneficio de su comunidad. A través del diálogo y del desarrollo de diagnósticos participativos tomaron conciencia de que uno de los problemas centrales era la alimentación. En este proceso llega la pandemia y la generación de este grupo viene, de manera natural, con la claridad, primero, de consolidarse, establecer reglas, un código ético para cuando el grupo estuviera lo suficientemente maduro, para después pasar a la constitución legal. De hecho, han sido invitados por otras cooperativas para sumarse a ellas, pero por lo pronto han optado por hacer alianzas que les permitan mantener su autonomía y concentrar la toma de decisiones en quienes iniciaron este proceso. Una de las ventajas es que, al ser un grupo tan diverso con biografías de vida tan distintas, tiene mayor libertad para dialogar, discutir y consensuar la toma de decisiones.

No somos como los productores de café que ante el intermediarismo se juntaron contra eso. Este grupo tiene una diversidad de historias y territorios con una suma de luchas, de cultura, de trabajo comunitario, de activistas ambientalistas, de mucha gente que ha hecho muy rico el proceso. Vamos a cumplir escasamente dos años de este proceso y preferimos así para evitar el conflicto.

Aunque les lleve más tiempo, como nos comparten, todas las decisiones se toman en colectivo en el grupo promotor, de manera presencial o virtual, y han decidido que sea por consenso. Al grupo amplio se le comunican las decisiones y cambios, y algunas acciones también se toman en consenso con ellos. Por ejemplo, para agregar algunos productos a las compras colectivas, se pregunta si hay una necesidad particular o se dialoga si se pueden



comprar otros productos. Cuando un productor se incorpora a La Guía, primero se habla con él o ella, para conocer los productos que ofrece, se espera que sean de calidad, que tengan precios accesibles, que dentro de su propia organización tengan condiciones laborales dignas y que también contribuyan a mejorar los procesos.

A lo largo de estos dos años se han llevado a cabo distintas evaluaciones en cuanto a la presentación de los productos, los tiempos de entrega, la elaboración de las canastas con los productos, la calidad, la eficiencia en la comunicación y la organización de la cooperativa. De esta manera se ha ido mejorando el funcionamiento. Se han ido integrando nuevos productores y prestadores de servicios, así como también se han retirado algunos, cuyo costo puede ser demasiado elevado para el perfil de los consumidores.

La Guía surge y, sobre todo, tiene un crecimiento acelerado durante la pandemia. Los primeros pedidos se empezaron a hacer en el mes de febrero de 2020, con dos puntos de entrega: en el Centro de Desarrollo Comunitario, para los habitantes de Santo Tomás, y en la Secretaría de Bienestar, en donde conocidos y algunos empleados hacían sus compras. Conforme se fue alargando el confinamiento, el número de consumidores se fue ampliando, y así también el de productores. De esta manera se llegó hasta seis puntos de entrega en la zona conurbada de la ciudad de Puebla.

Una de las herramientas que mayor utilidad ha tenido el colectivo ha sido el uso del Whatsapp que, justamente, es el medio de comunicación más eficiente, a través del cual se comparte el formato de pedido, utilizando la aplicación de formatos de Google. También, a través de esta aplicación se ha compartido información para el cuidado de la salud, servicios, atención, programas sociales y apoyos que benefician a los miembros del colectivo. El intercambio de información fluye entre todos. Sin tener que mediar, se comparte información, se inscriben a cursos, se mandan recomendaciones sobre materia de salud, o de cómo, por ejemplo, preparar mejor los alimentos. La gente se está formando o



discute otros temas. Todas las personas, desde sus capacidades, contribuyen para que estén más informados.

Un elemento fundamental de la Guía es la solidaridad entre los miembros. Algunos de los primeros consumidores, sobre todo aquellos ubicados en Santo Tomás, dejaron de hacer sus compras por el impacto de la pandemia en sus ingresos familiares. Muchas mujeres que hacían trabajo doméstico perdieron sus empleos y también los hombres dedicados a la albañilería. La opción al interior del colectivo fue proponer que pagaran en especie con materiales reciclables o de reuso; de esta manera se incorporó la economía circular como parte de este colectivo para hacer una especie de trueque entre materiales reciclados y productos de la cooperativa. Con otros colectivos como el Pepenafest, un espacio para el trueque y la compra de material de desecho reutilizable o reciclable, del municipio de San Andrés Cholula, se vende el material reciclado y así se recupera en moneda el resultado del trueque.

El colectivo no solamente busca el consumo sino también la defensa de los derechos.

Estamos en una fase de formación, nosotros hemos planteado a todos los que participamos que en la historia reciente de México sus productores han tenido esa capacidad de organizarse, cada vez hay más cooperativas, hay más capacidad de escucha. Sin embargo, los consumidores estamos desarticulados, estamos solos frente a grandes industrias, a veces frente al Estado y a múltiples actores que han compartido la alimentación en un negocio pueril. Estamos en un proceso de formación de manera muy modesta, cada semana haciendo acciones de información. Hacemos comparativas de quién es quién en precios, cómo sale si compramos de manera conjunta y cómo sale individual.

La cooperativa tiene claro que actuar colectivamente no genera un ingreso, sino la ventaja de comprar a un mejor costo y



alimentos sanos; esto es algo que todo el grupo reconoce, sus integrantes no tienen más ingresos, pero tienen menos gastos. Algunos datos aproximados, de acuerdo con los cálculos que han hecho, es que se ha logrado un ahorro de entre el 20 y 25 % sobre lo que tradicionalmente se gastaba para consumo. También reconocen lo importante que es entablar una alianza directa entre productores y consumidores; que los primeros vendan a un precio más justo y que se establezca una relación con los consumidores para dialogar.

Este grupo, con sus diversidades, ha podido protegerse de la pandemia. El hecho de no tener que salir al mercado, a la plaza o a la calle para comprar, aunque parezca un tema menor, genera una especie de protección ya que se entregan los pedidos a domicilio.

El colectivo ha pasado también por varios momentos de tensión. Uno de ellos ha sido decidir con respecto al tema de la venta de productos: si se mantiene la distribución a domicilio y en qué condiciones, si se le dedica más tiempo al tianguis que se promueve desde el Centro de Desarrollo Comunitario, o bien, si le brindan más espacio al punto de venta que ya han instalado en otra zona de Santo Tomás. Al cierre de este texto, en la asamblea se tomó la decisión de cerrar temporalmente la distribución a domicilio para ajustar los procesos y la organización al interior del colectivo.

Si bien las decisiones se toman de manera colectiva, este desafío ha sido uno de los más grandes del grupo. Para muchos ha significado un proceso de aprendizaje, han entrado a dinámicas nuevas que no conocían y que, a veces, generan tensión. Santo Tomás es una comunidad que se dedica a la extracción de piedra, mármol y ónix, actividad que se ha reducido y la gente no ha tenido capacidad de organizarse. Son empresas individuales o de familias que competían entre ellas y, ahora, cuando es necesario promover la organización, resulta difícil porque no existe una cultura al respecto; hay dudas y desconfianza entre ellos. Aunque es importante señalar que los procesos de formación y acompa-



ñamiento que se dan desde la Universidad Iberoamericana han sido favorecedores en este proceso de aprendizaje.

La transformación que la pandemia ha generado en las vidas familiares y laborales de las personas es notoria. Como bien señalamos, muchas mujeres son trabajadoras domésticas. Al empezar la pandemia, las familias pudieron mantener el empleo durante un tiempo, pero después sus componentes comenzaron a ser despedidos de su trabajo. Actualmente, dentro de la cooperativa, por lo menos 32 personas no tienen empleo. Cuando se exploran las posibilidades de qué otros trabajos podrían hacer, éstas son muy limitadas ya que todas pertenecen a sectores que han sido golpeados por la pandemia como: lavar ropa, elaboración de comida, y uno de los más competidos y sin elementos de infraestructura, como contar con una bici o moto para entregar a domicilio.

Los principios de solidaridad y reciprocidad también se han visto afectados. Se ha intentado instrumentarlos, ponerlos en práctica en la pandemia, pero no resulta tan fácil porque, aunque se construyan lazos de afectividad y solidaridad, la premura por seguir sobreviviendo gana sobre la solidaridad, o está en tensión permanente. La solidaridad se relaciona con un tejido largo complicado de redes sociales, con el saber que esa red te va a proteger. Se ha avanzado en la construcción de ésta, pero la precariedad la hace endeble, se mueve.

Una de las fortalezas del grupo es que ha logrado generar relaciones de alianza con distintas dependencias del Ayuntamiento de Puebla. Pero más allá de la alianza en sí misma, el proceso de vinculación, de gestión, que las personas de la cooperativa realizan, las ha fortalecido en sus capacidades de diálogo con autoridades locales. Nadie ha sometido a nadie, todo esto ha sido un proceso de formación que fortalece la participación ciudadana. Durante esta pandemia, el Centro de Desarrollo Comunitario se convirtió en un espacio para ofrecer servicios de salud. Gracias al trabajo de la cooperativa, que tiene mayor cercanía con la gente, la po-



blación se acercó para hacer uso de estos servicios. Las personas confiaron mucho más en éstos, y se amplió el apoyo y el beneficio. Con el Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Puebla también se han vinculado, a través de un programa de cultura de paz, los parques de la esperanza, el tianguis de Eco Amigos, donde productores pueden ir a intercambiar productos. Y dentro del colectivo se toman decisiones de participar o no en los programas; se han recibido ofertas de distintos actores institucionales, pero trabajan siempre con los principios de respeto a la autonomía, alianza y no activismo político.

El fortalecimiento de la Guía durante la pandemia favoreció también a los productores que forman parte de este colectivo, en el sentido de que lograron tener un grupo de consumidores permanente, que semana con semana consumía sus productos. De esta manera, venden más fácilmente y no tienen que entrar en una competencia desigual y feroz como la que hay en la Central de Abastos. Estos productores, que son más pequeños, cuentan con un espacio donde aseguran la venta de sus productos de manera semanal. En este contexto, las nuevas tecnologías y las redes sociales les han abierto el horizonte a las ventas a distancia.

Hacia el futuro, el grupo intenta ser una cooperativa formalmente, pero, en ocasiones, le gana el tema de acercar recursos. A veces se discute más sobre el modelo de negocios que el de la cooperativa. Están todavía a medio camino de decidir cómo conformarse legalmente, por lo pronto, la figura de colectivo les funciona. El interés es dejar una estructura básica que se dedique a este proceso de entrega de productos y avanzar en la defensa del derecho del consumidor y que el núcleo central genere procesos en su colonia para fortalecer la red.

La Guía ha funcionado de manera estable en estos dos años que iniciaron los diálogos y los acercamientos. Hasta diciembre pasado no se apreciaba, ni en el grupo ampliado, ni en el núcleo coordinador, signos o señas de depresión, angustias o tensiones



como resultado del confinamiento. Fue hasta principios de este año que apareció, de manera muy explícita, una serie de mensajes en los cuales las personas se dejaban ver angustiadas, preocupadas, afirmando que no entendían lo que escuchaban en la televisión. Pensaban que “ya iban de salida”, pero en enero, la curva de contagios se hizo más grande. La muerte estaba cada vez más cerca, perdieron familiares, en el grupo de Whatsapp empezaban a circular mensajes de ayuda para conseguir medicamentos y oxígeno. Una situación particular, de hace unas semanas, marcó también el nivel de tensión al interior del grupo. La familia de una compañera se infectó y ella insistía en ir a trabajar. Frente a esto también se verá qué tipo de acciones tomar y cómo acompañar al grupo. En unos días entregarán resultados de una evaluación aplicada a éste sobre estrés y angustia. Pero, en términos generales, más que una estrategia ha habido una escucha por parte de todos.

La Guía, durante los meses de enero a marzo, se abocó a un periodo de reflexión para reiniciar su trabajo en abril.

FEDECACES

Andrew Cummings y Salvador Marroquín

(Texto fundamentado en entrevistas realizadas a Héctor Córdova, gerente corporativo.)

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (Fedecaces) es un referente importante de los servicios financieros cooperativos en el país. Está compuesta por 22 diferentes cooperativas asociadas, que trabajan en red y han logrado crear un sistema de servicios financieros que también incluye correduría de seguros, educación cooperativa, y servicios de contabilidad.

En el mes de marzo de 2020 y a raíz de los cambios en la realidad generados por el fenómeno de la pandemia COVID-19, Fedecaces reaccionó con la definición de un plan de continuidad



de negocios, con la meta de garantizar el acceso a servicios de las cooperativas para asociados y otros usuarios. Requirió atender la salud e higiene de manera permanente, definir una operatividad estratégica y valorar continuamente el impacto sobre los servicios prestados, sus asociados y el personal que labora en las 22 cooperativas y sus cuerpos de liderazgo.

Se realizó un sondeo sobre el impacto en la salud y la vulnerabilidad de las actividades a las que se dedican las personas asociadas-usuarias de los servicios cooperativos, reconociendo que el confinamiento decretado por el gobierno salvadoreño había impactado la economía de las personas asociadas y empleadas. El análisis evaluó que durante el primer y segundo mes las familias iban a considerar el fenómeno como algo temporal y con el uso de los recursos familiares ahorrados se podría demostrar la capacidad de autosostenibilidad de las familias sin ingreso. Sin embargo, era necesario ir más allá y considerar el fenómeno como algo con mayor alcance temporal. Cuando los servicios financieros fueron considerados por el gobierno como una actividad esencial, Fedecaces ya había decidido que debía asegurar la prestación de servicios financieros a sus asociados para mantener los niveles de consumo, aportando capital de trabajo para sus negocios y poniendo los ahorros a disposición de las familias mientras volvían a tener ingresos.

Como estrategia transversal a los diferentes procesos, para garantizar la continuidad de los negocios en las cooperativas, se priorizó garantizar condiciones de bioseguridad y salud para personas usuarias de servicios, trabajadores y los equipos de liderazgo cooperativo.

Como respuesta proactiva, frente a las necesidades de sus usuarios, asociados o no, Fedecaces desarrolló la estrategia de ir al encuentro de sus actuales socios-usuarios y a la conquista de nuevos asociados. Esta Federación lanzó un plan de virtualización de sus procesos y productos financieros: diseñar una aplicación



para “teléfonos inteligentes” con el fin de que sus socios puedan realizar casi el 100 % de sus transacciones en línea, y así no concurrir a las sucursales de las cooperativas. Para implementar lo anterior, en pocos meses tuvieron que reinventarse, realizando “saltos exponenciales”, acelerando proyectos de transformación tecnológica de mediano plazo.

Fueron proactivos en diseñar e implementar estrategias para llegar a potenciales usuarios de sus servicios financieros, con productos y servicios innovadores para generar mayores ingresos y así garantizar la sostenibilidad de las cooperativas. Un indicador de esta estrategia proactiva de continuidad y ampliación de negocios ha sido la apertura de nuevas sucursales y la reinauguración de otras. También continuaron con una estrategia de ampliar de seis a 16 las cooperativas, ofreciendo el manejo de tarjetas de débito. Estas medidas han servido para relanzar servicios en alivio a las necesidades financieras de sus asociados, así como para atraer nuevas personas asociadas y usuarias de sus servicios.

Internamente, una de las primeras medidas tomadas por la Fedecaces fue la reestructuración presupuestaria con propósito. Esto incluyó la paralización de nuevas inversiones y revisión para recortar gastos no esenciales. Se protegió el empleo de personas trabajadores en todas las cooperativas asociadas, y se decidió no despedir a ningún empleado. Para hacer frente a los cambios presionados por la pandemia, las cooperativas y las demás entidades del sistema Fedecaces han readecuado funciones de sus trabajadores e invertido en capacitarlos para nuevas formas de trabajo y atención a clientes. Se impulsó el teletrabajo, el cual alcanzó aproximadamente a 50 % del personal.

Durante este tiempo, entre el liderazgo cooperativo se reconoció la importancia de cuidar la solvencia de las cooperativas con el propósito de dar continuidad a la oferta de servicios para la inclusión financiera a mediano y largo plazo y, también, honrar las inversiones de los asociados priorizando la generación de



utilidades para ellos como propietarios de sus cooperativas. Para mitigar el impacto en la salud financiera de las cooperativas se dio especial importancia a la liquidez de éstas, se definieron nuevos lineamientos para incrementar los volúmenes de operación, no arriesgar las reservas y evitar caer en insolvencia.

Utilizando las directrices gubernamentales, la Fedecaces creó la figura de los “créditos COVID” como una herramienta para no afectar sus cuentas incobrables y poner menos presión a las reservas legales, asegurando un manejo responsable y solidario apegado a principios cooperativos. Si bien el volumen de dichos créditos alcanzó a 100 millones de dólares y afectó a cerca de 12 mil personas asociadas de la micro y pequeña empresa que debieron estar cerradas, y atender pagos a proveedores, la reclasificación fue un alivio en todos los rubros, pero, principalmente, entre los más afectados, que fueron el turismo y los alimentos. Estos últimos, después de cuatro semanas de la pandemia, comenzaron a ofrecer nuevas modalidades, como la venta a domicilio y para llevar, permitiendo una “reactivación” de la actividad económica particular. En términos porcentuales, la cartera de “créditos COVID” de Fedecaces ha sido un poco más de 17 % del total de cartera.

Por su propia cuenta, para apoyar el desarrollo de las PYMES de las personas asociadas, Fedecaces ha configurado un programa de soporte para asesorarlas con la gestión de sus actividades empresariales. La red de cooperativas del sistema Fedecaces cuenta con una cartera de créditos a micro y pequeñas empresas de aproximadamente 32 millones de dólares, beneficiando a aquellas que cuentan con alrededor de 7 mil personas asociadas. Para atender este conjunto importante de MYPES, las cooperativas cuentan con aproximadamente 80 asesores. Se reconoce que el fortalecimiento de sus capacidades empresariales, para resistir y aprovechar oportunidades generadas por la crisis, requiere no sólo de crédito, sino también de asesoría técnica empresarial, por ejemplo, para innovar sus estrategias de comercialización.



Fedecaces también negoció con sus socios internacionales, principalmente los de Estados Unidos de América, la prestación del servicio de envío de remesas bajo la modalidad de cero comisión y descuento en montos menores de 200 dólares, considerando que cayeron significativamente las remesas en los primeros cuatro meses del año 2020. Esta modalidad, implementada en mayo, benefició a muchas familias socias, para quienes, en algunos casos, las remesas representan alrededor de 70 % de sus ingresos. Sin embargo, ya para los meses de agosto, septiembre y octubre los niveles de remesas volvieron a la normalidad y hacia finales de 2020 se evidenciaba una reactivación del envío de remesas, logrando cerrar el año 2020 con un aumento del 14 % con respecto a 2019.

Generar estos resultados positivos implicó negociar con las 14 empresas transmisoras de dinero con las cuales se trabaja, para ofrecer incentivos y dinamizar el envío de remesas aun con montos reducidos.

En síntesis, al mismo tiempo que se focalizaban esfuerzos para garantizar resiliencia y la sostenibilidad de las operaciones, iniciando con la orientación de no cerrar sucursales, ni despedir a empleados de la red de cooperativas Fedecaces, se trabajó proactivamente para lograr las metas de aumentar su membresía y crecer en las principales variables de desempeño de sus operaciones. Ha sido importante la transformación tecnológica, el entrenamiento del personal a través de los *webinar*, para comprender la pertinencia de ir al territorio, al encuentro con las personas, para servir a sus usuarios actuales y cumplir las metas de crecimiento.

Al concluir el primer año de la crisis multidimensional desatada por la pandemia es claro que se ha profundizado la problemática económica de las familias asociadas a las cooperativas de Fedecaces, se han fragilizado más sus trabajos y afectado sus presupuestos familiares. Continúa siendo necesario asegurar que las personas empresarias asociadas puedan mantener abiertos sus



negocios y que la opción de cierre no sea considerada. La membresía de las cooperativas está compuesta por sectores de la clase media y baja, de la población mayormente afectada por la crisis.

Con la instalación de las medidas de bioseguridad para mitigar los riesgos en todas las cooperativas del sistema Fedecaces, se contribuyó a que no hubiese fuerte afectación de fallecimientos y un relativamente bajo nivel de enfermedad asociada al COVID-19 en las personas trabajadores y de liderazgo.

Sin embargo, la afectación en la salud de las familias asociadas a Fedecaces ha sido evidenciada en el aumento significativo del pago de reclamos de personas usuarias de productos de Seguros Futuro de Fedecaces, relacionados con la salud y la vida. Se ha registrado un aumento importante en el fallecimiento de titulares de seguros de vida con relación al año 2019, y aunque los reportes médicos oficiales registran otras causas de muerte, se sospecha que las personas fallecieron por complicaciones relacionadas con el COVID-19.

Seguros Futuro ha sido la instancia que más directamente ha atendido problemas de salud de las familias relacionadas con el COVID-19. Sin embargo, ha implementado una política de ofrecer descuentos en las primeras pólizas de seguros vinculados con la cobertura de gastos de salud y de vida para ayudar a las familias a mantener su cobertura, aun frente a un deterioro en su situación económica, bajo la lógica de que “es mejor tenerlo y no necesitarlo, que no tenerlo y necesitarlo”. Adicionalmente, ha apoyado a las cooperativas con la compra y distribución de alimentos a familias asociadas a ellas.

En relación con las consecuencias emocionales es claro que se ha generado afectación psicológica negativa en las familias más vulnerables de personas asociadas, trabajadores y en el liderazgo de las cooperativas afiliadas a Fedecaces. Esto ha sido especialmente negativo en los casos donde las familias han sufrido la pérdida de vidas. Para contribuir a mitigar los riesgos de



los efectos negativos en la salud y el bienestar psicológico de las personas, Seguros Futuro ha agregado temas preventivos de los potenciales impactos psicológicos, además de los que se refieren a medidas de bioseguridad. Asesores para el Desarrollo del sistema Fedecaces también han incorporado a sus servicios educativos temas como el manejo de estrés entre empleados y liderazgos de las cooperativas.

En cuanto a los impactos específicos de la crisis económica en los negocios de personas asociadas usuarias de créditos de las cooperativas de Fedecaces, es evidente que las mujeres empresarias han sido más impactadas. Ellas son suscriptoras de 60 % (4 295) de los “créditos COVID”, cuando las mujeres representan el 55 % de las personas usuarias de crédito para las micro y pequeñas empresas, a nivel general, dentro de las cooperativas.

Su visión del futuro parte de un enfoque de riesgos considerando que la afectación de la crisis multidimensional desatada por el COVID-19 podría durar hasta tres años más, ya que sólo perciben iniciativas “populistas” de parte del gobierno de El Salvador, que alimentan las “ilusiones” de la gente, pero no son soluciones estructurales a la problemática. Han aprendido a respetar sin tener pánico a la pandemia y a no detenerse en su estrategia sistemática de expansión de las cooperativas.

Perciben algunos riesgos del entorno nacional que podrían afectar negativamente al sistema Fedecaces, especialmente en el campo regulatorio a partir de iniciativas legislativas que podrían materializar el riesgo de declarar una moratoria a pagos por personas en condiciones de insolvencia. Las consideran no procedentes, ya que los fondos de los créditos no son del Estado y no conciliaría bien la importancia de la sostenibilidad de los servicios de las cooperativas y los intereses económicos de personas asociadas ahorradoras en relación con personas usuarias de créditos.

Se destaca, entre las proyecciones, la importancia que el liderazgo cooperativo ha dado al fortalecer la coherencia lograda a



través de la integración de las cooperativas y el trabajo, unidos en red para convertir al sistema Fedecaces en una de las redes principales de servicios financieros en todo el país, que “solos no van a ningún lado”. También se considera importante el haber logrado “activar el liderazgo”, para trabajar en conjunto con el fin de resolver problemas de pandemia a favor de la inclusión financiera de la población. El centro de su estrategia es la “conquista” proactiva de la población para lograr su afiliación a las cooperativas e inclusión financiera a través de la utilización de sus servicios. En este sentido se busca continuar con el crecimiento logrado en los últimos cinco años; esto implica conseguir la empatía de la población y la expansión territorial del alcance de las cooperativas, proyectando abrir más de 40 nuevas agencias en los próximos cinco años.

La pandemia desconfiguró la planificación del trabajo de la Fedecaces, por tanto, fue necesario adoptar nuevas modalidades de trabajo para garantizar un plan de continuidad de negocios. Esto permitió llegar al año 2021 en condiciones para realizar un proceso de reflexión crítica y planificación estratégica con el fin de proyectar una visión para el fortalecimiento del sistema de cooperativas Fedecaces hacia el futuro.

Al reflexionar críticamente sobre la situación social-económica-emocional de las personas integrantes, asociadas, trabajadoras y de liderazgo del Sistema Cooperativo Fedecaces, a un año del inicio de la pandemia, la primera constatación es haber sobrevivido. En este proceso han reconocido la importancia de adoptar una postura proactiva, de la “activación de la mente” entre el equipo de liderazgo de la cooperativa para buscar alternativas y “ganarle la batalla a la pandemia” e, incluso, impulsar el crecimiento bajo la lógica del slogan de “vamos por más”.

Se cree que las estrategias implementadas han generado mayor cohesión e identidad para caminar conjuntamente entre personas asociadas usuarias de sus servicios, empleados y los equipos de



liderazgo del conjunto del sistema Fedecaces. En este sentido, han salido “victoriosos” frente a los riesgos reales que existían en el año 2020 para la salud y bienestar de las personas, así como para la salud financiera de las cooperativas, evitando escenarios distópicos de una corrida de los ahorros, no uso de servicios crediticios, etc., forzando despidos y el cierre de agencias. Fedecaces, las cooperativas y otras instancias del sistema han tenido que reinventarse o transformarse durante la pandemia para ser resilientes y salir adelante buscando nuevas modalidades para llegar a la población a través de nuevos canales de distribución. Ahora, se proyectan seguir abriendo nuevas agencias, ampliando su alcance territorial y de población afiliada en su planificación estratégica para 2021-2025.

La pandemia ha requerido una actitud de resiliencia en las personas y las cooperativas para enfrentar la crisis. Valoran que la vuelta a la normalidad no existe y tocará ir adaptándose y contribuyendo a la construcción de la nueva realidad de manera proactiva, aunque sin percibir todavía una luz clara al final del túnel. Sin embargo, Córdova dijo: “Nos dejó algo bueno. Recapitalizó los principios y valores cooperativos, la ayuda mutua y la solidaridad. Lo que afecta a unos, nos afecta a todos como seres humanos”.

APRO MUJER

Yolanda C. Cruz Contreras

(La elaboración de este escrito se apoyó en la entrevista realizada a Martha Campos Méndez, socia fundadora.)

Apro Mujer es una ONG que se dedica a la capacitación y asesoría de la mujer, su ámbito es organizativo y su labor está dirigida a las mujeres de escasos recursos económicos y fue fundada en 1987. La Cooperativa de Mujeres Productoras y Microempresarias



(Coopemupro) se ocupa de la producción y fue creada en 1998. Las oficinas de ambas se ubican en la provincia de Heredia en la Comunidad de Los Lagos, que está a 10 km al noroeste de la capital, San José, Costa Rica, y su radio de operación es a nivel nacional.

Las mujeres miembros de la Cooperativa también son asociadas en Apro Mujer; el tener dos figuras legales obedece a los lineamientos legales y culturales del país. Las socias son 1 230 y se ubican en todo el territorio, aunque el 80% vive en la provincia de Heredia. La idea original de fundar la asociación fue para que las mujeres logaran sus proyectos y económicamente fueran independientes de los hombres, permitirles “liberarse” para que estuvieran con ellos por voluntad propia y no por dependencia económica.

De acuerdo con un diagnóstico, la mitad de las microempresarias tuvo que cerrar sus negocios debido a la pandemia. En noviembre de 2020 es necesario reactivar la economía; las mujeres dedicadas a servicios han sido afectadas como consecuencia de la restricción en la movilidad; aquellas ocupadas en el turismo rural ya no lo reciben; las de salas de belleza han disminuido sus ingresos. En general, la demanda de servicios ha bajado. Las compras han caído por dos razones: 1) la gente tiene miedo y ya no sale, por ejemplo, a comer fuera de la casa, por tanto, quienes tienen negocios de sodas y restaurantes han visto muy afectadas sus ventas; 2) las personas que trabajaban de tiempo completo y ahora sólo medio tiempo han perdido poder adquisitivo.

Las únicas mujeres que no están en esta circunstancia son las que se dedican a la agricultura, ya que el consumo de alimentos no ha decrecido, de hecho, en el país, el sector agrícola es el que ha dado la cara con la pandemia porque cuando las fronteras se cerraron fueron los agricultores nacionales quienes mantuvieron el mercado con productos.

A todo esto, se suma el aspecto emocional, la gente está asustada, tiene miedo y las afectaciones psicológicas están presentes.



La violencia doméstica ha crecido, las familias están confinadas haciendo teletrabajo, los niños sin poder salir a los parques porque están encerrados y las casas, en ocasiones, son espacios pequeños. Todo esto ha impactado a las mujeres y a los niños; el sentido común diría que, como las familias están en la casa, la comunicación mejoraría, sin embargo, en los hogares donde hay violencia, ésta aumenta. Ya han existido situaciones de compañeras asesinadas.

Las acciones

Dentro del movimiento cooperativo se amplió el plazo de pago para las mujeres que tenían crédito, con el propósito de que pudieran reactivarse.

Apro Mujer ha tocado puertas y solicitado donaciones para elaborar los “diarios” (canasta básica de alimentos) y los entrega a las familias de escasos recursos que están pasando hambre debido a la pandemia; ninguna de las socias los recibe. Dichos “diarios” se donan en la provincia de Heredia, en una comunidad marginada con gente humilde, sencilla y trabajadora. La intención fue acercarse a sectores vulnerables, externos a la organización y otorgarles el mencionado apoyo.

Se ha dado capacitación a las mujeres para que aprendan a usar las plataformas, computadoras y teléfonos inteligentes con el fin de que los consejos de administración de las cooperativas no estén incomunicados, sin tomar decisiones y acciones en el lugar donde están ubicadas. Esta acción está dirigida a las socias ya que está prohibido que se reúnan más de 30 personas. También la capacitación ha servido para que los hijos de las socias puedan tener clases vía remota porque el resto del año no se abrirán las escuelas.

Se han hecho gestiones para que las compañeras educadoras puedan dar instrucción en aquellos hogares donde es imposible la educación virtual, de manera que los niños puedan seguir avanzando.



Todos los proyectos que lleven a la reactivación económica han sido apoyados por ellas, como el hecho de promover en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la creación de un bono productivo. En caso de que sea aprobado sería significativo no sólo porque reactiva la economía, sino porque aumentará el empleo y se va a abrir la posibilidad de que se generen otros nuevos.

Apro Mujer participó en el Diálogo Nacional Multisectorial con la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular que es una instancia democrática de Costa Rica. La Asamblea representa a todos los sectores sociales del país: cooperativismo, desarrollo comunal, solidarismo, asociaciones de artesanos, etc. Son un total de 177 personas generando proyectos de ley que tienen la intención de llegar a los territorios para que se reactive la economía con acciones comunales productivas. Este proyecto tiene un componente de género muy fuerte, al igual que tecnológico, ya que los territorios deben tenerlo para que los productos, sean éstos para consumo nacional o exportación, cuenten con un control de calidad adecuado.

A través de la capacitación se ha fomentado la solidaridad y sororidad. Esto ayuda a que la gente no acapare y se dé a quienes verdaderamente necesitan apoyo.

La intención de las acciones es, en principio, que la gente tenga oportunidad de satisfacer sus necesidades inmediatas y de seguir adelante con sus proyectos, “el beneficio es la satisfacción del deber cumplido”, en fin, es poner un granito de arena ante esta situación única en el mundo.

La organización ayuda a la incorporación de la mujer a la producción, a satisfacer sus necesidades económicas y sociales. Este objetivo es permanente, no exclusivo para este momento de emergencia, la capacitación tiene un impacto muy importante en cuanto las personas pueden modificar conductas y tener un desarrollo cultural. Una mujer que decía que tenía que soportar la violencia doméstica porque, de lo contrario, quién la iba a



mantener, ahora, con la capacitación, es capaz de desarrollar sus propios proyectos, y se dio cuenta que puede salir adelante sin necesidad de tolerar maltratos. Esto redundó en el desarrollo personal y emocional de la familia. Lo más importante es que se ayude a un niño a tener un mejor futuro, que una niña deje de sufrir y, que se empodere a las mujeres para que alcancen la felicidad y hagan felices a quienes las rodean. Los beneficios para la organización no se cuantifican de manera económica, sino en términos de los servicios que presta y los resultados que éstos tienen.

En una sociedad patriarcal como la de América Latina, las mujeres tienen asignados roles definidos, sobre todo en momentos de crisis y es en ellos cuando han salido a relucir liderazgos producto de las necesidades. Aquí pueden existir oportunidades para que las mujeres dirigentes y con conciencia de género estén listas para no permitir que se les vayan las oportunidades, y a ser partícipes de las acciones que se tomen.

Cada una de las mujeres ha buscado incidir desde donde está para no seguir siendo relegada y poder alcanzar un papel protagónico. Esto no significa que sea tarea fácil, aunque no es imposible. Es difícil medir ahora cuáles serán los cambios concretos, sin embargo, deben estar alertas.

A pesar de la distancia física, ha sido muy positiva la unión de las mujeres en la asociación; su comunicación, la solidaridad, el discurso, tienen una actitud más humilde, de reflexión. La pandemia ha traído cosas buenas porque la gente ha reflexionado; en muchas familias, el estar juntos ha propiciado un reencuentro, un replanteamiento de las relaciones interpersonales.

A nivel de las organizaciones sociales también se ha dado un replanteamiento de las relaciones laborales debido a que se cambiaron conductas y se implementó el teletrabajo, lo que ahorra dinero en transporte. Ha sido positivo el darse cuenta de que el trabajo se puede hacer de otra manera y que es eficiente. Desa-



fortunadamente, la pandemia, a nivel de la sociedad, ha sacado al descubierto las grandes desigualdades sociales.

Una vez que pase la pandemia va a quedar el conocimiento y la experiencia de la solidaridad y la sororidad; ha sido una siembra en terreno fértil que perdurará a través del tiempo. Se ha registrado un cambio de actitud en las mujeres, hay una forma de ver las cosas de manera más solidaria. Las acciones que ellas han realizado para ayudar en estas circunstancias fortalecen la solidaridad y los vínculos, además de ser un ejemplo para la sociedad en general.





CONCLUSIONES

Los diferentes casos presentados en esta publicación dan cuenta de la pluralidad de actores colectivos que participan en la reactivación desde abajo ante la crisis de la pandemia en América Latina y el Caribe. A diferencia de la “reactivación” que se presenta en los reportes de los organismos internacionales y de las instituciones públicas, la “reactivación” que intentamos visibilizar no es a partir de la reconstitución del mecanismo de producción de ganancia a través de la explotación de mano de obra. No es una reactivación que se dirige únicamente al restablecimiento de los circuitos mercantiles de producción y consumo en función de la reproducción del actual modelo económico en crisis. Los casos de estudio nos permiten vislumbrar el protagonismo de una red amplia y difusa de sujetos muy diferentes (cooperativas, asociaciones de la sociedad civil, sindicatos, instituciones religiosas), cuyas acciones autoorganizadas se insertan en el horizonte de la economía social y solidaria o de la economía popular, para resolver necesidades inmediatas de sus integrantes y de la comunidad en la cual participan, y construir relaciones sociales centradas en la dignidad de los seres humanos y en los valores de la solidaridad y la cooperación.

La pluralidad de las formas organizativas y de las acciones que se han descrito en esta publicación reflejan la heterogeneidad que constituye el campo de esta otra economía, normalmente invisibilizada o percibida como dependiente o como producto secundario de la economía “primaria” capitalista. Se trata de una



economía en el sentido más originario del término: una economía como reglamentación del *oikos*, como gestión de los recursos de un determinado ambiente para la satisfacción de las necesidades. En este sentido, la colección de casos también puede ser leída como inventario de la multiplicidad de formas a través de las cuales se presentan las prácticas de resistencia y de construcción de alternativas ante la crisis del actual modelo económico. Esta pluralidad de las acciones estudiadas procede de las diferentes especificidades territoriales, culturales y subjetivas a partir de las cuales cada experiencia se constituye, mostrando una intervención social que no sigue patrones o lineamientos únicos, sino que se configura de manera coyuntural y particular al interior de cada contexto. También refuerza la idea de que hoy, las propuestas para el cambio social no hay que centrarlas en la acción de algún actor prioritario o al interior de un ámbito específico, sino que las prácticas para sobrevivir y resistir, dentro del actual modelo económico y social, se presentan bajo múltiples formas y dentro de diversas escalas, es decir, ven la participación de diferentes actores sociales que intervienen para resolver sus propias necesidades, enfrentando los problemas que afectan sus lugares de vida y de trabajo.

Quisimos agrupar esta multiplicidad de formas bajo la definición de “reactivación desde abajo”. Una reactivación que, por lo tanto, en sus prácticas para garantizar la sobrevivencia de quienes están involucrados, a través de acciones cotidianas de producción, de solidaridad y de lucha, también de fortalecimiento de procesos reivindicativos y de construcción, permite identificar líneas de huida, espacios para alternativas al mundo económico precrisis. Sobre todo, nos hace reconocer que la reactivación desde abajo no se concibe sólo en el ámbito de la producción económica de tipo mercantil, sino también se presenta en los terrenos del cuidado de la persona, del fortalecimiento de vínculos sociales y solidarios, y de los derechos sociales exigidos al Estado.



Al interior de esta pluralidad de formas, a través de las cuales la economía social y solidaria se expresa, en las experiencias estudiadas en esta publicación distinguimos analíticamente tres tipos de modalidad organizativa. Primero, algunas intervienen mayoritariamente en el ámbito asistencial y de apoyo a la población vulnerable; segundo, aquellas que se presentan como emprendimientos económicos de tipo cooperativo; y tercero, las que adquieren la forma de organizaciones sociales o sindicales que luchan para implementar la autoorganización de sus afiliados y para tener acceso a los derechos sociales. Las respuestas implementadas por estos casos en la pandemia también se pueden resumir alrededor de tres tipos generales que van desde: 1) las acciones asistenciales dirigidas a limitar los efectos inmediatos de la pérdida de empleo e ingresos; 2) las diferentes medidas de adaptación de la actividad económica dentro del nuevo escenario espacial y normativo de la pandemia; hasta 3) las prácticas de lucha y de negociación con las instituciones estatales para alcanzar derechos sociales. Estos tres tipos de respuestas no hay que pensarlos como expresión de una cierta forma organizativa. En efecto, parecería obvio que las organizaciones asistenciales hayan promovido respuestas de corte asistencial, las cooperativas respuestas para readaptar la actividad económica, y las organizaciones sociales respuestas en el terreno reivindicativo. Sin embargo, en los casos estudiados se observa que varias de las experiencias han implementado respuestas que combinan los diferentes tipos y escalas de acciones. Por ejemplo, MTC, UTEP e Iprofoth registran tanto acciones dirigidas a otorgar bienes o servicios básicos a sus integrantes que han perdido empleo e ingresos, como negociaciones con las instituciones para alcanzar protección social y reconocimiento de ciertas categorías de trabajadores al interior del esquema de los derechos sociales.

En el caso de las acciones dirigidas a adaptar las actividades económicas al interior del contexto de la crisis se observa una pluralidad de intervenciones. Algunas se relacionan con la nece-



sidad de convertir ciertos aspectos productivos en función de la demanda de los productos durante la pandemia o ante la reducción de ventas; otras intervenciones, en cambio, se han presentado en el aspecto de la reconfiguración del espacio o de la logística ante la necesidad de organizar lugares de comercio respetando las medidas de distanciamiento, de promover modalidades alternativas de venta o entrega de las mercancías, o simplemente de organizar los lugares de trabajo en función del respeto de las medidas sanitarias para el cuidado de los trabajadores. En particular se observa el intento de muchas experiencias de fortalecer el uso de instrumentos digitales para diferentes finalidades, desde la comunicación interna, hasta la comercialización de sus productos o el acceso a servicios.

Los ejemplos de reactivación desde abajo que se han presentado en esta publicación dan cuenta de la capacidad de la sociedad civil organizada, desde lo local y lo particular, para enfrentar los problemas sociales ampliados por las crisis de la pandemia. En todos los casos se puede observar la eficacia de las medidas dirigidas a reducir las afectaciones a los ingresos familiares generados por la pérdida de empleo y de ventas que se han presentado bajo la forma de ayudas asistenciales, en otros en adaptaciones para mantener en función la actividad económica y, en el caso de Argentina, en la forma de medidas de apoyo gubernamental obtenidas gracias a la presión social. En particular, lo que se observa es que estas medidas han beneficiado a figuras de trabajadores que a menudo son excluidos del reconocimiento social dentro de las protecciones del derecho laboral o de las medidas de los derechos sociales debido al carácter informal de su trabajo o a la ausencia de reglamentación para su categoría.

Como han demostrado los estudios sobre las organizaciones de base comunitaria en el neoliberalismo, también en los casos estudiados se observa que la existencia de tejidos comunitarios o asociativos consolidados ha representado una de las condiciones



principales para implementar respuestas colectivas y tendencialmente eficaces dentro de la crisis de la pandemia. En particular, por lo que atañe a las experiencias que intervienen directamente en los circuitos de producción económica, se observa la capacidad de las cooperativas de adaptarse rápidamente a los nuevos requerimientos determinados por la crisis.

Hay que resaltar que, además de las estructuras organizativas propias e internas de cada organización, muchas de las acciones en la crisis se han implementado a través de redes de relaciones con otros actores en diferentes escalas, desde el espacio local o territorial, hasta las alianzas a nivel nacional o los vínculos con fundaciones internacionales. Estas redes han otorgado mayor capacidad de intervención a nivel local, de presión política en el escenario nacional o, incluso, acceso a financiamientos internacionales.

Si todas las experiencias estudiadas han mostrado la capacidad de reducir las afectaciones socioeconómicas inmediatas de sus integrantes, son pocas las que han concebido estas respuestas desde una perspectiva que no se limita a regresar a la situación anterior a la pandemia, sino que apuestan para que en el contexto de crisis se fortalezcan procesos organizativos y productivos que tiendan a no reproducir las relaciones desiguales que estructura la sociedad actual. Esta apuesta se ha encontrado, principalmente, en los representantes de aquellas experiencias que asumen la forma de organización social o sindical.

Los niveles dentro de los cuales se observan tendencias potencialmente transformadoras dentro de la crisis de la pandemia son, por un lado, el subjetivo y relacional de las personas y, por el otro, el del reconocimiento dentro del marco estatal de los derechos sociales. Con respecto al primer ámbito, los representantes de MTC de Guatemala observan que la experiencia de la pandemia, en las comunidades rurales donde está presente la organización, ha permitido una revaloración de elementos culturales propios que



pueden frenar las tendencias al individualismo y al consumismo, a través del reconocimiento de la importancia de la autenticidad de los productos agrícolas locales, de los recursos fitoterápicos del territorio y de los conocimientos médicos locales y terapias tradicionales. En cambio, los representantes de la UTEP de Argentina observan que la experiencia de las carencias materiales y del riesgo sanitario en la pandemia ha generado un fortalecimiento de los lazos comunitarios y solidarios entre los vecinos de las colonias pobres. En el ámbito del reconocimiento dentro de los derechos sociales se registra que estas dos organizaciones han aprovechado el contexto de la crisis para promover, en alianza con otros actores sociales y sindicales, acciones de presión y negociación con el Estado para alcanzar el reconocimiento de ciertas figuras de trabajadores y sus correspondientes medidas de protección social. También lo ha hecho el Iprofoth con respecto al tema de generar un marco reglamentario y de reconocimiento del trabajo asalariado en el hogar.

La crisis para estos actores no ha representado solamente una situación en la cual se interviene para reducir las afectaciones a sus integrantes, sino un kairós, como afirman en Argentina, para fortalecer la iniciativa colectiva de corte emancipador.



BIBLIOGRAFÍA

- ADAMOVSKY, E. (2007). *Más allá de la vieja izquierda. Seis ensayos para un nuevo anticapitalismo*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- BASCHET, J. (2015). *Adiós al capitalismo. Autonomía, sociedad del buen vivir y multiplicidad de mundos*. España: Ned Ediciones.
- BECK, U. (2000). *Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- BORÓN, A. (2001). “La selva y la polis. Reflexiones en torno a la teoría política del zapatismo” en *OSAL*, CLACSO, Buenos Aires, núm. 4, junio, 2001: 177-186.
- BUSTELO, E. S. (2005). “¿Retornará ‘lo social’?”, en Boltvinik, Julio y Araceli Damián (coords.), *La pobreza en México y el mundo. Realidades y desafíos*. México: Siglo XXI Editores / Gobierno de Tamaulipas.
- CAFFENTZIS, G. y S. FEDERICI. (2013). “Commons against and beyond capitalism”, en *Upping the anti*, núm. 15, Septiembre, 2013: 83-91.
- CARELLA, F y S. FREAN. (2021). Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19. Migración laboral, movilidad en el mundo del trabajo ante la pandemia de la COVID-19 en América Latina y el Caribe. OIT. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_778606.pdf
- CEPAL. (2019). Panorama Social de América Latina 2019. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39949/1/S1600238_es.pdf
- _____. (2020). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2020. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/91/S2000881_es.pdf
- _____. (2020a). Informe Especial COVID-19 N. 4. Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación, 2020. Disponible en:



https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf

- _____. (2020b). El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en los mercados laborales latinoamericanos, Julio 2020, Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45864-impacto-la-crisis-sanitaria-covid-19-mercados-laborales-latinoamericanos>
- _____. (2020c). “Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-COVID-19”, *Informe especial COVID-19*, núm. 8, 15 de octubre de 2020.
- _____. (2020d). “La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe”, *Informes COVID-19*, Santiago, abril.
- _____. (2021). “Las personas afrodescendientes y el COVID-19: develando desigualdades estructurales en América Latina”, *Informes COVID-19*.
- _____. (2021b). “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”. Informe Especial COVID-19, núm. 9.
- CEPAL y OIT. (2020). “La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafío de política”. Santiago: *Coyuntura Laboral en América Latina y El Caribe*, núm. 23.
- CEPAL y OXFAM. (2016). Tributación para un crecimiento inclusivo, 2016. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39949/1/S1600238_es.pdf
- CHÁVEZ, R. (2008). La economía social: dos décadas generando empleo, tejido productivo y cohesión social en Europa. Disponible en: http://www.eco.uva.es/historico/2008/sem_ecosoc/micro/PRC.pdf
- CHENA, P. I. (2017). “La economía popular y sus relaciones determinantes”, en Revista *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales*, Universidad Nacional de Jujuy, núm. 53. Disponible en: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/185/18558359009/html/index.html>
- CORAGGIO J. L. (2012), “La Economía Social y Solidaria (ESS) en América Latina”, en GUILLÉN, A. PHÉLAN y M. PHÉLAN, *Construyendo el Buen Vivir*. Cuenca: Universidad de Cuenca/PYDLOS: 236-256. Disponible en: https://www.coraggioeconomia.org/jlc_public_complet.htm



- DARDOT, P. y C. LAVAL. (2015). *Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI*. Barcelona: Gedisa Editorial [2014].
- DENNING, M. (2010). “Vida sin salario”, en *New Left Review*, núm. 66: 79-97.
- ECONOMÍA FEMINISTA CLACSO. (2020). Grupo de Trabajo CLACSO Economía feminista emancipatoria, “Posicionamiento del grupo de trabajo de CLACSO sobre economía feminista emancipatoria frente a la crisis mundial del COVID-19”, 13 de mayo de 2020. Disponible en: <http://clacso.org/posicionamiento-del-grupo-de-trabajo-economia-feminista-emancipatoria-nodo-michoacan-frente-a-la-crisis-mundial-por-el-covid-19>
- ECONOMÍA POPULAR CLACSO. (2020). Grupo de Trabajo CLACSO. *Economía popular: mapeo teórico y práctico, Economías populares en la pandemia. Cartografía provisoria en tiempos de crisis global y aislamiento*, CLACSO, s.l.
- ESCOBAR, A. (2010). *Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales*. Lima: Programa Democracia y Transformación Global / Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- ESTEVA, G. (2013). “La insurrección en curso”, en Raúl ORNELAS (coord.). *Crisis civilizatoria y superación del capitalismo*. México: UNAM: 129-216.
- _____. (2020). “El día después. Se está produciendo un despertar”, en *Revista de la Universidad Iberoamericana*, Año XII, núm. 68, junio-julio de 2020: 24-35.
- FEDERICI, S. (2013). “El feminismo y las políticas de lo común en una era de acumulación primitiva”, en *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Traficantes de sueños*. Madrid: 243-260.
- _____. (2013a). “La reproducción de la fuerza de trabajo en la economía global y la inacabada revolución feminista”, en *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Traficantes de sueños*. Madrid: 153-180 [2008].
- _____. (2013b). “Mujeres, globalización y movimiento internacional de mujeres”, en *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico,*



reproducción y luchas feministas, Traficantes de sueños. Madrid: 143-151 [2011].

- FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M. I. (2018). “Más allá de la precariedad: prácticas colectivas y subjetividades políticas desde la economía popular argentina”, en *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*. https://www.researchgate.net/publication/327409850_Mas_alla_de_la_precariedad_practicas_colectivas_y_subjetividades_politicas_desde_la_economia_popular_argentina
- FERNÁNDEZ DÁVALOS, D. (2020). “Necesitamos un nuevo modelo económico. 7 reflexiones en ocasión del Covid-19”, en *Revista de la Universidad Iberoamericana*, Año XII, núm. 68, junio-julio de 2020: 4-5.
- FILAC. (2020). Consejo Directivo del FILAC. “Declaración del FILAC frente a la pandemia del Covid-19”, marzo de 2020. Disponible en: <http://www.filac.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/comunicado-filac.pdf>
- FILAC y FIAY. (2020). “Los pueblos indígenas ante la pandemia del COVID-19”. *Primer informe regional*. Disponible en: <https://www.alainet.org/es/articulo/206407>
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. (2021). “World Economic Outlook, January 2021”, en: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update>
- FOUCAULT, M. (2002). “Clase del 7 de enero de 1976”, en *Defender la sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica: 15-31.
- GAGO, V. (2014). *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular*. Buenos Aires: Tinta Limón,
- _____. (2016). “10 hipótesis sobre las economías populares (desde la crítica a la economía política)”, en *Nombres*, Revista de Filosofía, núm. 30. Economía: 181-200.
- GAIGER, L. (2007). “La Economía Solidaria y el capitalismo en la perspectiva de las transiciones históricas” en Coraggio, J. L. (org.). *La economía social desde la periferia. Contribuciones latinoamericanas*, Buenos Aires: Colección de lecturas sobre Economía Social, Altamira, UNGS: 79-109.
- _____. (2019). “From Informality to Popular Economy: distinguishing realities and connecting approaches”, en *Ciências Sociais Unisinos*, 55(1), janeiro/abril: 97-110.



- GORDON, D. (2005). “La medición internacional de la pobreza y las políticas para combatirla”, en BOLTVINIK, J. y D. ARACELI (coords.), *La pobreza en México y el mundo. Realidades y desafíos*. México: Siglo XXI Editores / Gobierno de Tamaulipas: 45-46.
- GUERRA, P. (2020). “De la economía social y la economía solidaria a las economías transformadoras: antecedentes en la construcción teórica de un tercer sector de la economía”, en Serie Documentos de Trabajo. Montevideo, núm. 19, marzo.
- HARDT, M. y A. NEGRI. (2011). *Commonwealth, El proyecto de una revolución del común* [Trad.: Raúl Sánchez Cedillo]. Madrid: Akal [2009].
- HARVEY, D. (2004). *El nuevo imperialismo*, España: Ediciones Akal [2003].
- HEBRERO, V. (2020). “Latinoamérica, el continente más desigual del mundo: Cepal”. Publicado en *El Espectador*. Disponible en: <https://www.elespectador.com/economia/latinoamerica-el-continente-mas-desigual-del-mundo-cepal-articulo-903452/>
- HIRSCH, J. (1996). “El Estado fordista de seguridad y los nuevos movimientos sociales” en Hirsch, Joachim, *Globalización, capital y Estado*, Ciudad de México: UNAM: 21-36.
- _____. (2004). *Globalización, capital y Estado*. Ciudad de México; UNAM.
- HOLLOWAY, J. (2002). *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy*. Buenos Aires: Ediciones Herramienta.
- _____. (2004). “Gente común, es decir, rebelde. Mucho más que una respuesta a Atilio Borón”, en *Chiapas*, núm. 16, Ediciones ERA-IEC.
- INEGI. (2021). Glosario de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=ENOE15>
- LARA, A. L. (2020). “Causalidad de la pandemia, cualidad de la catástrofe”, en *eldiario.es*, 29 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.eldiario.es/interferencias/Causalidad-pandemia-cualidad-catastrofe_6_1010758925.html
- LESSENICH, S. (2020). “El nacionalismo epidémico y los límites de la solidaridad”, en *Teoría & Cambio social. La nueva América Latina. La crisis mundial del Covid-19 (I)*, Boletín del Grupo de Trabajo

- 
- Teoría Social y Realidad Latinoamérica*, CLACSO, núm. 1, mayo 2020: 58-61.
- MARTÍNEZ, A. J. (2004). *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. España: Icaria Editorial [2002].
- MARTÍNEZ, M. (2015). “La economía social y solidaria (Una mirada desde la teoría y la práctica)”, *Cuaderno de investigación*, Ibero Puebla. Disponible en: <https://repositorio.iberopuebla.mx/handle/20.500.11777/239>
- MARX, K. (1980). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858*, Vol. I. México: Siglo XXI Editores.
- MODONESI, M. y M. IGLESIAS. (2016). “Perspectivas teóricas para el estudio de los movimientos sociopolíticos en América Latina: ¿cambio de época o década perdida?” en *Raíz Diversa*, vol. 3, núm. 5, enero-junio: 95-124.
- NAVARRO, M. L. (2015). *Luchas por lo común. Antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes naturales en México*. México: ICSYH-BUAP / Bajo Tierra Ediciones.
- NAVARRO, M. L. y C. E. PINEDA. (2009). “Luchas socioambientales en México. Prefiguración de subjetividades y horizontes de sentido anticapitalistas”, en *Bajo el volcán*, núm. 14, ICSYH-BUAP: 81-106.
- OCHA. (2020). “Pueblos Indígenas y Covid-19 en América Latina: un enfoque humanitario”. *Pueblos indígenas y COVID-19 en América Latina*, septiembre 2020.
- OIT. (2015). Recomendación 204. Sobre la transición de la economía informal a la economía formal. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meeting-document/wcms_379098.pdf
- _____. (2020). Labour Overview in times of COVID-19. Impact on the labour market and income in Latin America and the Caribbean. September, 2020. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_756697.pdf
- _____. (2020a). Observatorio de la OIT. El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera edición, 29 de abril de 2020. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743154.pdf



- _____. (2020b). Observatorio de la OIT. El COVID-19 y el mundo del trabajo. Quinta edición, 30 de junio de 2020. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_749470.pdf
- _____. (2020c). Observatorio de la OIT. La COVID-19 y el mundo del trabajo. Sexta edición, 23 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf
- _____. (2020d). World Employment and Social Outlook. Trends 2020, ILO, Geneva, 2020. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_734455.pdf
- _____. (2020e). #MiFuturoDelTrabajo. Empleo juvenil en tiempos de la COVID-19: el riesgo de una “generación del confinamiento”. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/briefingnote/wcms_753103.pdf
- _____. (2021). Observatorio de la OIT: La COVID19 y el mundo del trabajo. Séptima edición, 25 de enero de 2021. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
- OMC. (2020). Second quarter 2020 merchandise trade, 23 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/merch_latest.pdf
- OMS. (2020). COVID 19: cronología de la actuación de la OMS. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline--covid-19>
- ONU. (2020). “Responsabilidad social compartida, solidaridad mundial: responder ante las repercusiones socioeconómicas de la enfermedad por coronavirus de 2019”, marzo de 2020. Disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/articlefile/eosg_covid-19_socioeconomic_report-2005791s.pdf
- _____. (2020b) Informe: El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, julio 2020.
- ONU INDÍGENAS. (2020). Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Pueblos indígenas y COVID-19 en

- 
- América Latina. Un enfoque humanitario”, septiembre 2020. Pueblos indígenas y COVID-19 en América Latina (reliefweb.int)
- ONU MUJERES. (2020). “Covid-19 en América Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis”, marzo 2020. Disponible en: <https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-la-gestion-de-respuesta>
- PAPA FRANCISCO. (2020). Carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, Santa Sede, 2020.
- PLATAFORMA INDÍGENA. (2020). Plataforma Indígena Regional frente al Covid-19, “Los pueblos indígenas ante la pandemia del Covid-19. Primer informe regional”, FILAC y FIAIY, Bolivia, 2020.
- _____. (2020a). Plataforma Indígena Regional frente al Covid-19, “Los pueblos indígenas ante la pandemia del Covid-19. Segundo informe. Comunidades en riesgo y buenas prácticas”, FILAC y FIAIY, Bolivia, 2020.
- _____. (2020b). Plataforma Indígena Regional frente al Covid-19, “Los pueblos indígenas ante la pandemia del Covid-19. Tercer informe. Comunidades resilientes. Buenas prácticas de los pueblos indígenas ante la pandemia”, FILAC y FIAIY, Bolivia, 2020.
- QUIJANO, A. (2007). Prólogo: “José Carlos Mariátegui: reencuentro y debate”, en Mariátegui, José Carlos, *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*, Venezuela: Fundación Biblioteca Ayacucho [1978], pp. IX-CXII.
- ROUX, R. (2005). *El príncipe mexicano. Subalternidad, historia y Estado*. México: Ediciones Era.
- _____. (2009). “El príncipe fragmentado. México: despojo, violencia y mandos”, en ARCEO, Enrique y Eduardo BASUALDO (coords.), *Los condicionantes de la crisis en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO, Buenos Aires: 241-274.
- ROY, A. (2020). “La pandemia es un portal”, en *Desinformémonos*, 6 de abril. Disponible en: <https://desinformemonos.org/la-pandemia-es-un-portal-arundhati-roy/>
- SALAZAR-XIRINACHS, J. M. y J. CHACATLANA (coords.) (2018). *Políticas de formalización en América Latina. Avances y Desafíos*. OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2018. Disponible en:



https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_645159.pdf

- SEOANE, J. (2006). “Movimientos sociales y recursos naturales en América Latina: resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas” en *Sociedade e Estado*, Brasilia, vol. 21, núm. 1, enero-abril: 85-107.
- SVAMPA, M. (2012). “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina”. Buenos Aires: OSAL, CLASO. Año XIII, núm. 32, noviembre: 15-38.
- TREMBLAY, C. (2009). “Advancing the social economy for socio-economic development: International perspectives”, en *Canadian Social Economy Research Partnerships*, No. 1; Public Policy Paper Series.
- ZIBECHI, R. (2003). “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos”, en OSAL, CLASO, Buenos Aires, núm. 9, enero: 185-188.
- _____. (2001). *Zapatisti e Sem Terra. Movimenti sociali ed insorgenza indigena*, Zero in Condotta, Milano, Italia. [Texto original: *La mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación*, Editorial Nordan / Comunidad, Montevideo.]





Reactivación desde abajo. La pandemia y la sociedad civil en América Latina, coordinado por Yolanda C. Cruz Contreras, Daniele Fini, Alessandro Grassi y Marcela Ibarra Mateos, se terminó de imprimir en mayo de 2022, en Gráfica Premier, SA de CV, 5 de febrero núm. 2309, colonia San Jerónimo Chicahualco, Metepec, Estado de México, CP. 52170, siendo rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Mario Ernesto Patrón Sánchez y coordinador del Área de Publicaciones y Librería Universitaria, Rogelio Zamora Martínez. La coordinación editorial estuvo a cargo de Ricardo Escárcega Méndez, la corrección y formación tipográfica estuvieron a cargo de Susana Plouganou Boiza. En su composición tipográfica se utilizaron tipos de la familia Times New Roman de 9, 10, 11, 12 y 15 puntos. La edición consta de 500 ejemplares.